

HACIA UN MUSEO DE HISTORIA DEL DERECHO PUERTORRIQUEÑO

ARTÍCULO

JOSÉ JULIÁN ÁLVAREZ GONZÁLEZ*

I. Salón de Arte Pictórico	781
II. Salón de Fotografías y Caricaturas.....	783
III. Salón de Objetos Valiosos y Otras Curiosidades.....	787
Epílogo.....	794

CUAL MACIZA AVE FÉNIX, SE LEVANTA LA IMPONENTE ESTRUCTURA QUE HA triplicado la capacidad de la principal biblioteca de Derecho del país: la biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

En los corrillos de la Escuela se discute animadamente una interrogante trascendental: ¿Qué rayos hará María Otero para llenar la biblioteca?! Deseo terciar en el debate y sugerirle a la colega una alternativa que no solo realzaría el atractivo de la biblioteca sino que además podría constituir una excelente fuente de fondos adicionales para aumentar sus recursos. Propongo que se destine parte de su segundo piso a un museo jurídico. Propongo que se bautice con el nombre de Museo Carmelitano de Historia del Derecho Puertorriqueño.

La necesidad de un museo de este tipo en Puerto Rico es imperiosa. En él podrían albergarse todos aquellos objetos de arte, antigüedades y curiosidades que nuestros jurisprudentes de Puerta de Tierra continuamente mencionan y describen en sus opiniones. De esta forma, el estudiante de Derecho y el abogado podrían admirar y palpar las raras y exquisitas joyas culturales que en la actualidad solo conocen a través de las opiniones de nuestro Tribunal Supremo. El derecho autóctono puertorriqueño clama a gritos por un museo. Construyámoslo.

Claro está, la creación de un museo es un proceso lento, gradual y costoso. Sugiero, por lo tanto, que las distintas salas de las que deberá constar nuestro museo se vayan formando y abriendo de forma escalonada. Así se podrán ir corrigiendo errores, introduciendo modificaciones y, en general, aprovechando las lecciones de la experiencia. Propongo que de inmediato nos demos a la tarea de recolectar y clasificar las piezas que adornarán la que sin lugar a dudas debe ser la sala pionera: la Sala Díaz Cruz. Indudablemente, las opiniones de don Jorge hacen referencia a un inagotable caudal de objetos de arte jurídico que debemos preservar cuanto antes.

* Catedrático, Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Arquitectónicamente, concibo la Sala Díaz Cruz como un templo oriental. De esta forma se realzará aun más la escultura que debe colocarse en su centro, presidiéndola: un colosal Buda impasible¹ que bien podría tomar prestadas las facciones de don Jorge. Debe llamarse a nuestros escultores patrios a un concurso para seleccionar la mejor producción. Las esculturas que no alcancen el máximo galardón no se desecharían. Podrían donarse al municipio de Yauco para ser colocadas *seriatim* a la entrada del pueblo del café.

Al pie de la estatua del Buda debe, naturalmente, colocarse un altar. Podemos escoger entre el “altar de abstracciones”² y “el altar de un liberalismo extremo”.³ Sobre el ara del altar debe colocarse una placa que rece: “No es tiempo de retornar al rito y a la liturgia procesal que antaño franqueaban una misteriosa puerta trasera a la justicia”.⁴ El retablo del altar debe consistir de una formidable losa de mármol de Carrara en la que aparezca tallada la siguiente inscripción:

El debido proceso no es abstracción apocalíptica que de sólo invocarla infunda temor de Dios al tribunal y paralice al adversario.⁵

El recuadro del retablo deberá contener otra inscripción que sentencie:

El silencio de la [Regla de Procedimiento Criminal] 240(d) no es más que la abstención de repetir; no es silencio que conmina, ni tabú paralizante.⁶

El templo oriental debe estar rodeado por una muralla china en la que aparezca tallado el requisito de notificación previa para demandar al Estado⁷ y debe contener un bonito jardín pletórico de frondosos recursos procesales.⁸

La sala Díaz Cruz debe tener diferentes salones de exhibición, separados entre sí por la “cortina del secreto”.⁹ Propongo que los principales salones sean el

1 Pueblo Díaz v. ELA, 106 DPR 854, 874 (1978) (“O es que para proteger sus escasos recursos de una demanda, venía el Municipio obligado a permanecer impasible como un Buda, indiferente a la angustia de sus residentes?”).

2 *In re* Félix, 111 DPR 671, 678 (1981) (“Rehusó sacrificar seres humanos en altar de abstracciones”).

3 *Hermina González v. Srio. del Trabajo*, 107 DPR 667, 675 (1978) (“La sentencia revisada sacrifica [la vida institucional] en el altar de un liberalismo extremo, rechazado aun en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre por las Naciones Unidas”).

4 *Pueblo v. Tribunal Superior*, 104 DPR 626, 631 (1976).

5 *Domínguez Talavera v. Tribunal Superior*, 102 DPR 423, 428 (1974).

6 *Hernández Ortega v. Tribunal Superior*, 102 DPR 765, 773 (1974).

7 *Rodríguez Sosa v. Cervecería India*, 106 DPR 479, 491 (1977) (“El estatuto de prescripción, de firme raigambre en nuestro Derecho civil común, es vulnerable y responsivo a propósitos de necesidad y utilidad social, mientras una inoperante notificación previa adquiere contornos de muralla china”).

8 *Rabell Martínez v. Alcaldes Cárceles de PR*, 104 DPR 96, 100 (1975) (*per curiam* de pluma inconfundible) (“El presente caso es una muestra de la irresistible tendencia a tolerar el crecimiento frondoso de los recursos procesales sin llegar al ‘juicio rápido y público’ que con profunda reverencia a la libertad y cuidadoso acopio de sus elementos integrantes garantiza nuestra Constitución”).

9 *Pueblo v. Álvarez Rosario*, 108 DPR 112, 129 (1978) (“Ante el explícito texto de la ley, restringir la revelación de antecedentes penales de un acusado que se sienta a declarar, es tender una cortina de

Salón de Arte Pictórico, el Salón de Fotografías y Caricaturas y el Salón de Objetos Valiosos y Otras Curiosidades. En todos y cada uno de ellos deberán colgar prominentes letreros que ordenen: “Silencio (de Esfinge)”.¹⁰ Sus pisos estarán cubiertos por la alfombra roja que el Tribunal se negó a tender “para la egregia salida del pleito de la demandada”.¹¹

Paso a continuación a describir lo que a mi juicio debe ser el contenido de los distintos salones de exhibición antes mencionados.

I. SALÓN DE ARTE PICTÓRICO

1. La famosa pintura de Campeche que presenta al “pájaro prehistórico desvelado ante una ecología transformada”.¹²
2. Copia de la singular obra de Rubens, “El Rapto de las Sabinas”, que, como todos sabemos, fue producto de “la concupiscencia de soldados fecundando mujeres al azar”.¹³
3. Óleo impresionista: “La utópica premisa” de *Ramos v. Srio. de Comercio*,¹⁴ “buena solamente para gobernar el cielo”, sucumbiendo “en mares de tormenta”.¹⁵ El mar embravecido nos recordará además el “flujo y reflujo de la marea decisional”.¹⁶

secreto que aísle al jurado de la verdad y le mantenga ignorante del carácter del sujeto que juzga. De paso convierte al reincidente en acusado”).

¹⁰ *Ramos v. Srio. de Comercio*, 112 DPR 514, 529 (1982) (“Hasta que un empleado de confianza así removido haga acopio de la prueba, que en estos casos está a la mano, y en la vista de un *injunction* demuestre hasta la saciedad que aunque su superior ocultó la verdadera razón con silencio de Esfinge, ésta no fue otra que discrepancia ideológica”).

¹¹ *ACAA v. Travelers Ins. Co.*, 104 DPR 844, 847 (1976) (“No es cuestión de tender una alfombra roja para la egregia salida del pleito de la demandada Travelers”).

¹² *Ortiz Cruz v. Junta Hípica*, 101 DPR 791, 795 (1973) (“El concepto ‘absoluto’ trae raíz y connotación ligadas al derecho divino de los reyes y a las facultades omnímodas de los gobernadores militares que desentonan con los principios de balance, igualdad y debido proceso de ley que informan la sociedad contemporánea. Es como un pájaro prehistórico desvelado ante una ecología transformada”).

¹³ *Figueroa Ferrer v. ELA*, 107 DPR 250, 293-94 (1978) (“La Ley es el signo externo de la moral de un pueblo. Mediante la institución del matrimonio y su reglamentación la sociedad se adentró en la civilización y se alejó de la barbarie de la promiscuidad en que se cumplía el impulso reproductor de la especie sin más aliciente que el instinto que dirige los animales. Así ocurría entre las primitivas tribus guerreras en que la noción de paternidad y filiación se perdía en la concupiscencia de soldados fecundando mujeres al azar porque al Estado sólo le interesaba asegurar una continua producción de hombres para la lucha”).

¹⁴ *Ramos v. Srio. de Comercio*, 112 DPR 514 (1982).

¹⁵ *Id.* en la pág. 530 (“El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. En mares de tormenta ya a la vista, sucumbirá la utópica premisa que hoy adopta el Tribunal, buena solamente para gobernar el Cielo”).

¹⁶ *Industrial Equipment Corp. v. Builders Ins. Co.*, 108 DPR 290, 309 (1979) (“La estabilidad y certeza de la jurisprudencia en su aspiración a ser fuente de derecho, guía de la comunidad jurídica y de los contratantes, inevitablemente sufre con este flujo y reflujo de la marea decisional”).

4. Retrato de Rodón de doña Concepción Ramírez, la insigne “buena samaritana a la fuerza en las tinieblas de su abismal ignorancia del negocio jurídico en que fue envuelta”.¹⁷
5. Copia del *Entierro del Conde de Orgaz*, de El Greco, para que siempre nos recuerde que “la más radical causa de imposibilidad de comparecer . . . es la muerte”.¹⁸
6. Epopeya pictórica: óleo de aquella famosa inundación en la que el nuevo estilo de moral decadente contaminó todos los resquicios.¹⁹
7. Pintura alegórica: representación del rayo de Júpiter cayendo sobre la cabeza del juez Marrero Torres (vestido de pelotero, por supuesto).²⁰
8. Oleo de la famosa epopeya en la que un “desfile de empleados cobrando dos veces” lanzaron al mar a “municipios arruinados”. En el horizonte se divisa al gobierno insular en forma de “*tabula in naufragio*”.²¹
9. Retablo románico representativo de “la vida eterna que al parecer disfrutan algunos expedientes judiciales [y] de la resurrección del expediente con la infusión de reclamación extraña y desprovista de contemporaneidad con el tiempo en que el pleito tuvo su curso”.²²
10. Otro Rodón: Retrato del licenciado Pedro Roldán Figueroa, en uniforme naval. Al pie del cuadro deberá colocarse una tarja explicativa:

¹⁷ *SJ Credit, Inc. v. Ramírez*, 113 DPR 181, 204 (1982) (“La observación en el alegato de la financiera recurrida, y que acoge la opinión, al afecto de que no concibe cómo podía estar coaccionado el consentimiento de doña Concepción Ramírez porque estaba asistida y protegida cuando estampó cruces y huellas por su propio hijo, echa al olvido que éste fue un pobre defensor del interés de su señora madre pues luego de constituirla en su subrogada como deudora, su falta de pago de los intereses desencadenó la ejecución de los bienes de esta señora, que solo la prueba suprimida podía decirnos si fue buena samaritana a la fuerza en las tinieblas de su abismal ignorancia del negocio jurídico en que fue envuelta”).

¹⁸ *Pueblo v. Ríos Nogueras*, 111 DPR 647, 649-50 (1981) (“Solicitó el Pueblo de Puerto Rico que en sustitución de dicho testimonio directo, no disponible por la más radical causa de imposibilidad de comparecer, que es la muerte, se admita como prueba de referencia el relato de ese testimonio según vertido en la vista preliminar”).

¹⁹ *In re Marrero Torres*, 113 DPR 113, 116 (1982) (“Nos reafirmamos en que hoy, como ayer, ni los jueces ni los abogados sometidos a juicio de su conducta tienen derecho a invocar como atenuante el nuevo estilo de moral decadente que como agua de inundación contamina todos los resquicios”).

²⁰ *Id.* en la pág. 120 n. 5 (“Tampoco esto debe desencadenar el rayo de Júpiter sobre su cabeza”). Se advierte cierta ambivalencia mitológica en la opinión, la cual se refiere también al rayo de Zeus. *Id.* en la pág. 117. Claro está, la mezcla de personajes mitológicos griegos y romanos en las opiniones de nuestro Tribunal Supremo no debe extrañarnos dada la famosa proclividad de éste a mezclar y confundir figuras jurídicas de distintos sistemas de Derecho.

²¹ *Estrella v. Mun. de Luquillo*, 113 DPR 617, 622 (1982) (“Súmese al cuadro el desfile de empleados cobrando dos veces con inclusión de los aumentos que haya tenido la plaza durante su cesantía, a costa de municipios arruinados que apenas pueden proveer los servicios públicos esenciales, y el Gobierno insular que es su única *tabula in naufragio* enfrentándose a un déficit cercano a los \$100,000,000”).

²² *Soc. de Gananciales v. Soc. de Gananciales*, 109 DPR 279, 287 (1979) (“Si hay algo más nocivo a la solución justa, rápida y económica que la ‘vida eterna’ que al parecer disfrutan algunos expedientes judiciales, lo es la resurrección del expediente con la infusión de reclamación extraña y desprovista de contemporaneidad con el tiempo en que el pleito tuvo su curso”).

Con la entereza de un capitán de leyenda, cuando vino el fracaso se hundió con su barco, rechazando el alivio y la protección de la Ley de Quiebras a la que acuden sin inhibiciones y sin estigma tantos hombres de negocios.²³

11. Copia de un mural alegórico recientemente excavado en Pompeya. Representa a una mujer que rechaza el régimen ganancial y opta por capitulaciones matrimoniales, “prefiriendo azahares de Minerva a los de Eros”.²⁴
12. Escena bucólica correspondiente al período costumbrista de Goya. Representa a varios niños que juegan con gran cautela y circunspección a orillas de un lago. Debe contener la siguiente leyenda:

Mucho antes de que la voracidad de los complejos industriales secase los manantiales y antes de que el sistema gubernamental de riego plantara nuestras lagunas por canales y embalses cuyas aguas alimentan las turbinas generadoras de energía eléctrica, a lo largo del tiempo y de la historia nuestros niños, especialmente los de montaña adentro, han nacido y crecido junto a los ríos y los lagos, libres en sus juegos y caminatas, cuidándose instintivamente de los peligros del agua como se cuidan del borde de los precipicios en la sierra agreste, a pesar de que su cuna y la primitiva docencia de su ambiente no les dieron las aptitudes excepcionales de inteligencia, vocación de estudio y serenidad que los recorridos le atribuyen al niño ahogado. Preservó sus vidas la temprana y asustadiza noción de peligro que el ser humano intuye desde los albores de su existencia ante la presencia del fuego, los cuerpos de agua, el ruido intenso o el abismo.²⁵

II. SALÓN DE FOTOGRAFÍAS Y CARICATURAS

1. Fotografía de la famosa escena de *Un Chien Andalou*, de Buñuel: *close-up* de la retina del juez Díaz Cruz tras quedar herida por la claridad de la insuficiencia numérica de la impugnación de la elección para la alcaldía de Aibonito.²⁶
2. Fotografía autografiada de Myrna Luz Fermaint, “una sencilla mesera de restaurant, que a riesgo de su tranquilidad y de su vida sirve a la justicia

²³ *In re* Roldán Figueroa, 106 DPR 4, 14 (1977).

²⁴ Ruiz-Sierra v. Registrador, 103 DPR 578, 580 n. 2 (1975) (“Podría resultar a la postre que el régimen de gananciales todavía es útil y conveniente para el matrimonio y que la excepción de algunos malos y deshonestos maridos administradores no debe prevalecer contra el sistema, máxime cuando la mujer puede protegerse contra esa eventualidad dictando las reglas de su elección en capitulaciones matrimoniales, prefiriendo azahares de Minerva a los de Eros”).

²⁵ Ortiz v. Levitt & Sons, 101 DPR 290, 294 (1973) (primera opinión del juez Díaz Cruz).

²⁶ Santos v. Comisión Estatal de Elecciones, 111 DPR 351, 378 (1981) (“La insuficiencia numérica de la solicitud de Francisco Santos para cambiar el resultado en su candidatura a la alcaldía es de claridad que hiere la retina”).

y a su consciencia como en pocos casos de asesinato y robo hoy en día, señalando al homicida primero en la fotografía, y luego en el Tribunal”.²⁷

3. Fotografía aérea del Cañón de San Cristóbal, “uno de los escasos remanentes de hermosura natural de nuestra tierra dignos de conservar en su belleza prístina”.²⁸
4. Fotografía de grupo. Aparecen en ella Hipólito Marcano, Nicolás Nogueiras, Víctor Rodríguez, Luis Duprey, Luis Lausell, Félix Rodríguez, Armando Sánchez, José Eligio Vélez, Evaristo Toledo y Osvaldino Rojas Lugo. En el fondo, sobre un busto de Santiago Iglesias Pantín, aparece inscrita en letras doradas la conocida máxima:

Y no se diga que el proselitismo del líder obrero es distinto al del capitán de precinto porque en Puerto Rico las fronteras entre uno y otro tipo de agrupación son ilusorias, o inexistentes o evanescentes.²⁹

5. Fotografía surrealista: la trágica explosión de Hiroshima superpuesta sobre una imagen de una escuela pública, con la siguiente leyenda:

[L]os efectos venenosos de la introducción de la agitación gremial y el proselitismo político en la escuela perdurarán cuando ya se haya marchado el último de sus agentes al igual que el manto de radioactividad queda después de la fisión nuclear.³⁰

6. Daguerrotipo del antiguo edificio que llevaba el número 155 en la Calle San Sebastián del Viejo San Juan, con la siguiente leyenda: “oscuro edificio sin más linaje de historia que el haber soportado por un siglo los embates de los elementos”.³¹ Al pie de la foto debe colocarse la maqueta del parque de diversiones a construirse por las empresas *Disney* en el Viejo San Juan, una vez demolidos todos sus edificios, de idéntica descripción al de la fotografía.
7. Fotografía de perfil de la niña Sharon Lis Robles, quien dejó de ser “hij[a] de filiación enmarañada”,³² al superarse los “conceptos substantivos y barreras procesales que oponen la pátina de su historia al torrente

²⁷ Pueblo v. Calderón Orta, 110 DPR 835, 850 (1981).

²⁸ Junta de Planificación v. JAFL, 109 DPR 210, 220 (1979).

²⁹ Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 DPR 251, 261 (1979).

³⁰ *Id.* en la pág. 262.

³¹ Fundación Arqueológica v. Depto. de la Vivienda, 109 DPR 387, 392 (1980) (“El daño por el que reclaman compensación los demandantes es ‘daño al patrimonio cultural de todos los puertorriqueños’ por la desaparición de un oscuro edificio sin más linaje de historia que el haber soportado por un siglo los embates de los elementos”).

³² Robles López v. Guevárez Santos, 109 DPR 563, 566 (1980) (“*Agosto v. Javierre, supra*, no legisló añadiendo al citado artículo por decisión judicial una nueva persona, el propio hijo de filiación enmarañada; simple y llanamente le insufló vitalidad de causa de acción y reconoció en el hijo personalidad para reclamar su filiación y promover el derecho que la citada ley especial de 1942 le había conferido”).

impulsador de los derechos del hombre que enriquece la civilización contemporánea”.³³

8. Fotografía de la cárcel Las Cucharas, para recordarnos de la “fuga masiva autorizada” creada por el juez presidente Trías Monge en *Pueblo v. Delgado Rodríguez*.³⁴ En la fotografía debe apreciarse la nueva inscripción que debe colocarse a la entrada a todos los recintos carcelarios:

El castigo conturba el ánimo tanto del que lo sufre como del que lo impone; siempre representa un fracaso del ser humano que en cierta medida a todos empobrece.³⁵

9. Vista frontal del hogar seguro de \$30,000.00 inmortalizado en el Decreto-Ley de *Cruz Cruz v. Irizarry Tirado*,³⁶ con la siguiente leyenda:

Cuando se fuerza el Derecho en busca de una solución preferida el fantasma del mal precedente reaparecerá a atormentarnos.³⁷

La Ley, y no el corazón del juez, es quien decide en nuestro sistema de Derecho.³⁸

El error no causa Derecho.³⁹

10. Composición fotográfica. Edwin Plaza Quiñones, el oficinista del municipio de Adjuntas que demandó al municipio por haberse asignado tareas incompatibles con su cargo, aparece rodeado por los siguientes objetos: el marrón y el cortafrió que tuvo que usar para sacarle las tapas a unos drones, así como los drones; la cisterna que tuvo que limpiar; el inodoro que se le ordenó reparar; la escoba que usó para barrer el garaje municipal; la pala mecánica que tuvo que reparar; los drones de basura que tuvo que vaciar; y, la cabeza de caballo que se le ordenó llevar a analizar a San Juan. En el calce de la foto deberá leerse:

Ni Jesús ni el Papa han perdido dignidad por lavarle los pies a sus discípulos.

³³ *Id.* en la pág. 565 (“El azaroso curso de este caso por las salas de justicia nos recuerda que todavía quedan conceptos substantivos y barreras procesales que oponen la pátina de su historia al torrente impulsador de los derechos del hombre que enriquece la civilización contemporánea”).

³⁴ *Pueblo v. Delgado Rodríguez*, 108 DPR 196, 211 (1978) (“Careciendo de una data clara en cuanto al impacto de esta decisión poniendo en la calle, no a inocentes sino a convictos, se está actuando a ciegas. Equivale a una fuga masiva autorizada si lo vemos en términos de la epidemia actual de fugas”).

³⁵ *Lomas de Carolina v. Tribunal Superior*, 101 DPR 574, 578 n. 3 (1973).

³⁶ *Cruz Cruz v. Irizarry Tirado*, 107 DPR 655 (1978) (“La preservación del hogar seguro familiar para beneficio del grupo formado por madre e hijos tiene primacía sobre el derecho de propiedad del cónyuge en los activos de la disuelta sociedad conyugal. Su reclamación de gananciales en la vivienda que aloja a esta familia quedará paralizada por el tiempo que subsistan las circunstancias que le dan calidad de hogar seguro y mientras la recta razón de equidad ampare el derecho de sus ocupantes”).

³⁷ *Caraballo Ramírez v. Acosta*, 104 DPR 474, 489 (1975).

³⁸ *Fernández v. Hosp. Gen. San Carlos, Inc.*, 113 DPR 761, 770 (1983).

³⁹ *Robert Vizcarrondo v. Srio. de Hacienda*, 114 DPR 566, 575 (1983).

. . .

El afán litigioso no es virtud ennoblecedora. En el servidor público es excepcional negación de todo principio de lealtad al bien común.⁴⁰

11. Caricatura de Arroyito en la que aparece el juez presidente Trías Monge, en bata quirúrgica, mientras somete al Fondo del Seguro del Estado a la “sangría de una avalancha de accidentes intercurrentes” ocurridos “en la casa, en la barra, en el hipódromo, en la calle, en el avión hacia Nueva York . . . , presenciando el Desfile Puertorriqueño o la llegada del Concorde . . . , en *Disneyland* o en la Torre de Pisa”.⁴¹ Al calce, la siguiente leyenda:

El Derecho no es caldo para tubo de ensayo; es savia de bienestar y orden de la sociedad en que aflora.⁴²

12. Caricatura de LeRoy Nieman que presenta a una tuna, compuesta por el juez presidente Trías Monge y los jueces Irizarry Yunqué, Dávila y Torres Rigual, cantando la Constitución. Leyenda:

La democracia y las libertades no se defienden con cantos de alondra ni con odas que tuvieron su tiempo y lugar y que hoy son pie forzado de trovadores.⁴³

13. Caricatura de Filardi que ilustra al juez presidente Trías Monge, ataviado con bata blanca y zapatos deportivos *Reebok*, haciendo “calistenia[s] legalista[s]” en un “laboratorio constitucional”.⁴⁴

⁴⁰ Plaza Quiñones v. Municipio de Adjuntas, 104 DPR 905, 909-10 (1976). Todo lo anterior demuestra que en momentos de escasez presupuestaria sería constitucionalmente permisible que el Juez Presidente prescindiera de los servicios de los conserjes que trabajan en el Tribunal Supremo y asigne la labor de limpieza y ornato a los Jueces Asociados.

⁴¹ Irizarry Fernández v. Comisión Industrial, 106 DPR 112, 122-24 (1977) (“¿Podrá el Fondo del Seguro del Estado absorber la sangría de una avalancha de ‘accidentes intercurrentes’ compensables según la posición adoptada por el Juez Presidente? Bajo su doctrina se impone al Fondo la condición de asegurador *ad perpetuam* en incontables accidentes en la casa, en la barra, en el hipódromo, en la calle, en el avión hacia Nueva York y hasta presenciando el Desfile Puertorriqueño o la llegada del Concorde El Fondo del Seguro del Estado no debe estar amarrado como asegurador por vida con todo obrero a quien se le reconozca una incapacidad, aunque sea la nominal de 5%, obligado a hacer reservas en su presupuesto para compensar accidentes intercurrentes aunque ocurran en *Disneyland* o en la Torre de Pisa”).

⁴² *Id.* en la pág. 122.

⁴³ Pueblo v. Torres Lozada, 106 DPR 588, 631 (1977), *revocado sub nom* Torres v. Puerto Rico, 442 U.S. 465 (1979). Los jueces mencionados en el texto adoptaron una posición opuesta a la que el juez Díaz Cruz propuso en este caso.

⁴⁴ Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 DPR 10, 18 (1974) (“La impugnación de identificación es pura calistenia legalista del tipo que es capaz de derrotar la justicia hecha por el Juez Superior, si no se descubre su superficialidad La identificación de criminales no ha de ser manejada por normas de laboratorio constitucional más allá del debido proceso de ley a que es acreedor tanto el delincuente como la sociedad que lo sufre”).

14. Caricatura que presenta al Director del Colegio Regional de Humacao, con gorra de Sherlock Holmes, lupa y pipa, “[u]bicado en el ojo de la tormenta . . . percibi[endo] los relieves y perfiles de la conducta disolvente de la libertad auténtica”.⁴⁵

III. SALÓN DE OBJETOS VALIOSOS Y OTRAS CURIOSIDADES

1. El ataúd donde la Ley 110 de 12 de mayo de 1943 yace “en capilla ardiente de inconstitucionalidad con entierro diferido”.⁴⁶
2. “La espada que blandió [el] Tribunal . . . en *Báez Cancel v. Alcalde de Guaynabo* . . . convertid[a] en ariete destructor de la efectividad en la administración pública”.⁴⁷
3. Una rémora tozuda (disecada).⁴⁸ Por limitaciones de espacio, y aunque ello en alguna medida desvirtúe la tozudez de la rémora, debemos prescindir del tiburón.
4. El famoso papiro egipcio en el que ya se menciona el archiconocido principio general del Derecho: “Cosa juzgada no es cosa juzgándose”.⁴⁹
5. Todos los instrumentos científicos necesarios para hacer pruebas de “acceso fertilizante”.⁵⁰
6. La alfombra debajo de la cual yace, barrido, el derecho a la educación.⁵¹ (¿Se estará escondiendo de los “agentes químicosapestosos”?).⁵²

⁴⁵ *Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao*, 113 DPR 153, 177 (1982) (“El Director del Colegio Universitario de Humacao, universitario inmerso en el estilo de vida del *campus*, está en mejor posición para advertir y conjurar el daño al recinto. Ubicado en el ojo de la tormenta está en superior posición para percibir los relieves y perfiles de la conducta disolvente de la libertad auténtica”).

⁴⁶ *In re Guzmán Géigel*, 113 DPR 122, 132 (1982) (“Por tanto, estimo innecesario colocar esta Ley especial en capilla ardiente de inconstitucionalidad con entierro diferido”).

⁴⁷ *Ramos v. Srio. de Comercio*, 112 DPR 514, 528 (1982).

⁴⁸ *Id.* en las págs. 527-28 (“En cercana perspectiva, esta decisión niega al país el servicio público de los mejores hombres y mujeres que nunca podrían organizar su departamento o su agencia con un personal de confianza impuesto por los que se aferran a su silla en deliberado desafío del veredicto electoral; o por *injunctio* del tribunal que ampare su tozudez de rémora”).

⁴⁹ *Diez Rodríguez v. Guzmán Ruiz*, 108 DPR 371, 379 (1979) (“La excepción de cosa juzgada se caracteriza por la finalidad previa de la primera sentencia, obtenida con antelación absoluta al segundo pleito en que se invoca, y no en la simultánea tramitación de ambos procedimientos. Cosa juzgada no es ‘cosa juzgándose’”).

⁵⁰ *Moreno Álamo v. Jiménez*, 112 DPR 376, 388 (1982) (“A los fines de la presunción de legitimidad en el Art. 113 del Código Civil, el concepto de imposibilidad física del marido para tener acceso con su mujer, comprende e incluye la falta de fecundación, hoy científicamente demostrable, toda vez que no es el acceso carnal, y sí la fecundación, el germen determinante de la paternidad en última consecuencia. La ley tal como está redactada no podía tener otro objetivo que el acceso fertilizante, el capaz de engendrar hijos y producir confusión en la prole”).

⁵¹ *Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao*, 113 DPR 153, 174-75 (1982) (“La opinión se enajena de la realidad, y como *Rodríguez v. Srio. Instrucción*, 109 DPR 251 (1979), que reitera, barre bajo la alfombra el derecho a la educación que nuestra Constitución de 1952 afirma en su Art. II, Sec. 5, y que suscita la confrontación crítica, entre ese derecho que propende al desarrollo de la personalidad ‘y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales’ y de otra parte el derecho de libre expresión que en el Recinto de Humacao tomó la forma de lanzamiento

7. La muralla que levantó el Tribunal para separar “el mitin relativamente ordenado y la conducta escatológica y violenta”.⁵³
8. El arsenal de “molotofs” que nunca fueron ocupadas en el Colegio Regional de Humacao.⁵⁴
9. Los tomos de Decisiones de Puerto Rico, el libro de García Márquez y las gladiolas que *Equity* no tenía en inventario.⁵⁵
10. El mostrador sobre el que se reparten al instante decretos de divorcio a partir de *Figueroa Ferrer v. ELA*.⁵⁶
11. Una copia de la Constitución con forma de “martillo de demolición de las leyes del Pueblo”.⁵⁷
12. Un monolito imperturbable en el que esté grabado el texto del artículo 1811 del Código Civil.⁵⁸
13. El tanque de guerra utilizado por el Tribunal Supremo para matar un coquí.⁵⁹ (Dadas las condiciones en que quedó, resulta imposible exhibir el cadáver del coquí).
14. Copia de la biografía “del intocable hindú que nadie quería tener cerca”.⁶⁰ (¿Lo habrían impregnado los “agentes químicos apestosos” de *Sánchez Carambot?*).⁶¹

de una cadena de metal sobre los conductores de energía eléctrica del recinto, el desbordamiento de inodoros en varios edificios, inclusive la biblioteca y el forzado desalojo de salones de clase insertando agentes químicos apestosos en las unidades de aire acondicionado”).

⁵² *Id.* en la pág. 175.

⁵³ *Id.* en la pág. 176 (“El Tribunal, con muchos menos recursos estimativos que la dirección universitaria levantó una muralla entre el mitin relativamente ordenado y la conducta escatológica y violenta que amenazaba con un desarrollo similar al del Recinto de Río Piedras”).

⁵⁴ *Id.* en la pág. 177 (“El *ratio decidendi* sugiere, en su condenación de la prevención –que llama restricción previa– la inacción de las autoridades académicas hasta que empiecen a escucharse los disparos y a volar las ‘molotofs’”).

⁵⁵ *Equity* de PR v. DACO, 113 DPR 250, 254 (1982) (“El que compra libros, como quien compra flores, sabe que su proveedor no podría existir con un inventario de inexorable rigidez que le someta a reproche y sanción porque en determinada fecha no pueda servir el libro de García Márquez o las gladiolas que figuraron en su catálogo o anuncio”).

⁵⁶ *Figueroa Ferrer v. ELA*, 107 DPR 250, 298 (1978) (“Mi preferencia por un divorcio por consentimiento autorizado por ley que proteja tanto a los cónyuges como a los hijos, de divorcios irreflexivos, no me inclina a sacar este asunto del ámbito legislativo, y a respaldar la creación por este Tribunal de una nueva causal, sin normas ni reglas procesales, sobre el filo de un mal entendido derecho de intimidad, sin guía para los tribunales proteger el interés de los hijos, convertidas las salas de justicia en agencias de rápido despacho de divorcios sobre el mostrador, con un procedimiento *sui generis* que podrá variar según el criterio particular que cada juez se forme sobre la manera de administrar este divorcio íntimo coartado a cada paso por un planteamiento de privacidad”).

⁵⁷ *Id.* en las págs. 292-93 (“El día que la espada simbólica que es la propia fuerza de la Constitución se convierta en martillo de demolición de las leyes del pueblo, estaremos asistiendo a las exequias del sistema de separación e independencia de poderes y al inaceptable traslado del poder legislativo a la rama judicial”).

⁵⁸ *Campos del Toro v. American Transit Corp.*, 113 DPR 337, 342 (1982) (“El Art. 1811 C.C. nunca ha sido monolito imperturbable asentado sobre una autonomía contractual en busca de nuevas formas de atenuar el rigor de las obligaciones patrimoniales”).

⁵⁹ *In re Marrero Torres*, 113 DPR 113, 116 (1982) (“Hemos usado un tanque de guerra para matar un coquí”).

15. Un frasco de la famosa droga *Autoctonina*, que restablece “el vigor intelectual nativo” y lo inmuniza de “expresiones de oscuro origen”.⁶²
16. Una reproducción, en “hoja de parra”, de la licencia de portar armas de Rolando Granda Llorella.⁶³
17. Estatua de la Justicia portando, no una balanza, sino un flagelo.⁶⁴
18. Copia de la tarja que, a partir de *Negrón v. Orozco Rivera*,⁶⁵ el Superintendente de la Policía ordenó colocar en todos los cuarteles. Esta reza:

En el hombre la pasión desbordada tarda más que el agua de creciente en retornar a su cauce.⁶⁶

19. Afiche con el nuevo lema publicitario del Banco Popular:

[D]esde los tiempos de Silas Marner hay mirones que le llevan el dinero a quien lo esconde.⁶⁷

20. Ejemplar del libro de anatomía de Gray, abierto a la página en la que se advierte a los galenos que no constituye tratamiento adecuado “aplicar hielo a los labios de un moribundo”.⁶⁸
21. Un frasco con agua del Ganges, río sagrado de los hindúes. Recordemos que:

[L]a remisión de la culpa no surte efecto de inmersión en el río sagrado que lava el pecado porque el perdón es signo de nobleza en quien lo otorga, mas no necesariamente de enmienda en quien lo recibe.⁶⁹

60 *Whitmarsh Valdés v. Maestre*, 113 DPR 395, 404 (1982) (“Según la ponencia, el médico de práctica privada, para preservar su estatuto de prescripción, deberá negar sus servicios a un obrero que los solicita en circunstancias de emergencia. Un anacrónico y lastimoso regreso a la figura del intocable hindú que nadie quería tener cerca”).

61 *Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao*, 113 DPR 153, 175 (1982).

62 *Whitmarsh Valdés v. Maestre*, 113 DPR 395, 405 (1982) (“Insisto en que debemos guiarnos por nuestros propios razonamientos, por el vigor intelectual nativo, con prioridad a expresiones de oscuro origen”).

63 *Pueblo v. Granda*, 113 DPR 558, 560 n. 3 (1982) (“El tribunal no puede ir más allá del estatuto al definir el ámbito y latitud de la licencia. La aquí concedida, más que escudo es hoja de parra en su escueto pronunciamiento”).

64 *Estrella v. Mun. de Luquillo*, 113 DPR 617, 622-23 (1982) (“Son estos los hechos reales, la circunstancia vital, que nutren la interpretación sociológica de la Ley para que sirva a la generación presente, en vez de cerrarle puertas; para que sea fuente de reivindicación de derechos sin desnaturalizarse en flagelo del pueblo”).

65 *Negrón v. Orozco Rivera*, 113 DPR 712 (1983).

66 *Id.* en la pág. 717.

67 *Pueblo v. Santiago Sánchez*, 111 DPR 379, 389 (1981).

68 *Feliciano Rosado v. Matos, Jr.*, 110 DPR 550, 570 (1981) (“[E]l intento de curar una judicatura enferma con un remedio de acción civil privada, hundida la institución en el descrédito, es menos que aplicar hielo a los labios de un moribundo”).

69 *In re Vázquez Báez*, 110 DPR 628, 637 (1981) (*per curiam* de pluma inconfundible).

Máxime lo anterior cuando se considera que el perdonado es una “figura desagradable”, “quien padece estos accesos de regresión a lo primitivo”, “retando al magistrado a enfrentársele en combate”, denotando así la “marea de violencia y falta de estilo que es carcoma de nuestra cultura”.⁷⁰

22. Un libro de Álgebra elemental en que se resuelvan las ecuaciones de factores y fuerzas contradictorias de las que se nutre el Derecho.⁷¹

23. El revólver que don Rafael Coss usó en una trifulca “como maza para pegar, sin halar el gatillo contra los revoltosos”,⁷² uno de los cuales, desgraciadamente, murió a causa de un tiro en la cabeza.

24. Facsímil del letrero que desde 1981 adorna la entrada de todas las oficinas del Registro de la Propiedad, el cual reza:

[E]l Registrador no es un amable portero sin otra misión que franquear la puerta del Registro al contrato correctamente vestido de documento público.⁷³

25. Ejemplar del *Libro de instrucciones al jurado*, abierto a la página en que se expresa que un testigo debe mirar a un asaltante a la cara “(porque, ¿qué otra cosa le va a mirar a quien entra anunciando un asalto y sacando una pistola?)”.⁷⁴

26. Ejemplar de los nuevos sobres timbrados que el Administrador del Centro Judicial de San Juan ordenó a raíz de *Dapena Quiñones v. Vda. de Del Valle*.⁷⁵

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [D]irección conspicua asaz conocida.⁷⁶

27. Copia certificada del protocolo de autopsia que revela que ARPE falleció “[a]hogada por el laconismo formulista”,⁷⁷ dejando a la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones en un “estado de tiniebla procesal”⁷⁸ e “ineptitud institucional”.⁷⁹

⁷⁰ *Id.* en la pág. 636.

⁷¹ Morales Garay v. Roldán Coss, 110 DPR 701, 705 (1981) (“El Derecho no se nutre de postulados absolutos y sí de ecuaciones que reconocen un equilibrio de factores y fuerzas contradictorias que conjugadas resultan en una adjudicación de fundamental justicia”).

⁷² *Id.* en la pág. 706.

⁷³ Preciosas Vistas del Lago v. Registrador, 110 DPR 802, 809-10 (1981).

⁷⁴ Pueblo v. Calderón Orta, 110 DPR 835, 851 (1981).

⁷⁵ Dapena Quiñones v. Urrutia Vda. De Del Valle, 109 DPR 138 (1979).

⁷⁶ *Id.* en la pág. 141 (“La mención en el edicto de la Sala de San Juan del Tribunal Superior como el foro ante el cual se seguían los procedimientos, era a todas luces una explícita convocatoria para el recinto donde ubica la Sala de San Juan, una dirección conspicua asaz conocida”).

⁷⁷ Junta de Planificación v. JACL, 109 DPR 210, 222 (1979).

⁷⁸ *Id.* en la pág. 223.

⁷⁹ *Id.* en la pág. 227.

28. El documento de embarque del cargamento de atún y arroz que, desde *Jorge v. Universidad Interamericana*,⁸⁰ sabemos es cosa distinta a la oferta en el catálogo universitario de un curso de educación avanzada.⁸¹

29. La bombilla fundida en *Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc.*,⁸² con la siguiente inscripción característica de la Criminología moderna:

El malhechor de nuestros días, de acentuado desprecio por la ley, hace tiempo prescindió de la oscuridad y las sombras como aliados.⁸³

30. La pegatina que el Secretario de Justicia regaló a cada uno de los fiscales:

No hay que adornar con blanduras, ni dislocar con refinados obstáculos a la gestión del ministerio público.⁸⁴

31. Una toga propiedad del Tribunal Supremo, a las que recientemente se cosió a sus espaldas la siguiente inscripción:

Cada hombre es en gran medida arquitecto de su vida y responsable de sus actos y por su libérrima voluntad se hace de una hoja de conducta limpia o turbia que no debe dejar fuera, como quien se quita una capa, al entrar a la sala de justicia.⁸⁵

32. El famoso escapulario de *Pueblo v. Lebrón*.⁸⁶ En su anverso debe aparecer el texto constitucional de la garantía contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. En su reverso debe apreciarse el alambique de ron cañita en campo raso.⁸⁷ Además, es preciso recordar que las especificaciones fijadas por su creador requieren que el escapulario sea transparente.⁸⁸

80 *Jorge v. Universidad Interamericana*, 109 DPR 505 (1980).

81 *Id.* en la pág. 516 (“La oferta en el catálogo universitario de un curso de educación avanzada tiene urdimbre de intangibles y contingencias que la diferencian de la obligación de entregar un cargamento de atún o un embarque de arroz”).

82 *Estremera v. Inmobiliaria Rac*, 109 DPR 852 (1980).

83 *Id.* en la pág. 860.

84 *Pueblo v. Álvarez Rosario*, 108 DPR 112, 128 (1978).

85 *Id.* en la pág. 130.

86 *Pueblo v. Lebrón*, 108 DPR 324, 335 (1979) (“¿Cómo entender la proscripción de ‘registros, incautaciones y allanamientos irrazonables’ (Constitución, Art. II, Sec. 10) a manera de escapulario para los que violan la ley a la vista y al alcance de todo el que quiera mirar u oír?”).

87 *Id.* (“Quien espera conservar en secreto la operación de un alambique clandestino no lo monta en campo raso con una línea de agua conectada a la cocina de su casa, pues su expectativa de intimidad es inexistente en un país de nuestra densidad poblacional y fluidez circulatoria. El apelante, lejos de albergar una expectativa de privacidad, asumió el riesgo calculado del descubrimiento, factor de operación inevitable con el que han vivido por *ilo tempore* los elaboradores de ron cañita”).

88 *Id.* (“El fortalecimiento de los derechos humanos en el sentido amplio y abarcador, libre de utopía, no se promueve desplegando mantos de protección cuya transparencia deja al desnudo la ilegitimidad del reclamo constitucional”).

33. El emblema de I.T.T., compañía de “sensibilidad . . . puritana”.⁸⁹
34. Edición en español de *El Capital* en la que aparezca la glosa: “Para el trabajador. . .el ahorro es ilusión devorada por la estrechez”.⁹⁰
35. La fórmula de farmacia en la que el Tribunal encerró a la justicia.⁹¹
36. Una silla de barbero, en homenaje “al respetable oficio de la tonsura”.⁹²
37. Papel en blanco. Ilustra elocuentemente los nombres de los pobres médicos conturbados quienes, ante “la proliferación de demandas injustas y de cuantiosas compensaciones . . . ejerce[n] en constante temor del desprestigio y de la ruina económica”.⁹³ La lectura del segundo párrafo de esta opinión⁹⁴ es tarea obligatoria para los estudiantes de medicina, así como para los amantes de las obras de ciencia-ficción.
38. Una copia del juramento de Hipócrates en la que se haya subrayado el famoso pasaje: “[L]a mano que cura no alcanza el grado de agravio social de la mano que hiere”.⁹⁵
39. Ejemplar del *Kama Sutra* abierto en la página en que se sentencia:

Uno de los más antiguos medios de vencer la resistencia de la mujer deseada es la solución en la bebida que se le ofrece de elementos depresivos o afrodisíacos.⁹⁶

40. Ejemplar del tratado de Wigmore abierto a la altura de la introducción al capítulo sobre corroboración, donde se expone:

A una estudiante de 14 años que acaba de tener su primera experiencia sexual sin haber consentido a ello, perturbada emocionalmente, agra-

⁸⁹ *Srio. del Trabajo v. I.T.T.*, 108 DPR 536, 547 (1979) (“Esa sensibilidad moral puritana que condena a un hombre en piramidal inflación de su culpa se derrite ante el hecho probado de que la compañía recurrente, antes de despedir a Braun, le ofreció credenciales de buenas referencias si renunciaba al empleo”).

⁹⁰ *Id.* (“Para el trabajador, participe menor en los frutos de la empresa, para quien no hay liquidación de dividendos, ni beneficios, ni intereses acumulados en la digna faena de ganar con su esfuerzo el pan que parte en la mesa con los suyos, para quien el ahorro es ilusión devorada por la estrechez, la indemnización por despido es importante evento de la justicia social debida al hombre como factor de producción”).

⁹¹ *Rivera v. Samaritano & Co., Inc.* 108 DPR 604, 612 (1979) (“A estas alturas no vamos a encerrar la justicia en fórmulas de farmacia”).

⁹² *DACO v. Quiñones*, 108 DPR 622, 624-25 (1979) (“De lo contrario, estaríamos sancionando una indebida restricción del derecho del dominio, obligando a todos los sucesivos dueños de este inmueble arrendado que reclamen su derecho a pactar libremente el canon de un local de barbería, a dedicarse también al respetable oficio de la tonsura”).

⁹³ *Enríquez Pérez v. Fernández*, 108 DPR 674, 676 (1979) (“El despertar de la conciencia social frente a la mala práctica de la medicina trajo como todos los cambios, consecuencias favorables y adversas. Si por un lado se abrió amplia brecha de acceso a la reparación del daño mediante indemnización pecuniaria, por otro la proliferación de demandas injustas y de cuantiosas compensaciones conturbó al médico y lo llevó a ejercer en constante temor del desprestigio y de la ruina económica”).

⁹⁴ *Id.* en las págs. 676-77.

⁹⁵ *Negrón Morales v. Municipio de San Juan*, 107 DPR 375, 381 (1978).

⁹⁶ *Pueblo v. García*, 106 DPR 459, 462 n. 1 (1977).

vada su condición por la bebida ingerida, no puede exigírsele que salga de los brazos de su raptor, propalando su infortunio como una grabadora que repite la cinta, a todos los que encuentre en su camino.⁹⁷

41. La vara o puntero con la que el maestro le fracturó el dedo al alumno contumaz, sin “indicio alguno en la prueba que acuse intención criminal”, por lo que fue absuelto.⁹⁸
42. El certificado de nacimiento de la niña adoptada en *Ex parte J.A.A.*⁹⁹ Al calce, deberá leerse: “Entre las buenas costumbres todavía no se cuenta la barraganería o amancebamiento”.¹⁰⁰
43. Pergamino que contenga el famoso soliloquio de Segismundo en *La vida es sueño*:

[E]l propósito de solidaridad humana que indudablemente inspiró la redacción del Art. 109 que no es otra cosa que la proyección más allá de los días felices, de la obligación del hombre de ayudar y socorrer a su mujer; un canon de hidalguía y gratitud inserto en el Código Civil para beneficio de aquella que en un tiempo pasado de ensoñación se entregó en dulzura, en cariño y hasta en sacrificio personal al hombre que la hizo su esposa. He allí los valores personalísimos que sirven de armazón ética y moral al precepto interpretado y que le imparten naturaleza imprescriptible y vitalicia a la obligación del hombre para con esta mujer que habiéndose mantenido pura y honesta languidece víctima de la enfermedad, la penuria, o los demás azares de su existencia.¹⁰¹

44. Una crisálida dormitante.¹⁰² (Este espécimen debe colocarse en el lugar más apacible y menos iluminado del museo, para conservarlo en el estado de letargo en que lo concibió su creador).
45. Copia de la conocida sentencia del Tribunal Supremo español que cita, *in extenso*, *Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co.*,¹⁰³ sin duda influenciada por el siguiente plácito de ese caso:

⁹⁷ *Id.* en la pág. 463.

⁹⁸ *Pueblo v. Ponce Ávila*, 105 DPR 213, 215 (1976) (“La intención del maestro al recurrir a este método de disciplina no era otra que la de corregir o reprender, y al mismo tiempo proteger el orden en el salón de clases sin el cual no puede haber enseñanza. No hay indicio alguno en la prueba que acuse intención criminal, elemento esencial de todo delito”).

⁹⁹ *Ex parte J.A.A.*, 104 DPR 551 (1976).

¹⁰⁰ *Id.* en la pág. 564 (“Al auspiciar la adopción el Estado prefiere para el adoptado la dignidad y el sentido de pudor asociados a la unión lícita de los adoptantes; es parte de la calidad moral exigida de éstos y de la preservación de las buenas costumbres entre las cuales todavía no se cuenta la barraganería o amancebamiento”).

¹⁰¹ *Suria Campos v. Fernández Negrón*, 101 DPR 316, 319 (1973).

¹⁰² *Id.* en la pág. 322 (“De todo cuanto dejamos dicho debe quedar meridianamente claro que tanto el derecho de la mujer divorciada a alimentos como la regla de prescripción que los regula son reservas dormidas que toca a la mujer activar con el ejercicio de la acción civil reclamando su derecho. Hasta que esto ocurra, mientras la causa de acción reconocida a la mujer sea crisálida dormitante, aunque repleta de promesas de vida, no tendrá sobre sí el péndulo de la prescripción extintiva”).

¹⁰³ *Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co.*, 101 DPR 598 (1973).

Nos complace la posibilidad de que esta opinión contribuya a la clarificación en el acervo jurídico de la Madre Patria de esta cuestión de transmisibilidad de la acción en daños que pudo haber ejercitado el causante de haber vivido. . . .Y esto a modo de reciprocidad por la histórica frecuencia con que la brillantez del pensamiento jurídico de España alumbró con notable valor de precedente la jurisprudencia patria.¹⁰⁴

46. Ejemplar traducido al español de *For Whom the Bell Tolls*, de Hemingway, abierto a su última página, en la que concluye:

Una sociedad civilizada no puede tolerar que la muerte de la víctima haga las veces de recibo y carta de pago, por una cantidad que en determinadas ocasiones resultaría considerable, avalado no con la firma, sino con el postrer latido de un corazón torturado. La muerte ilegal y la causada por negligencia adquirirían, sin duda, una condición privilegiada que estremece la consciencia educada en el respeto de los altos valores humanos; bajarían al sepulcro no solo un cuerpo, sino también un derecho y el doblar de las campanas en su triste queja tendría una adicional resonancia de duelo.¹⁰⁵

47. Una yola sin quilla, la cual, sabemos,

[P]uede flotar sobre un pie de agua pero un pie de agua no es considerado agua navegable. En la aplicación de la ley la razonabilidad y el sentido común son elementos necesarios.¹⁰⁶

48. Una picota. Este objeto estaría como pez en el agua en nuestro museo toda vez que “[l]a picota pública hace tiempo que fue erradicada como castigo y es extraña a nuestra civilización”.¹⁰⁷

EPÍLOGO

Unas últimas palabras dirigidas a quien sea nombrado director de nuestro museo. Como todo museo, habrá objetos que no estén en exhibición permanente y que deberán ser cuidadosamente guardados. Nada más apropiado para ello que colocarlos dentro del “fardo histórico que por generaciones abrumó [la] debili-

¹⁰⁴ *Id.* en la pág. 605 n. 3.

¹⁰⁵ *Id.* en la pág. 606.

¹⁰⁶ *ADCVP v. Comisión de Servicio Público*, 105 DPR 219, 227 (1976) (*per curiam* de pluma inconfundible). Desafortunadamente, esta es una de tantas ocasiones en que la lógica no sustituye al estudio del Derecho. Después de todo, como sentenció Holmes, “The Life of the law has not been logic: it has been experience.” OLIVER WENDELL HOLMES, *THE COMMON LAW* 1 (1881). Desde hace décadas el Derecho federal de almirantazgo sostiene que para que un cuerpo de aguas sea considerado “agua navegable de los Estados Unidos” no es menester que sea navegable en su estado natural. Basta que a través de mejoras artificiales pueda serlo, aun cuando tales mejoras no se hayan realizado. *United States v. Appalachian Electric Power Co.*, 311 U.S. 377 (1940).

¹⁰⁷ *In re Hernández Henríquez*, 115 DPR 472, 489 (1984) (*per curiam* de pluma inconfundible).

dad del hijo natural".¹⁰⁸ Se advierte además al futuro director que en la Sala Díaz Cruz no debe exhibirse alguna copia de la Constitución de los Estados Unidos. Sabido es que:

[La] Constitución . . . no es pieza de museo, sino organismo vivo que ha afirmado su permanencia precisamente por la flexibilidad y adaptación, en progresiva infusión de contemporaneidad provista por las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.¹⁰⁹

Por último, igualmente se advierte al futuro director que tampoco deben exhibirse en la Sala Díaz Cruz libros de Derecho o revistas jurídicas. Bien conocido es que:

[U]nos escritores de revistas y estudiosos cuya vida discurre en el apacible, y también enajenado mundo de su gabinete . . . no debe[n] movernos a los que conocemos el torrente vital de la sociedad puertorriqueña.¹¹⁰

No debe aguardarse a concluir las labores de la Sala Díaz Cruz para planificar los detalles de la próxima sala de nuestro museo. A continuación, y con el objetivo de orientar al futuro director, paso a esbozar a grandes rasgos algunas ideas generales sobre la segunda sala. Debe el director tener muy presente que la transición que debe existir entre ambas salas requiere profunda meditación, ante el muy distinto manejo del lenguaje que caracteriza a sus protagonistas. El salto es como el de Lope de Vega a Mon Rivera. Elaboremos¹¹¹ deferencialmente.¹¹²

108 Pol Sella v. Lugo Christian, 107 DPR 540, 542-43 (1978) ("La vigente situación procesal deja en precario la sentencia del caso criminal, aún después de haber ésta alcanzado la calidad de final y firme, disminuye el valor de la absolución del padre denunciado a pesar de fundarse la misma en los méritos de la prueba que excluye la paternidad; y para el llamado hijo natural que prevalece, obligado a revalidar su filiación en un segundo día en corte, representa un residuo del fardo histórico que por generaciones abrumó su debilidad y desamparó y entorpeció el reclamo de su derecho").

109 Pueblo v. Santiago Sánchez, 111 DPR 379, 390 (1981).

110 Feliciano Rosado v. Matos, Jr., 110 DPR 550, 570 (1981).

111 El magistrado que protagoniza la segunda sala *elaboró* tanto que amerita una membresía honoraria en la Asociación de Industriales. Véanse, e.g., Rodríguez v. Bco. Gub. de Fom. PR, 151 DPR 383, 418 (2000); Pueblo v. Agostini Rodríguez, 151 DPR 426, 432 (2000); Córdova v. Larín, 151 DPR 192, 194 (2000); Sandoval v. Caribe Hilton, 149 DPR 582, 607 (1999); Pueblo v. Báez, 149 DPR 469, 491 (1999); Ruiz v. Pepsico PR, Inc., 148 DPR 586, 589 (1999); Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel. de Fam., 148 DPR 201, 223 (1999); Ramos Rivera v. ELA, 148 DPR 118, 133 (1999); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 553 (1999); Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 147 DPR 433, 466 (1999); Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 DPR 808, 828 (1998); Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64, 179 (1998); Sosa v. Registradora de la Propiedad, 145 DPR 859, 880 (1998); Eagle Star v. La Esperanza Sugar Corp., 145 DPR 290, 297 (1998); Apon-te v. Sears Roebuck de PR, 144 DPR 830, 860 (1998); Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141, 225 (1997); Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 DPR 1, 63 (1997); García v. Hosp. Reg. de Guayama, 143 DPR 829, 835 (1997); Soc. de Gananciales v. Paniagua Diez, 142 DPR 98, 106 (1996); Metrop. de Préstamos v. López de Victoria, 141 DPR 844, 849 (1996); García Martínez v. CEE, 141 DPR 593, 600 (1996); El Vocero de PR v. Contralor, 141 DPR 602, 608 (1996); RDT Const. Corp. v. Contralor I, 141 DPR 424, 461 (1996); Bco. Santander PR v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 249 (1996); PPD v. Peña Clos I, 140 DPR 779, 842 (1996); Com. Electoral PIP v. CEE, 139 DPR 48, 68 (1995); Pueblo v. Ramos Santos, 138 DPR 810, 832 (1995); El Vocero de PR v. Noguerras II, 138 DPR 642, 655 (1995); Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 587 (1994); Berríos Martínez v. Gobernador II, 137 DPR 195,

Exordio¹¹³ del Ultílogo¹¹⁴ del Epílogo:¹¹⁵

273 (1994); Del Toro Lugo v. ELA, 136 DPR 973, 1006 (1994); *In re* Reforma Judicial, 136 DPR 1, 23 (1994); Martínez v. McDougal, 133 DPR 228, 239 (1993); Consejo de Titulares v. CRUV, 132 DPR 707, 738 (1993); Cardona v. Depto. Recreación y Deportes, 129 DPR 557, 573 (1991). Adviértase que toda esta elaboración no vino a producirse sino hasta sus últimos diez años en el estrado. Es incalculable cuánto más hubiera elaborado si se hubiera dedicado a esa tarea durante sus primeros diecisiete.

112 Deferencialmente es el adverbio bizantino que el magistrado de marras utilizaba justo antes de cargarse a alguno de sus compañeros de estrado, o a todos ellos. A continuación un listado de las deferencias, seguidas de las cargas: López Torres v. González Vázquez, 151 DPR 225, 267 (2000) (“deferencialmente” le imputa a la mayoría haber incurrido en “un insularismo jurídico extremo”); Sandoval v. Caribe Hilton, 149 DPR 582, 607 (1999) (“deferencialmente” le imputa a la mayoría haber incurrido en entremezclas equivocadas de leyes, haber identificado erróneamente la controversia y haber confundido las normas probatorias; acto seguido, como es natural, “elabora”); Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 399 (1999) (“deferencialmente” critica a la mayoría, comparándola con Fuenteovejuna en una metáfora incomprensible); Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 DPR 539, 576 (1999) (“Deferencialmente objetamos de nuevo una práctica adjudicativa a ciegas, que desvirtúa fatalmente el recto proceso apelativo”); Pueblo v. Serrano, Serra, 148 DPR 173, 193 (1999) (“deferencialmente” le imputa a la mayoría haber hecho exigencias absurdas a la policía); Fatach v. Triple S, Inc., 147 DPR 882, 895-98 (1999) (“deferencialmente” critica a la mayoría por abandonar el requisito de identidad de partes en la aplicación del impedimento colateral por sentencia; le imputa invadir la esfera legislativa); Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 131-39 (1998) (“deferencialmente” y “con todo respeto”, imputa a la mayoría arrogarse una prerrogativa legislativa, incurrir en una actuación ultra vires, descansar en un non sequitur, sobrecargar al Tribunal de Apelaciones, dejar a cientos de niños sin alimentos y abrir una caja de Pandora); ACAA v. Bird Piñero, 115 DPR 463, 472 (1984) (“deferencialmente” sostiene que la mayoría incurrió en una “interpretación irreal” y “paradógica” [sic, sic, sic] e invocó un derecho constitucional que nada tiene que ver con la controversia); Pueblo v. Marín Quiñones, 110 DPR 715, 719 (1981) (“deferencialmente” objeta el análisis “ingenuo” de la opinión disidente); PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 309 (1980) (“Deferencialmente objetamos todo desmerecimiento a la verticalidad y ejecutorias de la magistratura puertorriqueña del pasado y presente”).

Por razones de espacio, no se consignan aquí los cientos de “con toda deferencia” y “con todo respeto” que desempeñan una función similar al “deferencialmente”.

113 Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141, 217 (1997); El Vocero de PR v. Nogueras I, 138 DPR 103, 133 (1995); García O'Neill v. Cruz, 126 DPR 518, 534-35 (1990) (“el interdicto deontológico subsistiría en virtud del exordio preambular del Código de Ética.”); Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 DPR 33, 37 (1982); PPD v. Barreto Pérez, 110 DPR 376, 377 (1980); Blatt & Udell v. Core Cell, 110 DPR 142, 147 (1980); Rodríguez Sardenga v. Soto Rivera, 108 DPR 733, 762 (1979); *In re* Rodríguez Torres, 106 DPR 698, 772 (1978); ELA v. Rivera Rivera, 105 DPR 640, 641 (1977).

114 PSP v. Com. Estatal de Elecciones, 110 DPR 400, 446 (1980).

115 Pueblo v. Agostini Rodríguez, 151 DPR 426, 433 (2000); Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141, 214 (1997); García v. Hosp. Reg. de Guayama, 143 DPR 829, 836 (1997); Acevedo Vilá v. Corrada del Río, 138 DPR 886, 892 (1995); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 470 (1994); Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 134 DPR 181, 254 (1993); Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 872 (1992); Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 91 JTS 92, 9019 (1991) (censurablemente, la compiladora, en 129 DPR 402, 445 (1991), convirtió este “epílogo”, que aparece en la antepenúltima página de un disenso de 44 páginas, en un “preámbulo”); Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 618, 672 (1991); Aponte v. Srio. de Hacienda, ELA, 125 DPR 610, 635 (1990); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 683 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 293 (1989); Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 747 (1988); PNP y PIP v. Rodríguez Estrada, 122 DPR 490, 528 (1988); PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 389 (1988); Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 DPR 145, 157 (1987); Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 DPR 762, 809 (1987); Pueblo v. González Navarrete, 117 DPR 577, 604 (1986); Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 619 (1984); Hernández Colón v. Srio. de Hacienda, 115 DPR 145, 166 (1984); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 630 (1983); Rodrí-

El Prisma¹¹⁶ Se Me Ha Empañado¹¹⁷ y Debo Finiquitar.¹¹⁸

guez v. Barreto, 113 DPR 541, 549 (1982); Quintana Tirado v. Longoria, 112 DPR 276, 287 (1982); PPD v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199, 330 (1981); PPD v. Gobernador, 110 DPR 783, 793 (1981); PSP v. ELA, 107 DPR 590, 629 (1978); Publio Díaz v. ELA, 106 DPR 854, 872 (1978); *In re* Rodríguez Torres, 106 DPR 698, 778 (1978).

116 De la mejor tinta, sabemos que existen “prismas muy diferentes”, Figueroa Ferrer v. ELA, 107 DPR 250, 281 (1978); “prismas diversos”, Ortiz Andújar v. ELA, 122 DPR 817, 829 (1988); “distintos prismas”, Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650, 694 (1988) Mi investigación al respecto me ha convencido de que la rica diversidad de prismas es solo comparable con la variedad de ruegos que la Iglesia Católica reconoce en las letanías. Nada más adecuado, por ende, que componer una letanía jurídica dedicada a la singular aportación de los prismas a nuestro derecho patrio. Así, podremos entonar con legítimo orgullo, con un canto gregoriano de trasfondo:

“**Prisma legislativo**”: Vicéns v. UPR, 117 DPR 771, 779 (1986).

“**Prisma judicial**”: PPD v. Gobernador I, 136 DPR 860, 864 (1994); Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445, 466 (1993); Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 413 (1991); Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 109 (1980).

“**Prisma decisorio**”: Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 416 n. 18 (1999); *In re* Belén Trujillo, 128 DPR 949, 974 (1991); González v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 749, 771 (1989); Pueblo v. Lausell Hernández, 121 DPR 823, 831 (1988); Pueblo v. Arandes de Celis, 120 DPR 530, 550 (1988); Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 DPR 434, 469 (1988).

“**Prisma decisorio fundamental**”: Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 DPR 110, 120 (1986).

“**Prisma doctrinario**”: Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64, 184 (1998); AAA v. Librotex, Inc., 141 DPR 375, 384 (1996); Urbino v. San Juan Racing Assoc., Inc., 141 DPR 210, 216 (1996); *In re* Malavet Rodríguez, 135 DPR 823, 832 (1994); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 150 (1989); Pueblo v. Ramírez Lebrón, 123 DPR 391, 403 (1989).

“**Prisma constitucional**”: Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 123 DPR 179, 192 (1989).

“**Prisma mayoritario**”: PAC v. ELA II, 150 DPR 805, 847 (2000); Silva Rodríguez v. Adm. Sistemas de Retiro, 128 DPR 256, 272 (1991); PNP v. Rodríguez Estrada, Pres. CEE, 123 DPR 1, 61 (1988).

“**Prisma jurisprudencial**”: Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 603 (1994).

“**Prisma del jurisprudente**”: Pueblo v. González Malavé, 116 DPR 578, 580 (1985).

“**Prisma del deporte**”: Oliveras v. Paniagua Diez, 115 DPR 257, 265 (1984).

“**Prisma del Derecho penal**”: *In re* Franco Soto, 115 DPR 740, 750 (1984).

“**Prisma del proceso criminal**”: Pueblo v. Agostini Rodríguez, 151 DPR 426, 433 (2000).

“**Prisma del derecho tributativo**”: Matos Balaguer v. Srio. de Hacienda, 108 DPR 858, 865 (1979).

“**Prisma de la opinión mayoritaria**”: Pueblo v. Galindo González, 129 DPR 627, 652 (1991).

“**Prisma de la Regla 12(a)**”: Parrilla v. Ranger American of PR, 133 DPR 263, 280 (1993).

“**Prisma de derecho administrativo ético o legal jurisdiccional**”: Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 DPR 205, 215 (1982).

“**Prisma de apreciación subjetiva**”: Torre Ginés v. ELA, 118 DPR 436, 464 (1987).

“**Prisma de mayor liberalidad posible**”: Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 154 (1997).

“**Prisma de dos alternativas posibles**”: A&P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 758, 761 (1981).

“**Prisma de numerus apertus**”: Colón v. Alcalde Mun. de Ceiba, 112 DPR 740, 743 n. 2 (1982).

“**Prisma de un riguroso escrutinio judicial**”: Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 DPR 610, 616 (1981).

“**Prisma de discrimen por razones políticas**”: Pueblo v. Lausell Hernández, 121 DPR 823, 833 (1988).

“**Prisma de alternativas decisorias**”: Pueblo v. Burgos Torres, 120 DPR 709, 725 (1988).

“**Prisma limpio**”: Colón v. CRUV, 115 DPR 503, 508 (1984).

“**Prisma técnico**”: ELA v. Hotel Coamo Springs, Inc., 138 DPR 37, 46 (1995); San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 711 (1983).

“**Prisma técnico evidenciario**”: Tribunal Examinador de Médicos v. Flores, 129 DPR 687, 695 (1991).

“**Prisma nebuloso**”: Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 646 (1989).

“**Prisma [calibrado]**”: De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 497 (1989).

“**Prisma rigurosamente científico**”: Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, 123 DPR 571, 582 (1989).

“**Prisma más riguroso**”: Pueblo v. Agostini Rodríguez, 151 DPR 426, 433 (2000).

“**Prisma estrecho**”: Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 719 (1988).

“**Prisma realista**”: Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 124, 147 (1989).

“**Prisma (a secas)**”: Rodríguez v. Bco. Gub. de Fom. PR, 151 DPR 383, 423 (2000); UTIER v. AEE, 149 DPR 498, 526 (1999); Pueblo v. De Jesús, 148 DPR 995, 1006 (1999); Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141, 216 (1997); Cruz Ayala v. Rivera Pérez, 141 DPR 44, 70 (1996); Com. Electoral PIP v. CEE, 139 DPR 48, 70 n. 1 (1995); Acevedo Vilá v. Corrada del Río, 138 DPR 886, 892 (1995); Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 DPR 412, 422 (1995); Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 DPR 735, 760 (1994); Fed. Pesc. Playa Picúas v. US Inds., Inc., 135 DPR 303, 356 (1994); Rodríguez Orellana v. CEE, 134 DPR 612, 622 (1993); *In re* Colón Ramery, 133 DPR 555, 573 (1993); Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 255 (1992); Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 947 (1992); Pueblo v. Saliva Valentín, 130 DPR 767, 781 (1992); Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 322 n. 4 (1992); González Muñiz, *Ex parte*, 128 DPR 565, 575 (1991); AEE y AAA v. PNP, 128 DPR 294, 297 (1991); Pagán Sánchez v. PNP, 127 DPR 494, 498 (1990); Rivera Torres v. Tribunal Superior, 126 DPR 692, 700 n. 2 (1990); Medina Bernard v. Adm. Corrección, 126 DPR 800, 809 (1990); Rodríguez Meléndez v. Supermercado Amigo, Inc., 126 DPR 117, 136 (1990); Aponte v. Srio. de Hacienda, ELA, 125 DPR 610, 634 (1990); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 140 (1989); González Camacho v. Santos Cruz, 124 DPR 396, 402 (1989); Santos Bermúdez v. Texaco PR, Inc., 123 DPR 351, 355 (1989); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 346 (1989); *In re* Santos Vías, 122 DPR 881, 888 (1988); Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 735 (1988); PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 364 (1988); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 696 (1988); PPD v. Planadeball Pogy, 121 DPR 570, 579 (1988); Calcedor Berríos v. Ramírez Pantojas, 121 DPR 491, 493 (1988); Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 361 (1988); Pueblo v. Rivera Torres, 121 DPR 128, 152 (1988); PIP v. CEE, 120 DPR 580, 650 (1988); Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 DPR 145, 155 (1987); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 276 (1987); *In re* Secretario de Justicia, 118 DPR 827, 850 (1987); Díaz v. ELA, 118 DPR 395, 409 (1987); *In re* Cardona Álvarez, 116 DPR 895, 907 (1986); Ruiz Santiago v. ELA, 116 DPR 306, 312 (1985); *In re* Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 DPR 778, 784 (1984); PPD v. Adm. Gen de Elecciones, 111 DPR 199, 325 n. 4 (1981); PIP v. ELA, 109 DPR 403, 425 (1980); *In re* Lavastida, 109 DPR 45, 105 (1979).

Y no podría faltar el más piadoso y venerable de los prismas:

“**Prisma de la Iglesia Católica**”: Academia San Jorge v. JRT, 110 DPR 193, 211 (1980).

Llama la atención que tantas controversias jurídicas se examinen con prismas. Sabido es que, por sí solo, un prisma distorsiona la imagen. ¿Será ésa la explicación para algunas decisiones inexplicables? Para una disertación de nuestro juez homenajeado sobre prismas y otros aparatos ópticos, véase Col. Ópticos PR v. Pearle Vision Center, 142 DPR 221 (1997).

117 Esto no debe causar sorpresa. Después de todo, un principal especialista en la materia ha reconocido que algunos “método[s] de adjudicación empaña[n] el prisma del jurisprudente”. Pueblo v. González Malavé, 116 DPR 578, 580 (1985). Advierte ese especialista que, si ha de cumplir su función, el prisma debe estar limpio, Colón v. CRUV, 115 DPR 503, 508 (1984); que es necesario “aclarar el prisma”, *In re* Lavastida, 109 DPR 45, 105 (1979); *In re* Belén Trujillo, 128 DPR 949, 974 (1991) (“aclarar el prisma decisorio”); Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 DPR 434, 469 (1988) (“aclarado . . . el prisma decisorio”); que “es menester calibrar el prisma”, De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 497 (1989). ¿Qué puede ser peor para el jurisprudente que un “prisma nebuloso?” Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 646 (1989).

118 Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 239 (1992); Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 855 (1992); González v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 749, 760 (1989); *In re* Conferencia Judicial, 122 DPR 420, 461 (1988); *In re* Informe Com. Asesora Presidente, 119 DPR 165, 240 (1987); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419, 446 (1986); Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 105 (1980).

Para ultimar,¹¹⁹ con un enfoque apriorístico,¹²⁰ **por imperativo circunstancial**,¹²¹ **y a manera de axioma**¹²² razonable,¹²³ capsular¹²⁴ y SINÓPTICO,¹²⁵ la regia

119 Pueblo v. Martínez Torres, 120 DPR 496, 516 (1988); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 693 (1988); Torres, *Ex parte*, 118 DPR 469, 483 (1987); Reyes v. Jusino, 116 DPR 275, 292 (1985); Martínez v. Rivera Hernández, 116 DPR 164, 170 (1985); Pueblo v. Martínez Martí, 115 DPR 832, 853 (1984); Ramos v. Srio. de Comercio, 112 DPR 514, 519 (1982); PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 306 (1980).

120 PAC v. ELA II, 150 DPR 805, 827 (2000); *In re Reforma Judicial*, 136 DPR 1, 43 (1994); Robles Sanabria, *Ex parte*, 133 DPR 739, 767 (1993); Pueblo v. Malavé González, 120 DPR 470, 494 (1988); Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 350, 356 (1987); Pueblo v. González Malavé, 116 DPR 578, 584 (1985); Pueblo v. Martínez Martí, 115 DPR 832, 849 (1984); Pauneto v. Núñez, 115 DPR 591, 597 (1984); Pueblo v. Conde Pratts, 115 DPR 307, 342 (1984); Suro v. ELA, 111 DPR 456, 461 (1981); Padró Collado v. Espada, 111 DPR 56, 67 (1981); *In re Lavastida*, 109 DPR 45, 109 (1979).

121 Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638, 662 (1991); López, Fed. Coms. Unidos v. Mun. de San Juan, 121 DPR 75, 88 (1988); Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 DPR 110 (1986); Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 DPR 313, 331 (1986); Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 DPR 414, 416 (1985); San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 715 (1983); PR Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328, 345 (1983) (“De ese modo volitivo ilegal u otros análogos se deriva e infiere, por imperativo circunstancial, una renuncia clara al derecho”); Santos v. PPD, 109 DPR 798, 801 (1980).

En las opiniones de cierta pluma judicial impera una infinidad de imperativos, además de los circunstanciales:

Imperativo decisorio: Herrero v. Alcalde, Mun. de San Juan, 150 DPR 696, 704 (2000); Pres. del Senado, 148 DPR 737, 759 (1999); Fatach v. Triple S, Inc., 147 DPR 882, 896 (1999); Misión Ind. PR v. JP, AAA, 142 DPR 656, 721-22 (1997); Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445, 468 (1993); Álvarez Figueredo v. González Lamela, 134 DPR 374, 378 (1993); Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 907 (1991); Medina Bernard v. Adm. Corrección, 126 DPR 800, 810 (1990).

Imperativo inequívoco: *In re Reforma Judicial*, 136 DPR 1, 21 (1994).

Imperativo lógico: Lagares v. ELA, 144 DPR 601, 630 (1997); Robles Sanabria, *Ex parte*, 133 DPR 739, 780 (1993); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 25 (1993); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 276 (1989); *In re Orlando Roura*, 119 DPR 1, 5 (1987).

Imperativo lógico e insoslayable: Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 154 (1999).

Imperativo estatutario: Sánchez Soto v. ELA, 128 DPR 497, 503 (1991).

Imperativo legal: PNP v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1, 55 (1988); Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 55 (1988).

Imperativo jurídico: PAC v. ELA II, 150 DPR 805, 848 (2000); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 276 (1989).

Imperativo jurídico-constitucional: García Martínez v. CEE, 141 DPR 593, 601 (1996).

Imperativo reglamentario: Sánchez Soto v. ELA, 128 DPR 497, 503 (1991).

Imperativo de justicia: Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153, 158 (1986); Ruiz Santiago v. ELA, 116 DPR 306, 317, 321 (1985).

Imperativo procesal: Soc. de Gananciales v. García Robles, 142 DPR 241, 269 (1997); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 633 (1993); Pueblo v. Ramos Álvarez, 118 DPR 782, 796 (1987); Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153, 166 (1986).

Imperativo de la ley: Torres v. ELA, 130 DPR 640, 662 (1992); PNP y PIP v. Rodríguez Estrada, 122 DPR 490, 514 (1988); Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 61 (1988); *In re Olmo Olmo*, 113 DPR 441, 464 (1982); Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 DPR 225, 247 (1978).

Imperativo constitucional: Rodríguez v. Bco. Gub. de Fom. PR, 151 DPR 383, 422 (2000); Hernández v. J. Apel. Sist. Educ. Pub., 147 DPR 840, 851 n. 8 (1999); Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 DPR 1, 60 (1997); Nogueras v. Rexach Benítez I, 141 DPR 470, 515 n. 4 (1996); RDT Const. Corp. v. Contralor I, 141 DPR 424, 459 (1996); PPD v. Peña Clos II, 140 DPR 1001, 1006 (1996); PPD v. Peña Clos I, 140 DPR 779, 859 (1996); Com. Electoral PIP v. CEE, 139 DPR 48, 68 (1995); Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 588 (1994); Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 798 (1994); *In re Reforma Judicial*, 136 DPR 1, 29 (1994); Caquiás v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 134 DPR 181,

250 (1993); *ELA v. Asoc. Empleados Obras Púb. Mun.*, 126 DPR 320, 336 (1990); *Pueblo v. Ramos Álvarez*, 118 DPR 782, 796 (1987); *Pueblo v. Miranda Marchand*, 117 DPR 303, 307 (1986); *Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc.*, 117 DPR 153, 158 (1986).

Imperativo constitucional preclaro: *RDT Const. Corp. v. Contralor I*, 141 DPR 424, 452 (1996).

Imperativo constitucional decisorio: *Ramos Acevedo v. Tribunal Superior*, 133 DPR 599, 644 (1993).

Imperativo del derecho constitucional: *In re Reforma Judicial*, 136 DPR 1, 11 (1994); *Pueblo v. Santiago Colón*, 125 DPR 442, 448 (1990).

Imperativo del debido proceso de ley: *Pueblo v. Morales*, 150 DPR 123, 131 (2000); *Sandoval v. Caribe Hilton*, 149 DPR 582, 608 (1999).

Imperativo constitucional del debido proceso de ley: *Alberty v. Bco. Gub. de Fomento*, 149 DPR 655, 667 (1999).

Imperativo constitucional de orden jurisprudencial: *Báez Galib v. Rosselló González I*, 147 DPR 371, 374 (1999).

Imperativo del Código Civil: *Rosado Collazo v. Registrador*, 118 DPR 577, 588 (1987).

Imperativo del art. 1802: *Sepúlveda de Arrieta v. Barreto*, 137 DPR 735, 760 (1994).

Imperativo federal: *Meléndez Ortiz v. Valdejully*, 120 DPR 1, 32 (1987).

Imperativo funcional: *Mun. de Ponce v. Gobernador*, 136 DPR 776, 796 (1994).

Imperativo del evento: *PNP y PIP v. Rodríguez Estrada*, 122 DPR 490, 522 (1988); *Granados v. Rodríguez Estrada I*, 124 DPR 1, 261 (1989).

Imperativo del remedio: *Berrios Martínez v. Gobernador II*, 137 DPR 195, 272 (1994).

Imperativo del presupuesto balanceado: *Hernández Torres v. Gobernador*, 129 DPR 678, 682 (1991).

Imperativo de la decisión: *Aponte v. Sears Roebuck de PR*, 144 DPR 830, 853 (1998).

Imperativo del Código Penal: *Pueblo v. Morales Díaz*, 120 DPR 249, 251 (1987).

Imperativo de un procedimiento criminal: *UTIER v. AEE*, 149 DPR 498, 524 (1999).

Imperativo de la nueva legislación: *Díaz de Llovet v. Gobernador*, 112 DPR 747, 757 (1982).

Imperativo de la economía procesal: *Colgate-Palmolive v. Mistolín*, 117 DPR 313, 333 (1986).

Imperativo de la buena práctica médica: *Martí Méndez v. Abréu Feshold*, 143 DPR 520, 545-46 (1997).

Imperativo de la conciencia: *Ramírez de Ferrer v. Mari Brás*, 144 DPR 141, 228, 229, 230 (1997).

Imperativo de conducta: *Ramírez de Ferrer v. Mari Brás*, 144 DPR 141, 229 (1997).

Imperativo de civilidad profesional: *In re Martínez Texidor*, 130 DPR 905, 916 (1992).

Imperativo evidenciario fáctico: *Díaz v. ELA*, 118 DPR 395, 397 (1987).

Imperativo de nuestro esquema constitucional electoral: *PAC v. CEE*, 149 DPR 244, 256 (1999).

Imperativo social de necesidad o bienestar público: *Pérez v. Junta Dental*, 116 DPR 218, 236 (1985).

Imperativa autorización judicial: *In re López Olmedo*, 125 DPR 265, 269 (1990).

Imperativo de las circunstancias: *Lozada v. ELA*, 116 DPR 202, 211 (1985).

Imperativos absolutos: *Granados v. Rodríguez Estrada I*, 124 DPR 1, 153 (1989).

Imperativos superiores: *Granados v. Rodríguez Estrada V*, 127 DPR 1, 83 (1990).

Imperativos naturales: *Figueroa Ferrer v. ELA*, 107 DPR 250, 285 n. 5 (1978).

Imperativos éticos: *Ramírez de Ferrer v. Mari Brás*, 144 DPR 141, 229 (1997).

Imperativos de conciencia judicial: *Gorbea Vallés v. Registrador*, 133 DPR 308, 331 (1993).

Imperativos morales y sociales inmanentes: *Noriega v. Gobernador*, 130 DPR 919, 938 (1992).

Carácter imperativo: *Colón Molinary v. AAA*, 103 DPR 143, 146 n. 1 (1974).

Cumplimiento imperativo: *Pabón Rodríguez y Díaz López, Ex parte*, 132 DPR 898, 903 (1993).

Lenguaje imperativo: *Molina v. CRUV*, 114 DPR 295, 325 (1983).

Texto imperativo: *Pueblo v. Ramos Santos*, 138 DPR 810, 833 (1995).

Rechazo imperativo: *Ramírez de Ferrer v. Mari Brás*, 144 DPR 141, 221 (1997).

Arbitraje imperativo: *UCPR v. Triangle Engineering Corp.*, 136 DPR 133, 146 (1994).

Sopesaje imperativo: *Gorbea Vallés v. Registrador*, 131 DPR 10, 18 (1992).

Presupuesto imperativo: *Colegio de Abogados de PR v. Schneider*, 112 DPR 540, 557 (1982) ("Proponemos y sostenemos la visión de que la unidad institucional de abogados es un presupuesto legí-

timo para el ejercicio de la actividad forense *imperativo, consustancial e inmerso* en el axioma rector consagrado en el Art. V de nuestra Ley Fundamental que crea 'un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración'. (Énfasis imperativo en el original).

Interés público imperativo: Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477, 489 (1982).

Nexo causal imperativo: Tormos Arroyo v. DIP, 140 DPR 265, 274 (1996); Santiago Vázquez v. ELA, 138 DPR 10, 14 (1995).

Norma imperativa: *In re* López Olmedo, 125 DPR 265, 268 (1990).

Regla imperativa: *In re* Ocasio Arriaga, 132 DPR 61, 67 (1992).

Fianza imperativa: Molina v. CRUV, 114 DPR 295, 325 (1983).

Precisión imperativa: Gorbea Vallés v. Registrador, 133 DPR 308, 330 (1993).

Inspección imperativa: Pueblo v. Torres Lozada, 106 DPR 588, 650 (1977).

Inclusión imperativa: Gorbea Vallés v. Registrador, 131 DPR 10, 19 (1992).

Conclusión imperativa: Pueblo v. León Cortijo, 146 DPR 394, 423 (1998); Levy v. Aut. Edif. Públicos, 135 DPR 382, 391 (1994).

Acusación imperativa: Nogueras v. Rexach Benítez I, 141 DPR 470, 519 (1996).

Penetración imperativa: PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 717 (1995).

Orden judicial imperativa: Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 DPR 770, 774 n. 3 (1982).

Imperativo (sin adornar): Andino Torres, *Ex parte*, 151 DPR 794, 797, 806 (2000); Pueblo v. Agostini Rodríguez, 151 DPR 426, 434 n. 6 (2000); Sandoval v. Caribe Hilton, 149 DPR 582, 609 (1999); Pres. del Senado, 148 DPR 737, 779 (1999); Pueblo v. Pérez Velázquez, 147 DPR 777, 782, 792 (1999); González Rodríguez v. Wal-Mart, Inc., 147 DPR 215, 234 (1998); Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 DPR 808, 835 n. 6 (1998); Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 232 (1998); Aponte v. Sears Roebuck de PR, 144 DPR 830, 862, 865 (1998); Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 DPR 1, 63 (1997); Pueblo v. Carmona, Rivera, 143 DPR 907, 922 (1997); Fernández Sánchez v. Fernández Rodríguez, 142 DPR 275, 289 (1997); Miranda v. CEE, 141 DPR 775, 795 (1996); Nogueras v. Rexach Benítez I, 141 DPR 470, 527, 532 (1996); PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 717 (1995); PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 718 (1995); Western Fed. Savs. Bank v. Registrador, 139 DPR 328, 345 (1995); Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 DPR 412, 421 (1995); Pueblo v. Lorio Ormsby II, 137 DPR 977, 981 (1995); Besosa v. Corp. Azucarera de PR, 137 DPR 939, 949, 951 (1995); Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 579, 584 (1994); Berríos Martínez v. Gobernador II, 137 DPR 195, 269, 272, 281 (1994); PPD v. Gobernador I, 136 DPR 860, 867 (1994); Kantara Malty v. Castro Montañez, 135 DPR 1, 5 (1994); Regl. Creac. y Func. Unidad Esp. J. Apel., 134 DPR 670, 709 (1993); Torres Rivera v. González Padín & Co., Inc., 133 DPR 656, 657 (1993); Pino Development Corp. v. Registrador, 133 DPR 373, 380 (1993); Arroyo v. Ortiz y Franco, 133 DPR 62, 80 (1993); Riley v. PRAICO, 131 DPR 58, 64 (1992); El Vocero v. Cabán García, 129 DPR 709, 711 (1992); Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 418, 428 (1991); Pueblo en interés menor F.S.C., 128 DPR 931, 947 (1991); Nogueras v. Hernández Colón, 129 DPR 184, 187 (1991); Torres Solano v. PR Tel. Co., 129 DPR 202, 204 (1991); *In re* Belén Trujillo, 128 DPR 949, 969 (1991); Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 892 (1991); Pueblo v. Echevarría Rodríguez II, 128 DPR 752, 786 (1991); *In re* Colton Fontán, 128 DPR 1, 13, 106 (1991); Culebra Enterprises Corp. v. ELA, 127 DPR 943, 954 (1991); *Ex parte* González Muñoz, 128 DPR 565, 576 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 83 (1990); Rivera Torres v. Tribunal Superior, 126 DPR 692, 701 (1990); Comercial de Mayagüez v. Registrador, 126 DPR 510, 517 (1990); Vega v. Luna Torres, 126 DPR 370, 374 (1990); Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117, 136 (1990); Noriega v. Hernández Colón, 126 DPR 42, 65 (1990); Aponte v. Srio. de Hacienda, ELA, 125 DPR 610, 635 (1990); Elba A.B.M. v. UPR, 125 DPR 294, 335 (1990); Marrero, Marrero, Ríos v. Albany Ins. Co., 124 DPR 827, 840 (1989); González v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 749, 782 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 634, 682, 688, 703 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 266, 278 (1989); Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650, 698 (1988); PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 364 (1988); Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600, 607 (1988); Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 359 n. 7 (1988); Convoc. Sesión Especial Conf. Judicial, 120 DPR 838, 845 (1988); PIP v. CEE, 120 DPR 580, 658 (1988); Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 DPR 434, 463 (1988) ("Ello nos permite, desde este estrado apelativo y en buena metodología, limitar nuestro pronunciamiento al ámbito adjudicativo correspondiente sin el imperativo de iniciar una incursión genérica de todos los complejos situacionales que informa la Regla 20 de Procedimiento Civil sobre certificación de clase."); Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119

DPR 762, 791 (1987); Pueblo v. Valentín Rivera, 119 DPR 281, 285 (1987); *In re Informe Com. Asesora Presidente*, 119 DPR 165, 171, 228 (1987); Torres, *Ex parte*, 118 DPR 469, 482 (1987); Pueblo v. Morales Rivera, 118 DPR 155, 163 (1986); *In re Cardona Álvarez*, 116 DPR 895, 903 (1986) (“El ejercicio de [la] profesión [de abogado], inextricablemente, es consustancial a la función de impartir justicia, que por imperativo presupone la existencia de una comunidad civilizada y democrática, cimentada en el imperio de la ley.”); Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 DPR 717, 727 (1985); Pérez v. Junta Dental, 116 DPR 218, 237 (1985); Berríos v. UPR, 116 DPR 88, 91 (1985); Olivieri Morales v. Pierluisi, 113 DPR 790, 798 (1983); ELA v. Rivera Rivera, 105 DPR 640, 642 (1977); Colón Molinary v. AAA, 103 DPR 143, 162 (1974).

En fin, tenía absoluta razón la juez Naveira cuando sostuvo que existe un “tono imperativo”. Casiano, Jr. v. Borintex Mfg. Corp., 133 DPR 127, 139 (1993).

122 Es axiomático que las opiniones de cierto jurisprudente están pletóricas de todo tipo de axiomas: Andino Torres, *Ex parte*, 151 DPR 794, 807 (2000); PAC v. ELA, 149 DPR 615, 619 (1999); Pueblo v. León Cortijo, 146 DPR 394, 409 (1998); Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 938 (1997); *In re Marrero Luna*, 140 DPR 217, 218 (1996); PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 753 (1995); Western Fed. Savs. Bank v. Registrador, 139 DPR 328, 341 (1995); Com. Electoral PIP v. CEE, 139 DPR 48, 68 (1995); El Vocero de PR v. Nogueras II, 138 DPR 642, 655 (1995); El Vocero de PR v. Nogueras I, 138 DPR 103, 133 (1995); Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 579 (1994); PPD v. Gobernador, 136 DPR 860, 864, 865 (1994); *In re Reforma Judicial*, 136 DPR 1, 26 (1994); Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 DPR 623, 640 (1994); Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445, 461 (1993); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 626 (1993); Arroyo v. Ortiz y Franco, 133 DPR 62, 85 (1993); Aut. Edif. Púb. v. Unión Indep. Emp. AEP, 130 DPR 983, 991 (1992); Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, 130 DPR 352, 362-63 n. 6 (1992) (per curiam de pluma inconfundible); Pérez Mercado v. Martínez Rondón, 130 DPR 134, 155 (1992); Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 443 (1991); AEE y AAA v. PNP, 128 DPR 294, 299 (1991); Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638, 656 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 291 (1990); Aponte v. Srio. de Hacienda, ELA, 125 DPR 610, 633 (1990); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 686 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 230, 283 (1989); PNP v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1, 63 (1988); *In re Calderón Marrero*, 122 DPR 557, 566 (1988); PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 371 (1988); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 695 (1988); Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 DPR 1, 12 (1988); PIP v. CEE, 120 DPR 580, 649 (1988); *In re Informe Com. Asesora Presidente*, 119 DPR 165, 175, 234 (1987); Pueblo v. Martínez Torres, 116 DPR 793, 796 (1986); Lozada v. ELA, 116 DPR 202, 213 (1985); Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 24, 25 n. 9 (1984); PRP v. ELA, 115 DPR 631, 637 (1984); Pauneto v. Sánchez, 115 DPR 591, 596 (1984); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 635 (1983); González Reyes v. Romero Barceló, 114 DPR 406, 423 (1983); Colegio de Abogados de PR v. Schneider, 112 DPR 540, 557 (1982); Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, 112 DPR 376, 384 (1982); *In re Rodríguez Vega*, 112 DPR 264, 270 (1982) (per curiam de pluma inconfundible); PSP v. Com. Estatal de Elecciones, 110 DPR 400, 444 (1980); PSP v. Srio. de Hacienda, 110 DPR 313, 324 (1980); PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 304 (1980); Pueblo v. Foster, 110 DPR 8, 13 (1980); PIP v. ELA, 109 DPR 685, 694 (1980); PIP v. ELA, 109 DPR 403, 422, 426 (1980); PIP v. ELA, 109 DPR 335, 349 (1980); *In re Lavastida*, 109 DPR 45, 92, 99 (1979); Sucn. Santos v. Registrador, 108 DPR 831, 843 (1979); PSP v. ELA, 107 DPR 590, 623 (1978); García v. Montero Saldaña, 107 DPR 319, 335 (1978); Democratic Party v. Tribunal Electoral, 107 DPR 1, 34 (1978); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 771 (1977); García Passalacqua v. Tribunal Electoral, 105 DPR 49, 61 (1976); PNP v. Tribunal Electoral, 104 DPR 741, 753 (1976); Jordán-Rojas v. Padró González, 103 DPR 813, 815 (1975); Empresas Capote, Inc. v. Tribunal Superior, 103 DPR 765, 773 (1975); García v. AFF, 103 DPR 356, 367 (1975).

Sorprende que en PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 753 (1995), el juez de marras haya respondido con un solo axioma en su opinión concurrente, frente a los once que contiene la opinión mayoritaria del juez presidente Andréu García (*Id.* en las págs. 651, 666, 667, 671 (3), 681, 683, 692, 701 y 704) y los trece que contiene la concurrencia del juez Hernández Denton. *Id.* en las págs. 754, 756, 763, 767, 768 (2), 769, 770, 775, 776, 783, 785 (2).

123 En aparente réplica a la contención de algún cínico que reclama que razonable es una palabra de abogados que no significa nada, excepto lo que quien la use desee, cierto jurisprudente, en cinco

inauguración de nuestro nuevo museo representará el trasfondo fáctico¹²⁶ y *DOCTRINARIO*,¹²⁷ para *APUNTALAR*¹²⁸ el andamiaje,¹²⁹ proveerá el cauce¹³⁰ y

distintas ocasiones, para que no se nos olvide, nos proveyó una magnífica definición que despeja cualquier incertidumbre:

Lo razonable descansa en lo moderado, en la cautela, prudencia, en la acción u omisión. Por ende, la variabilidad en el comportamiento del ser humano involucrado en todo acto criminoso y los distintos trasfondos del acto (sitio, hora, personas, edades y naturaleza y gravedad) son factores pertinentes para evaluar la razonabilidad de un registro y allanamiento hecho sin orden judicial.

Pueblo v. Malavé González, 120 DPR 470, 491 (1988); Pueblo v. Martínez Torres, 120 DPR 496, 515 (1988); Pueblo v. Castro Santiago, 123 DPR 894, 910 (1989); Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 DPR 41, 52 (1994); Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 433-34 (1997).

124 Las cápsulas no farmacéuticas abundan en ciertas opiniones, usualmente prolongadas: PAC v. ELA II, 150 DPR 805, 824 (2000); Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 892 (1991); Hernández Torres v. Hernández Colón, 127 DPR 974, 987 (1991) (“capsularmente”); Martínez Cruz v. ELA, 126 DPR 170, 171 (1990) (idem.); Pueblo v. Foster, 110 DPR 8, 13 (1980); Rivera Pitre v. Galarza Martínez, 108 DPR 565, 566 (1979); Jordán Rojas v. Padró González, 103 DPR 813, 815 (1975).

125 A algunas opiniones parece aquejarlas la sinopsitis. Nada que una buena cápsula no pueda curar. JRT v. Velázquez, 126 DPR 645, 648 (1990); Selosse v. Fundación Educativa Ana G. Méndez, 122 DPR 534, 537 (1988); Asoc. de Condóminos v. Trelles Reyes, 120 DPR 574, 575 (1988); *In re Olmo Olmo*, 113 DPR 441, 448 (1982); PPD v. Gobernador, 110 DPR 783, 787 (1981); Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 106 (1980); García v. Montero Saldaña, 107 DPR 319, 323 (1978); Publio Díaz v. ELA, 106 DPR 854, 857 n. 1 (1978); Pérez Cruz v. Fernández Martínez, 106 DPR 144, 145 (1977); El Toro Electric Corp. v. Zayas, 106 DPR 98, 100 (1977).

126 La siguiente es una lista de opiniones, procedentes todas de la misma pluma, que utilizan el término “trasfondo fáctico”: Pueblo v. Agostini Rodríguez, 151 DPR 426, 430 (2000); Mun. de San Juan v. JCA, 149 DPR 263, 290 (1999); Pueblo v. Colón Bernier, 148 DPR 135, 149 (1999); Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64, 180 (1998); González v. Quintana, 145 DPR 463, 465 (1998); Soc. de Gananciales v. Royal Bank de PR, 145 DPR 178, 215 (1998); Pueblo v. Navarro, 141 DPR 761, 774 (1996); Álvarez Figueroa v. González Lamela, 138 DPR 958, 973 (1995); Flores Ramírez v. Maldonado, 138 DPR 722, 736 (1995); Miranda v. ELA, 137 DPR 700, 711 (1994); Soc. de Gananciales v. Srio. de Justicia, 137 DPR 70, 72 (1994); Vencedor Dev. Corp. v. Aut. de Carreteras, 136 DPR 456, 491 (1994); Coop. Seguros Múltiples de PR v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994); UCPR v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133, 145 (1994); Fed. Pesc. Playa Picúas v. U.S. Inds., Inc., 135 DPR 303, 341, 351 (1994); Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001, 1002 (1994); Quetglas v. Carazo, 134 DPR 644, 646 (1993); Pueblo v. Adorno Cabrera, 133 DPR 839, 840 (1993); PR Fuels, Inc. v. Empire Gas CO., Inc., 133 DPR 112, 125 (1993); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 17 (1993); Martínez Díaz v. ELA, 132 DPR 200, 205, 209 (1992); Ríos Román v. Registrador, 130 DPR 817, 818 (1992); Pueblo v. Guardiola Dávila, 130 DPR 585, 588 (1992); Torres Solano v. PR Tel. Co., 129 DPR 202, 207 (1991); Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, 129 DPR 219, 223 (1991); Pueblo v. Pacheco Torres, 128 DPR 586, 588 (1991); Arroyo López v. ELA, 126 DPR 682, 689 (1990); Martínez Cruz v. ELA, 126 DPR 170, 171 (1990); Rodríguez Meléndez v. Supermercado Amigo, Inc., 126 DPR 117, 120 (1990); Santiago Hodge v. Parke Davis Co., 126 DPR 1, 19 (1990); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702, 713 (1990); Pueblo v. Santiago Colón, 125 DPR 442, 444 (1990); Vélez Toro v. Látimer, 125 DPR 109, 116 (1990); Marrero v. Albany Ins. Co., 124 DPR 827, 839 (1989); Pueblo en interés menor E.L.G., 124 DPR 819, 826 (1989); Pueblo v. Ramírez Lebrón, 123 DPR 391, 393 (1989); Selosse v. Fundación Educativa Ana G. Méndez, 122 DPR 534, 537 (1988); Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600, 609 (1988); Calcador Berríos v. Ramírez Pantojas, 121 DPR 491, 498 (1988); Pueblo v. Rivera Torres, 121 DPR 128, 142 (1988); Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 41 (1988); Pueblo v. Martínez Torres, 120 DPR 496, 510 (1988); Pérez Torres v. Bladuell Ramos, 120 DPR 295, 311 (1988); García Cabán v. UPR, 120 DPR 167, 186 (1987); Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 DPR 145, 147 (1987); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 270 (1987); *In re Orlando*

Roura, 119 DPR 1, 3 (1987); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 174 (1989); *In re* Secretario de Justicia, 118 DPR 827, 866 (1987); Pueblo v. Ramos Álvarez, 118 DPR 782, 802 (1987); Asoc. Res. Baldrich, Inc. v. JP de PR, 118 DPR 759, 762 (1987); Pueblo v. López Rodríguez, 118 DPR 515, 520 (1987); *In re* Cardona Álvarez, 116 DPR 895, 898 (1986); Román v. ELA, 116 DPR 712, 716 (1985); Reyes v. Jusino, 116 DPR 275, 278, 282 (1985); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985); Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 5 n. 1 (1984); Pueblo v. Martínez Martí, 115 DPR 832, 846 (1984); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 724 (1984); ACAA v. Bird Piñero, 115 DPR 463, 470 (1984); Chévere v. Cátala, 115 DPR 432, 435 (1984); Crespo v. H.R. Psychiatric Hosp., Inc., 114 DPR 796, 808 (1983); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 634 (1983); First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 DPR 426, 431 (1983); Fernández v. Hosp. Gen. San Carlos, Inc., 113 DPR 761, 773 (1983); Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 DPR 770, 772 (1982); Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477, 480 (1982); Cruz v. Hampton Dev., 112 DPR 59, 61 (1982); Suro v. ELA, 111 DPR 456, 460 (1981); Negrón Soto v. Gobernador, 110 DPR 664, 665 (1981); Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 107 (1980); PIP v. ELA, 109 DPR 403, 414 (1980); Caribe Crown Cap v. Srio. de Hacienda, 108 DPR 796, 798 (1979); PSP v. ELA, 107 DPR 590, 615 (1978); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495, 497-98 (1978).

127 Cierta jurisprudencia, influenciado por la doctrina argentina, a menudo prefiere usar el sustantivo “doctrinario” en lugar del adjetivo “doctrinal”. De paso, me quedo corto cuando hablo de “trasfondo fáctico y doctrinario”. Pude haber añadido “procesal”. Véase Álvarez Figueredo v. González Lamela, 138 DPR 958, 973 (1995) (“trasfondo procesal, fáctico y doctrinario”). A continuación la enciclica de lo “doctrinario”:

Trasfondo doctrinario: Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 758 (1998); Pueblo v. Carmona, Rivera, 143 DPR 907, 919 (1997); Martí Méndez v. Abréu Feshold, 143 DPR 520, 541 (1997); *In re* Marrero Luna, 140 DPR 217, 221 (1996); PPD v. Gobernador II, 139 DPR 984, 988 (1996); Álvarez Figueredo v. González Lamela, 138 DPR 958, 973 (1995); Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001, 1011 (1994); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 627 (1993) (“y operacional”); *In re* Belén Trujillo, 128 DPR 949, 964 (1991); Sostre Lacot v. Echlin of PR, Inc., 126 DPR 781, 798 (1990); PR Prod. Credit Assoc. v. Registrador, 123 DPR 231, 242 (1989); Ortiz Andújar v. ELA, 122 DPR 817, 824 (1988).

Cuadro doctrinario: García v. Hosp. Reg. de Guayama, 143 DPR 829, 837 (1997); Bonilla Medina v. PNP, 140 DPR 294, 319 (1996); Sostre Lacot v. Echlin of PR, Inc., 126 DPR 781, 799 (1990).

Esquema doctrinario: Cam. Comer. Mayoristas PR v. Hernández, 140 DPR 325, 330 (1996).

Marco doctrinario: De los Ríos v. Meléndez, 141 DPR 282, 321 (1996); Díaz García v. Aponte Aponte, 125 DPR 1, 12 (1989); Reyes v. Jusino, 116 DPR 275, 289 (1985); PNP v. Tribunal Electoral, 104 DPR 741, 746 (1976).

Tratamiento doctrinario: Vega v. Luna Torres, 126 DPR 370, 377 (1990).

Cuerpo doctrinario: Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 126 DPR 653, 656 (1990); *In re* López Olmedo, 125 DPR 265, 266 (1990); Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 123 DPR 179, 181 (1989); Berberena v. Echegoyen, 123 DPR 76, 93 (1988); Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 735 (1988); Pueblo v. Malavé González, 120 DPR 470, 484 (1988); Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 548 (1979).

Acervo doctrinario: Pueblo v. Rivera Morales, 133 DPR 444, 460 (1993); *In re* López Olmedo, 125 DPR 265, 270 (1990); Ortiz Andújar v. ELA, 122 DPR 817, 823 (1988); Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 723 (1988) (“aservo” [sic, sic, sic]).

Prisma doctrinario: Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64, 184 (1998); AAA v. Librotex, Inc., 141 DPR 375, 384 (1996); Urbino v. San Juan Racing Assoc., Inc., 141 DPR 210, 216 (1996); *In re* Malavet Rodríguez, 135 DPR 823, 832 (1994); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 150 (1989); Pueblo v. Ramírez Lebrón, 123 DPR 391, 403 (1989).

Enfoque doctrinario: Codesi, Inc. v. Mun. de Canóvanas, 150 DPR 586, 590 (2000); ELA v. Rexco Industries, Inc., 137 DPR 683, 691 (1994); Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593, 607 (1992); González Camacho v. Santos Cruz, 124 DPR 396, 400 (1989); García v. The Commonwealth Ins. Co., 118 DPR 380, 392 n. 8 (1987); Empresas Capote, Inc. v. Tribunal Superior, 103 DPR 765, 770 (1975).

Estado doctrinario: Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, 123 DPR 571, 578 (1989); JRT v. UTIG, 110 DPR 237, 246 (1980); Rivera Pitre v. Galarza Martínez, 108 DPR 565, 569 (1979).

Requisito doctrinario: Ortiz Andújar v. ELA, 122 DPR 817, 824 (1988).

- Principio doctrinario:** *In re* Marrero Luna, 140 DPR 217 (1996); Pérez Mercado v. Martínez Rondón, 130 DPR 134, 156 (1992); Maldonado y Negrón v. Marrero y Blanco, 121 DPR 705, 721 (1988).
- Desarrollo doctrinario:** Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 354 n. 2 (1988).
- Cambio doctrinario:** Miranda v. ELA, 137 DPR 700, 716 (1994); Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 585 (1994).
- Debate doctrinario:** Pino Development Corp. v. Registrador, 133 DPR 373, 389 (1993); González Muñiz, *Ex parte*, 128 DPR 565, 572 (1991); Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 DPR 1, 4 (1988).
- Ciclo doctrinario:** *In re* Informe Com. Asesora Presidente, 119 DPR 165, 166 (1987).
- Ámbito doctrinario:** *In re* Informe Com. Asesora Presidente, 119 DPR 165, 223 (1987).
- Caudal doctrinario:** Raoca Plumbing v. Trans World, 114 DPR 464, 473 (1983).
- Criterio doctrinario:** Daubón Belaval v. Srio. de Hacienda, 106 DPR 400, 414 (1977).
- Resumen doctrinario:** Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 896 (1991).
- Elenco doctrinario:** PIP v. CEE, 120 DPR 580, 630 (1988).
- Lineamiento doctrinario:** Marrero v. Albany Ins. Co., 124 DPR 827, 841 (1989).
- Posición doctrinaria:** Arroyo v. Hosp. La Concepción, 130 DPR 596, 603 n. 4 (1992).
- Exposición doctrinaria:** Miranda v. ELA, 137 DPR 700, 715 (1994); Aut. Edif. Púb. v. Unión Indep. Emp. AEP, 130 DPR 983, 989 (1992); *In re* López Olmedo, 125 DPR 265, 267 (1990); Ruiz Santiago v. ELA, 116 DPR 306, 319 (1985).
- Orientación doctrinaria:** *In re* López Olmedo, 125 DPR 265, 275 (1990).
- Concepción doctrinaria:** Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 293 (1989); PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 389 (1988).
- Evolución doctrinaria:** Vencedor Dev. Corp. v. Aut. de Carreteras, 136 DPR 456, 492 (1994).
- Adhesión doctrinaria:** Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 472 (1994).
- Observación doctrinaria:** Ramallo Brothers Printing Inc. v. Ramis, 133 DPR 436, 441 (1993).
- Base doctrinaria:** Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 152 (1989).
- Postura doctrinaria:** Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 724 (1988).
- Referencia doctrinaria:** Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 356 (1988).
- Tendencia doctrinaria:** Levy v. Aut. Edif. Públicos, 135 DPR 382, 402 (1994).
- Corriente doctrinaria:** Acevedo Vilá v. Corrada del Río, 138 DPR 886, 892 (1995); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 470 (1994); Pérez Mercado v. Martínez Rondón, 130 DPR 134, 155 (1992); Pueblo v. Rivera Torres, 121 DPR 128, 142 (1988).
- Traectoria doctrinaria:** Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 DPR 110, 121 (1986).
- Incompatibilidad doctrinaria:** Rodríguez Reyes v. Caribbean Hosp. Corp., 141 DPR 182, 192 (1996).
- 128** ¿Para qué usar verbos pedestres como “basar”, “sostener” o “fundamentar”, si tenemos la capacidad de “apuntalar”? Son tantas las cosas que se apuntalan en las opiniones de cierto jurisprudente, que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores debería convertirlo en colegiado honorario. Apuntemos apuntaladamente las apuntalaciones con sus correspondientes puntales:
- Apuntalar el ordenamiento jurídico:** U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 DPR 448, 471 (1989) (con el esquema constitucional de separación de poderes); Pueblo v. Marcano Pérez, 116 DPR 917, 933 (1986) (con la presunción de capacidad mental).
- Apuntalar el sistema democrático:** AEE y AAA v. PNP, 128 DPR 294 (1991) (con el respeto a la dignidad humana y los dineros del pueblo), reiterado en PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 801 (1995); Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 442 (1991) (*idem*); Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153, 158 (1986) (con el libre fluir de las ideas).
- Apuntalar el sistema constitucional:** Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 469 (1994) (con el esquema de separación de poderes); *In re* Reforma Judicial, 136 DPR 1, 19 (1994) (con el sistema de pesos y contrapesos), reiterado en Regl. Creac. y Func. Unidad Esp. J. Apel., 134 DPR 670, 700 (1993).
- Apuntalar el sistema republicano de gobierno** (con la Constitución): Zavala Vázquez v. Mun. de Ponce, 139 DPR 548, 555 (1995).
- Apuntalar el sistema de gobierno de leyes, no de hombres** (con una esencia): *In re* V. Limit. Const., Éticas Judicatura, 136 DPR 693, 696 (1994).
- Apuntalar el sabio y prudencial ejercicio de las facultades ejecutivas y senatoriales** (con valores y premisas legítimas): *In re* Reforma Judicial, 136 DPR 1, 44 (1994).
- Apuntalar el juzgar** (con varios presupuestos): Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 DPR 41, 51 (1994).

- Apuntalar el Derecho vivo** (con el verdadero principio de igualdad política): Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 291 (1989); PNP v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1, 72 (1988); PIP v. CEE, 120 DPR 580, 639 (1988).
- Apuntalar el derecho probatorio** (con la búsqueda de la verdad): Pueblo v. Santiago Colón, 125 DPR 442, 455 (1990).
- Apuntalar el derecho notarial y registral** (con varios principios subyacentes): Sucn. Santos v. Registrador, 108 DPR 831, 834 (1979).
- Apuntalar el derecho a la cuota viudal** (con la función social de la culpa): Guzmán Concepción, *Ex parte*, 121 DPR 629, 631 (1988); Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 DPR 1, 20 (1988).
- Apuntalar el derecho de la prensa** (con la veracidad de la información): Caribbean Int'l News Corp. v. CEE, 132 DPR 1, 4 (1992).
- Apuntalar el notariado** (con varios principios elementales): *In re* Feliciano Ruiz, 117 DPR 269, 274 (1986).
- Apuntalar el acceso al Registro** (con otros principios): Sucn. Santos v. Registrador, 108 DPR 831, 839 (1979).
- Apuntalar el debido proceso de ley** (pero no con el capricho de los acusados): Pueblo v. Rosa Atilés, 128 DPR 603, 603 (1991); Pueblo v. López Rodríguez, 118 DPR 515, 532 (1987).
- Apuntalar el proceso constitucional democrático** (con una adecuada fiscalización de las mayorías por las minorías): Rexach Benítez v. Gobernador, 119 DPR 521, 536 (1987).
- Apuntalar el poder del Estado** (con cimientos): Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 706 (1988).
- Apuntalar el origen de la ley** (con el principio religioso de descanso obligatorio dominical): Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 744 n. 26 (1988).
- Apuntalar el período de descanso** (con una presunción de incompetencia física total): Torres González v. Dpto. del Trabajo, 127 DPR 931, 940 (1991).
- Apuntalar el acceso a la papeleta electoral** (con el derecho a formar partidos políticos): PAC v. CEE, 149 DPR 244, 260 (1999).
- Apuntalar la democracia** (con las bases más esmeradas de la razón, inteligencia y voluntad): Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 431 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 284 (1989).
- Apuntalar la Constitución:** Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64, 179 (1998) (con la doctrina de separación de poderes); Com. Electoral PIP v. CEE, 139 DPR 48, 67-68 (1995) (con la neutralidad en asuntos de status); PIP v. CEE, 120 DPR 580, 631 (1988) (con las bases histórica, sociológica y política).
- Apuntalar la intención de la Asamblea Constituyente** (con el axioma sobre balance y separación de poderes públicos): PIP v. ELA, 109 DPR 685, 694 (1980).
- Apuntalar la discreción** (con la dinámica peculiar de mayor elasticidad operacional): Torres Arzola v. Policía de PR, 117 DPR 204, 215 (1986); PNP v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1, 55 (1988) (con un minucioso examen visual).
- Apuntalar la independencia judicial:** Berríos Martínez v. Gobernador II, 137 DPR 195, 262 (1994) (con el factor de neutralidad), reiterado en *In re* V. Limit. Const., Éticas Judicatura, 136 DPR 693, 704 (1994); Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 96 (1980) (con el *quid pro quo*).
- Apuntalar la conciencia del juzgador** (con las mayores probabilidades): Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 841 (1987).
- Apuntalar la regla de deferencia judicial** (con la doctrina de separación de poderes): Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 742 (1988). Esta apuntalación es vital. Recordemos que “[e]n materia de interpretación constitucional carecemos del encanto de la magia y del hechizo esférico de la consabida bola de cristal”. *Id.* en la pág. 743.
- Apuntalar la interpretación y alcance legislativo de una ley** (con andamiaje jurídico): García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193, 218 (1988).
- Apuntalar la imposición de responsabilidad penal** (con la razón de ser): Pueblo v. Rivera Torres, 121 DPR 128, 152 (1988).
- Apuntalar la Ley de la Mesada** (con el despido sin justa causa): Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 DPR 145, 151 (1987).

Apuntalar la Ley Electoral: Com. Electoral PIP v. CEE, 139 DPR 48, 67 (1995) (con el principio de neutralidad); Calcador Berríos v. Ramírez Pantojas, 121 DPR 491, 492 (1988) (con axiología neutral), reiterado en Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445, 477 (1993).

Apuntalar la libertad de cátedra (con el clima que debe prevalecer en toda democracia): CES v. Gobernador I, 134 DPR 350, 355 (1993).

Apuntalar la dinámica del sufragio (con ciertos postulados de importancia): PSP v. CEE, 110 DPR 400, 405 (1980).

Apuntalar la doctrina jurisprudencial liberal en materia electoral (con el mandato constitucional del sufragio universal): Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 246 (1990).

Apuntalar la doctrina de deferencia a los organismos administrativos (con sus experiencias y conocimientos especializados): Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 141 (1989).

Apuntalar la adjudicabilidad de una controversia (pero no con una especulación de que el culto es un estorbo per se): Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, 129 DPR 219, 224 (1991).

Apuntalar la presunción de constitucionalidad (con cimientos): Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141, 213 (1997).

Apuntalar la prohibición de intereses encontrados (con un principio deontológico): *In re* Secretario de Justicia, 119 DPR 363, 393 (1987); *In re* Secretario de Justicia, 118 DPR 827, 859 (1987).

Apuntalar la etapa formativa del individuo (con los niveles inferiores del aprendizaje): Soto Rivera v. Ayala Amely, 132 DPR 395, 398 (1992).

Apuntalar las normas de descalificación (con supuestos de sentido común): PR Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 133 DPR 112, 120 (1993).

Apuntalar un andamiaje jurídico (con un frágil sostén): Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 938 (1992).

Apuntalar un derecho constitucional (con preceptos constitucionales): Pueblo v. Bou Nevárez, 111 DPR 179, 196 (1981).

Apuntalar un estatuto: Hernández Torres v. Hernández Colón, 127 DPR 448, 453 (1990) (con una cuestionable visión sociológica); Morales Torres v. JRT, 119 DPR 286, 295 (1987) (con la representación por el abogado de la JRT); Peña Arán v. ACAA, 116 DPR 606, 613 (1985) (con una base fundamental).

Apuntalar un plan de reorganización (con una falacia): *In re* Reforma Judicial, 136 DPR 1, 4 (1994).

Apuntalar un reclamo: Álvarez Figueredo v. González Lamela, 134 DPR 374, 384 (1993) (con un acuerdo); Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 DPR 110, 116 (1986) (con una aparente dificultad); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 662 (1985) (con una expresión); El Vocero v. Cabán García, 129 DPR 709, 710 (1992) (con un derecho constitucional).

Apuntalar un testigo (con un testimonio): Coss y UPR v. CEE, 137 DPR 877, 891 (1995).

Apuntalar un recurso (con un injuncion): Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 409 (1991).

Apuntalar un mandato (con una cita): Berríos Martínez v. Gobernador II, 137 DPR 195, 261 (1994).

Apuntalar un principio de ley (con una premisa ética): Vega v. Luna Torres, 126 DPR 370, 377 (1990).

Apuntalar un dictamen: Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380, 398 (1988) (con la técnica de las correas); *In re* Secretario de Justicia, 119 DPR 363, 390 (1987) (con varias premisas principales).

Apuntalar un criterio (con una grave preocupación): Designación Juez Especial, 119 DPR 411, 414 (1987).

Apuntalar un trámite: *In re* Santos Vías, 122 DPR 881, 886 (1988) (con un acuerdo); Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 DPR 1, 37 (1987) (con unos valores).

Apuntalar un ejercicio legislativo (con un poder delegado): López, Fed. Coms. Unidos v. Mun. de San Juan, 121 DPR 75, 93 (1988).

Apuntalar un esquema legislativo y jurídico (con el derecho administrativo): *Ab intestato* Lugo Rodríguez, 151 DPR 572, 582 n. 8 (2000).

Apuntalar un estudio jurídico (con ciertos postulados): Pueblo v. Amador Rodríguez, 151 DPR 550, 559 (2000).

Apuntalar un precedente (con una víctima inocente): Pueblo v. Rivera Torres, 121 DPR 128, 145 (1988).

- Apuntalar un fundamento valorativo** (con el elemento de notoriedad sobre principios básicos y universales científicos y anatómicos): Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 695 (1988).
- Apuntalar un estándar objetivo** (con la figura del paciente prudente y razonable): Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 687 n. 4.
- Apuntalar un factor** (con una presunción): Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 873 (1988).
- Apuntalar un fenómeno (con criterios razonables): ELA v. Rexco Industries, Inc., 137 DPR 683, 690 (1994).
- Apuntalar un pronunciamiento** (con los hechos del caso): Guayama Health Mgmt., Inc. v. JRT, 122 DPR 145, 157 (1988).
- Apuntalar un enriquecimiento negativo** (con una premisa): AEE y AAA v. PNP, 128 DPR 294, 297 (1991); Ortiz Andújar v. ELA, 122 DPR 817, 827 (1988).
- Apuntalar un decreto de inconstitucionalidad** (con unas premisas deficientes): Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 582 (1994).
- Apuntalar un discrimen político** (con una solicitud del Gobernador): CES v. Gobernador I, 134 DPR 350, 359 (1993), reiterado en CES, UPR v. Gobernador, 137 DPR 83, 87 (1994).
- Apuntalar un disenso** (con varios principios): PNP v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1, 42 (1988).
- Apuntalar un Canon de Ética Profesional** (con la deseabilidad de un pacto escrito): Nassar Rizek v. Hernández, 123 DPR 360, 372 (1989).
- Apuntalar un enfoque** (con un automóvil): Pueblo v. Castro Rosario, 125 DPR 164, 178 (1990).
- Apuntalar un balance** (con un voto por partido): Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 122 (1989).
- Apuntalar un razonamiento**: Pueblo v. Frometa Hazoury, 140 DPR 18, 20 (1996) (con unas objeciones); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 245 (1989) (con una premisa errónea).
- Apuntalar un imperativo de nuestro esquema constitucional electoral** (con el principio rector de gobierno por consentimiento de los gobernados): PAC v. CEE, 149 DPR 244, 256 (1999).
- Apuntalar una proposición** (con un lenguaje crucial): PPD v. Gobernador, 111 DPR 8, 39 (1981).
- Apuntalar una disidencia** (con tres supuestos básicos): *In re* Rodríguez Torres, 106 DPR 698, 745 (1978).
- Apuntalar una regla**: Pueblo v. Monge Sánchez, 122 DPR 590, 593 (1988) (con una frase genérica); Pueblo v. Mendoza Lozada, 120 DPR 815, 838 (1988) (con la garantía de confiabilidad); Pueblo v. De Jesús Ayuso, 119 DPR 21, 38-39 (1987) (con una hipótesis); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35, 70 (1986) (con dos factores altamente contingentes); Pueblo v. Rivera Navarro, 113 DPR 642, 650 (1982) (con una premisa).
- Apuntalar una norma**: Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 889 (1991) (con una base alterna); Pueblo v. Morales Díaz, 120 DPR 249, 253 (1987) (con un razonamiento); Ortalaza García v. FSE, 116 DPR 700, 702 (1985) (con una premisa inarticulada).
- Apuntalar una imposición fiscal** (con un canon de ética): Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 DPR 110, 122 (1986).
- Apuntalar una política pública**: Dolphin Int'l of PR v. Ryder Truck Lines, 127 DPR 869, 892 (1991) (con cimientos); Soto v. Tropigas de PR, 117 DPR 863, 870 (1986) (con la naturaleza peligrosa de la ocupación de bombero).
- Apuntalar una sentencia**: Pueblo v. Lebrón, 141 DPR 736, 741 (1996) (con la consolidación del Tribunal de Primera Instancia); Pueblo v. Ocasio Hernández, 139 DPR 84, 95 (1995) (con una tesis); Pueblo v. Millán y Rexach, 133 DPR 87, 101 (1993) (con una interpretación equivocada); García Cabán v. UPR, 120 DPR 167, 185 (1987) (con una decisión); Díaz v. ELA, 118 DPR 395, 400 (1987) (con la doctrina de res ipsa loquitur).
- Apuntalar una voluntad** (con otra voluntad): Torre Ginés v. ELA, 118 DPR 436, 446 (1987).
- Apuntalar una doctrina**: Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 588 (1994) (con la cláusula de establecimiento); Del Toro Lugo v. ELA, 136 DPR 973, 1008 (1994) (con coordenadas fácticas); Fed. Pesc. Playa Picúas v. U.S. Inds., Inc., 135 DPR 303, 353 (1994) (con una visión); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 712 (1987) (con una fórmula general).
- Apuntalar una causa de acción**: Martínez Soria v. Proc. Esp. Rel. Fam., 151 DPR 41, 51 (2000) (con una causa distinta); Acevedo Vilá v. Corrada del Río, 138 DPR 886, 891 n. 1 (1995) (con unas enmien-

das ultra vires a un reglamento); *Mortensen & Lange v. S.J. Mercantile Corp.*, 119 DPR 345, 359 (1987) (con el incumplimiento de un contrato).

Apuntalar una impresión (con nada): *In re Secretario de Justicia*, 119 DPR 363, 386 (1987).

Apuntalar una interpretación (con el más mínimo indicador): *Pueblo v. Arandes de Celis*, 120 DPR 530, 547 (1988).

Apuntalar una normativa jurisprudencial (con la teoría de la agencia): *Pueblo v. Rivera Torres*, 121 DPR 128, 146 (1988).

Apuntalar una negativa (con un enfoque): *Rodríguez Ramos v. CEE*, 121 DPR 342, 345 (1988).

Apuntalar una propuesta (con casuística): *Pueblo v. García Colón*, 122 DPR 334, 352 (1988).

Apuntalar una opinión: *Aponte v. Sears Roebuck de PR*, 144 DPR 830, 852 (1998) (con una apreciación fáctica inverosímil); *Álvarez Figueredo v. González Lamela*, 138 DPR 958, 967 (1995) (con una premisa errónea); *Pueblo v. González Román*, 138 DPR 691, 710 (1995) (con una configuración fáctica no avalada por la prueba); *El Vocero de PR v. Nogueras II*, 138 DPR 642, 656 (1995) (con unas premisas erróneas); *Berrios Martínez v. Gobernador II*, 137 DPR 195, 260, 263 (1994) (con el principio de neutralidad); *Pueblo v. Rivera Morales*, 133 DPR 444, 460 (1993) (con una premisa); *Granados v. Rodríguez Estrada I*, 124 DPR 1, 142 (1989) (con una malentendida deferencia); *Nogueras v. Hernández Colón*, 127 DPR 638, 683 (1991) (con una falacia); *Medina Bernard v. Adm. Corrección*, 126 DPR 800, 803 (1990) (con dos postulados); *PNP v. Hernández, Srio. DTOP*, 122 DPR 362, 372 (1988) (con un razonamiento circular equivocado).

Apuntalar una cuota anual (con el costo de las operaciones): *Ramírez v. Club Cala de Palmas*, 123 DPR 339, 346 (1989).

Apuntalar una reconversión (con una supuesta impericia profesional forense): *Nassar Rizek v. Hernández*, 123 DPR 360, 368 (1989).

Apuntalar una visión decisoria (con una cita): *Cintrón Adorno v. Gómez*, 147 DPR 576, 599 (1999).

Apuntalar una etapa formativa (con los niveles inferiores del aprendizaje): *De Paz Lisk v. Aponte Roque*, 124 DPR 472, 501 (1989).

Apuntalar una orden (con una columna vertebral): *Granados v. Rodríguez Estrada II*, 124 DPR 593, 640 (1989).

Apuntalar una premisa: *Ramos Acevedo v. Tribunal Superior*, 133 DPR 599, 631 (1993) (con normas de derecho consuetudinario); *ELA v. Asoc. Empleados Obras Púb. Mun.*, 126 DPR 320, 336 (1990) (con una certificación).

Apuntalar una consulta (con una opinión del Secretario de Justicia): *In re Cruz Cruz*, 126 DPR 448, 455 n. 1 (1990).

Apuntalar una tesis: *Nieves Vélez v. Bansander Leasing Corp.* 136 DPR 827, 854 (1994) (con una ficción); *Banco Comercial de Mayagüez v. Registrador*, 126 DPR 510, 516 (1990) (con una exención de un permiso).

Apuntalar una solicitud de revisión (con un planteamiento de inconstitucionalidad): *Sostre Lacot v. Echlin of PR, Inc.*, 126 DPR 781, 783 (1990).

Apuntalar una contención: (con los debates de la Asamblea Constituyente) *Nogueras v. Hernández Colón*, 127 DPR 405, 430 (1990).

Apuntalar una conclusión (con la doctrina de objeto ilegal a plena vista): *Pueblo v. Rivera Colón*, 128 DPR 672, 699 (1991).

Apuntalar una decisión (con una interpretación confiscatoria): *Granados v. Rodríguez Estrada I*, 124 DPR 1, 290 (1989).

Apuntalar una abstención prudencial (con un principio): *Granados v. Rodríguez Estrada I*, 124 DPR 1, 264 (1989).

Apuntalar una tendencia judicial (con dos enfoques): *Fuertes v. ARPE*, 134 DPR 947, 958 (1993).

Apuntalar una licencia (con una justificación o excusa): *Berberena v. Echegoyen*, 128 DPR 864, 897 (1991).

Apuntalar una falacia (con un extenso diálogo): *Berberena v. Echegoyen*, 128 DPR 864, 909 (1991).

Apuntalar una razón de decidir: *Mun. de San Juan v. JCA*, 149 DPR 263, 288 (1999) (“en una sola conclusión producto de un automatismo judicial novel, desasociado de la particular realidad y dinámica procesal-acumulativamente escalonada, en etapas”); *Misión Ind. PR v. JP y AAA*, 142 DPR 656,

715 (1997) (con una sospecha); In re Secretario de Justicia, 119 DPR 363, 390 (1987) (con varias premisas principales).

Apuntalar unos principios adjudicativos (con cimientos): In re Malavet Rodríguez, 135 DPR 823, 824 (1994).

Apuntalar unas interrogantes: Pueblo v. González Navarrete, 117 DPR 577, 597 (1986) (con una visión del proceso judicial).

Apuntalar unas alegaciones (con un sostén): González v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 749, 776 (1989).

Esta profusión de apuntalaciones originadas por uno de los puntales de nuestro derecho patrio es digna de admiración. Después de todo, es harto conocido “lo difícil que es estructurar una apuntalada”. Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 DPR 313, 320-21 (1986).

129 Quien apuntala, naturalmente, también construye andamiaje. Edifiquemos:

Andamiaje constitucional: Com. Electoral PIP v. CEE, 139 DPR 48, 70 (1995); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 (1977).

Andamiaje administrativo: Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 435 (1997).

Andamiaje jurídico: *In re* Colón Ramery, 133 DPR 555, 583 (1993); García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193, 218 (1988); Márquez Alfonso v. FSE, 105 DPR 322, 326 (1976).

Andamiaje sustantivo: Márquez Alfonso v. FSE, 105 DPR 322, 326 (1976).

Andamiaje electoral: Com. Electoral PIP v. CEE, 139 DPR 48, 74 (1995).

Andamiaje legal: CRUV v. Hampton Dev., 112 DPR 59, 62 (1982).

Andamiaje organizacional: Zachry v. Tribunal Superior, 104 DPR 267, 280 (1975).

Andamiaje procesal: Márquez Alfonso v. FSE, 105 DPR 322, 326 (1976).

Andamiaje gubernamental: PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 381 (1988).

Andamiaje gubernamental intrincado: Besosa v. Corp. Azucarera de PR, 137 DPR 939, 950 (1995).

Andamiaje frágil anclado en un complaciente espejismo: Regl. Creac. y Func. Unidad Esp. J. Apel., 134 DPR 670, 701 (1993).

Andamiaje que sostiene el sistema de colegios combinados: PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló 110 DPR 248, 306 (1980).

Andamiaje del derecho administrativo: Misión Ind. PR v. JP y AAA, 142 DPR 656, 730 (1997).

Andamiaje del plan de reorganización judicial: *In re* Reforma Judicial, 136 DPR 1, 8 (1994).

Andamiaje de la opinión mayoritaria: Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 794 (1994); Berberena v. Echevoyen, 128 DPR 864, 889 (1991).

Hay quien, emulando al buen padre de familia o persona prudente y razonable, llega al extremo de circunspección y cuidado:

Apuntalar un andamiaje: Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 938 (1992).

130 La proliferación de cauces en la jurisprudencia patria dejaría estupefacto al más avezado hidrógrafo, y lo convertiría en un rebelde sin cauce [sic]:

Cauce justo: *In re* Cardona Álvarez, 116 DPR 895, 903 (1986).

Cauce normal: Brunet Justiniano v. Gobernador, 130 DPR 248, 256 (1992).

Cauce adecuado: Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 157 (1989).

Cauce desbordado: Ortiz Torres v. K & A Developers, Inc., 136 DPR 192, 198 (1994).

Cauce primario: Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel. de Fam., 148 DPR 201, 224 (1999).

Cauce jurídico: Srio. DACO v. J. Condóminos C. Martí, 121 DPR 807, 814 (1988); *In re* Lavastida, 109 DPR 45, 107 (1979).

Cauce administrativo: Caribbean Int'l News Corp. v. CEE, 132 DPR 1, 7 (1992); PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 372 (1988); Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 357, 358 (1988); García Cabán v. UPR, 120 DPR 167, 184 (1987); First Fed. Savs. v. Asoc. de Condóminos, 114 DPR 426, 438 (1983).

Cauce administrativo-senatorial: El Vocero de PR v. Nogueras I, 138 DPR 103, 135 (1995).

Cauce penal: Casiano, Jr. v. Borintex Mfg. Corp., 133 DPR 127, 134 (1993).

Cauce que propugna un interés social: Torres v. ELA, 130 DPR 640, 654 (1992).

Cauce de familia: Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 DPR 1, 6 n. 2 (1988).

Cauce de un recurso: Banco de Santander v. Rosario Cirino, 126 DPR 591, 611 n. 9 (1990); Ruiz Santiago v. ELA, 116 DPR 306, 308 (1985).

trazará las coordenadas¹³¹ principales para el desarrollo de nuestra Escuela y, como corolario,¹³² señalará el horizonte¹³³ decisivo¹³⁴ para el estudio de nuestro

-
- Cauce de un precepto generoso:** Casera Foods, Inc. v. ELA, 108 DPR 850, 851 (1979).
- Cauce de la quebrada:** Ortiz Torres v. K & A Developers, Inc., 136 DPR 192, 194, 196 (1994); Pérez Cruz v. Fernández Martínez, 106 DPR 144, 150 (1977).
- Cauce de la Constitución:** Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 404 (1991).
- Cauce del proceso administrativo:** Brunet Justiniano v. Gobernador, 130 DPR 248, 256 (1992); Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 355 (1988).
- Cauces mayores:** Ortiz Torres v. K & A Developers, Inc., 136 DPR 192, 201 (1994).
- Cauces legales:** Pueblo v. Ortiz Martínez, 123 DPR 820, 832 (1989).
- Cauces electorales:** PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 296 (1980).
- Cauces constitucionales:** Noriega v. Hernández Colón, 126 DPR 42, 70 (1990).
- Cauces de nuestra Constitución:** Noriega v. Hernández Colón, 126 DPR 42, 69 n. 2 (1990).
- Cauces de discusión:** Colegio de Abogados de PR v. Schneider, 112 DPR 540, 560 (1982).
- 131** El curso de Derecho y Geografía se impone. Su temario es ambicioso y diverso:
- Coordenadas correctas:** Noguera v. Hernández Colón, 127 DPR 405, 429 (1990); Pueblo v. Santiago Colón, 125 DPR 442, 453 (1990); Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 50 (1988).
- Coordenadas justas:** Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 246 (1992).
- Coordenadas nuevas:** Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 629 (1983).
- Coordenadas decisorias:** Hattton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001, 1002 (1994); Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 246 (1992); *In re* Belén Trujillo, 128 DPR 949, 964 (1991); Noguera v. Hernández Colón, 127 DPR 638, 682 (1991).
- Coordenadas adjudicativas:** García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193, 216 (1988).
- Coordenadas jurídicas:** Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 401 (1999); Román v. Trib. Exam. de Médicos, 116 DPR 71, 86 (1985).
- Coordenadas fácticas:** Del Toro Lugo v. ELA, 136 DPR 973, 1008 (1994); Coop. Seguros Múltiples de PR v. Lugo, 136 DPR 203, 207 (1994).
- Coordenadas sin borrones:** Dávila v. Agrait, 116 DPR 549, 564 (1985).
- Coordenadas procesales:** Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 668 (1985).
- Coordenadas constitucionales:** *In re* Conferencia Judicial, 122 DPR 420, 456 (1988); *In re* Informe Com. Asesora Presidente, 119 DPR 165, 179 (1987); Betancourt Morales v. Gobernador de PR, 118 DPR 149, 154 (1986).
- Coordenadas de la Constitución:** Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 292 (1989).
- Coordenadas de los principios y derechos constitucionales:** Academia San Jorge v. JRT, 110 DPR 193, 196 (1980).
- Coordenadas del derecho estatutario:** Fajardo v. DIP, 126 DPR 619, 632 (1990).
- Coordenadas del recurso:** Noriega v. Hernández Colón, 126 DPR 42, 66 (1990); González v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 749, 761, 782-83 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada IV, 124 DPR 720, 726 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 682 (1989); Pueblo v. Martínez Martí, 115 DPR 832, 845 (1984).
- Coordenadas (a secas):** Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 726 (1988).
- 132** Para una colorida variedad de corolarios, véase Frente Unido v. CEE, 150 DPR 611, 615 (2000); Angueira v. JLBP, 150 DPR 10, 23 (2000); Ortiz v. U. Carbide Grafito, Inc., 148 DPR 860, 865 (1999); Pres. del Senado, 148 DPR 737, 762 (1999); Hernández v. J. Apel. Sist. Educ. Pub., 147 DPR 840, 854 (1999); Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64, 180, 198 (1998); Disidente Universal de PR v. Depto. de Estado, 145 DPR 689, 695 (1998); Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141, 219, 229 (1997); Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 932 (1997); Col. Ópticos PR v. Pearle Vision Center, 142 DPR 221, 234 (1997); Soc. de Gananciales v. Paniagua Diez, 142 DPR 98, 106 (1996); García Martínez v. CEE, 141 DPR 593, 597 (1996); El Vocero de PR v. Contralor, 141 DPR 602, 605 (1996); Noguera v. Rexach Benítez I, 141 DPR 470, 514-15 n. 4 (1996); PPD v. Peña Clos II, 140 DPR 1001, 1005 (1996); PPD v. Peña Clos I, 140 DPR 779, 854 (1996); Com. Electoral PIP v. CEE, 139 DPR 48, 75 (1995); Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 DPR 735, 746 (1994); Miranda v. ELA, 137 DPR 700, 716 (1994); Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 613 (1994); Berríos Martínez v. Gobernador II, 137 DPR 195, 269 (1994); CES UPR

v. Gobernador, 137 DPR 83, 86 (1994); Soc. de Gananciales v. Srio. de Justicia, 137 DPR 70, 76 (1994); Vencedor Dev. Corp. v. Aut. de Carreteras, 136 DPR 456, 488 (1994); UPR v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 DPR 335, 407 (1994); U.C.PR v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133, 144 (1994); *In re* Reforma Judicial, 136 DPR 1, 26 (1994); Fuertes v. ARPE, 134 DPR 947, 955 (1993); CEE v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 943 (1993); CES v. Gobernador I, 134 DPR 350, 355 (1993); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 629, 651 (1993); Pino Development Corp. v. Registrador, 133 DPR 373, 384, 390 (1993); Pueblo v. Moreno Morales II, 132 DPR 290, 294 n. 2 (1992); Martínez Díaz v. ELA, 132 DPR 200, 209, 211 (1992); Pueblo v. López Guzmán, 131 DPR 867, 901 (1992); Cirino Vizcarrondo v. Clínica Gubern, 129 DPR 977, 1017 (1992); Alameda Tower Associates v. Muñoz Román, 129 DPR 698, 706 (1992); Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 36 (1990); Vega v. Luna Torres, 126 DPR 370, 373 (1990); *In re* López Olmedo, 125 DPR 265, 268 n. 2 (1990); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 282 (1989); García Colón v. De Jesús López, 124 DPR 708, 713 (1989); De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 499 (1989); Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, 123 DPR 571, 577 (1989); Pueblo v. Ramírez Lebrón, 123 DPR 391, 404 (1989); Nassar Rizek v. Hernández, 123 DPR 360, 373 (1989); Pueblo v. Monge Sánchez, 122 DPR 590, 595 (1988); *In re* Conferencia Judicial, 122 DPR 420, 456 (1988); PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 375-76 (1988); Pueblo v. García Colón, 122 DPR 334, 354 (1988); Maldonado y Negrón v. Marrero y Blanco, 121 DPR 705, 716 (1988); Guzmán Concepción, *Ex parte*, 121 DPR 629, 632 (1988); Pueblo v. Rivera Torres, 121 DPR 128, 148 (1988); Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 53, 63 (1988); Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 DPR 1, 20 (1988); Pueblo v. Mendoza Lozada, 120 DPR 815, 836 (1988); PIP v. CEE, 120 DPR 580, 648, 660 (1988); Pueblo v. Martínez Torres, 120 DPR 496, 512 (1988); Fernández Sánchez v. Fernández Rodríguez, 120 DPR 422, 432 (1988); *In re* Informe Com. Asesora Presidente, 119 DPR 165, 179 (1987); *In re* Secretario de Justicia, 118 DPR 827, 848 (1987); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 710 (1987); Rosado Collazo v. Registrador, 118 DPR 577, 584 (1987); Torre Ginés v. ELA, 118 DPR 436, 452, 463 (1987); Díaz v. Navieras de PR, 118 DPR 297, 303 (1987); Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 DPR 110, 132, 134 (1986); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 664 (1985); Ramírez v. Registrador, 116 DPR 541, 548 (1985); Reyes v. Jusino, 116 DPR 275, 289 (1985); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 182 (1985); WRC Props., Inc. v. Santana, 116 DPR 127, 138 (1985); Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 619 (1984); Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 DPR 368, 395 (1984); Oliveras v. Panniagua Diez, 115 DPR 257, 264 (1984); San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 720 (1983); PR Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328, 340 (1983); Ibáñez v. Molinos de PR, Inc., 114 DPR 42, 47 (1983); *In re* Olmo Olmo, 113 DPR 441, 455 (1982); Equity de PR, Inc. v. DACO, 113 DPR 250, 257 (1982); Díaz de Llovet v. Gobernador, 112 DPR 747, 757 (1982); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 716, 735 (1982); Ramos v. Srio. de Comercio, 112 DPR 514, 518 (1982); Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, 112 DPR 376, 380 (1982); Pueblo v. Olivero Rodríguez, 112 DPR 369, 375 (1982); CRUV v. Hampton Dev., 112 DPR 59, 64 (1982); La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, 112 DPR 9, 31 (1982); PPD v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199, 322 (1981); Padró Collado v. Espada, 111 DPR 56, 80 (1981); Negrón Soto v. Gobernador, 110 DPR 664, 668 (1981); PSP v. Com. Estatal de Elecciones, 110 DPR 400, 429, 443 (1980); Noguerras v. Tonos Florenzán, 110 DPR 356, 363 (1980); Pueblo v. Foster, 110 DPR 8, 12 (1980); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 719, 720 (1980); PIP v. ELA, 109 DPR 403, 422, 438 (1980); PIP v. ELA, 109 DPR 335, 348, 353 (1980); Sucn. Santos v. Registrador, 108 DPR 831, 835, 843 (1979); Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 550 (1979); Herrera Ramos v. Comisión Industrial, 108 DPR 316, 320 (1979); Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 DPR 225, 258 (1978); Admor., F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., 107 DPR 789, 792 (1978); PSP v. ELA, 107 DPR 590, 623 (1978); Democratic Party v. Tribunal Electoral, 107 DPR 1, 31 (1978); Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 816 (1978); *In re* Rodríguez Torres, 106 DPR 698, 753 (1978); Pueblo v. Torres Lozada, 106 DPR 588, 643 (1977); Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 DPR 557, 579 (1977); García Passalacqua v. Tribunal Electoral, 105 DPR 49, 69 (1976); PNP v. Tribunal Electoral, 104 DPR 741, 755 (1976); Muñoz Meléndez v. Farmer, 104 DPR 297, 301 (1975); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267, 271 (1975); El Día, Inc. v. Tribunal Superior, 104 DPR 149, 151 (1975); Hernández Denton v. Western Pines Corp., 103 DPR 741, 747 (1975); Colón Molinary v. AAA, 103 DPR 143, 154 (1974); JRT v. Marex Const. Co., Inc., 103 DPR 135, 140 (1974).

133 A continuación un listado vertical de la variedad de horizontes que ha producido una sola pluma judicial:

Horizonte decisorio: Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638, 657 (1991); *Ex parte* Robles Sanabria, 126 DPR 382, 384 (1990); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 634 (1989); Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 DPR 434, 465 (1988); *In re* Secretario de Justicia, 118 DPR 827, 846 (1987); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 704 (1987); Ades v. Zalman, 115 DPR 514, 518 (1984).

Horizonte despejado: Vicéns v. UPR, 117 DPR 771, 780 (1986).

Horizonte aclarado: San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 720 (1983); PR Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328, 340 (1983).

Horizonte histórico: Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 DPR 205, 219 (1982); PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 309 (1980).

Horizonte final adjudicativo: Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 DPR 110, 131 (1986).

Horizonte ampliado: PRP. v. ELA, 115 DPR 631, 640 (1984).

Horizonte del individuo: Oliveras v. Paniagua Diez, 115 DPR 257, 264 n. 7 (1984).

Horizonte de los mejores intereses del menor: De los Ríos v. Meléndez, 141 DPR 282, 331 (1996).

Horizontes amplísimos: Dávila v. Agraít, 116 DPR 549, 558 (1985).

Horizontes más amplios: Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 101 (1989).

Horizontes más espaciosos: Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 123 DPR 179, 188 (1989); Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 714 (1988).

Horizontes explorados: Pueblo v. Conde Pratts, 115 DPR 307, 332 (1984).

Horizontes ensanchados: Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 713, 718 (1988).

Horizontes ilimitados: Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 632 (1983).

Horizontes inimaginables: Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 684 (1989).

Horizontes extraños: Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, 130 DPR 352, 361 (1992) (*per curiam* de pluma inconfundible).

Horizontes correctos: Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 599 (1994).

Horizontes nuevos: Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 647 (1993); Hernández Denton v. Western Pines Corp., 103 DPR 741, 749 (1975).

Horizontes jurídicos: Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 DPR 1, 3 (1988).

Horizontes espirituales: Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 716 (1988).

Horizontes constitucionales: Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 863 (1992); Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 111 (1980).

Horizontes procesales: Martínez Díaz v. ELA, 132 DPR 200, 212 (1992).

Horizontes sustantivos: Martínez Díaz v. ELA, 132 DPR 200, 212 (1992).

Horizontes de un precepto: PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 304 (1980).

Horizontes de una disposición: PIP v. ELA, 109 DPR 685, 694 (1980).

Horizontes del derecho procesal penal: Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 634 (1993).

Horizontes del campo de la ética del abogado puertorriqueño: *In re* Rodríguez Torres, 106 DPR 698, 745 (1978).

134 La *decisoriedad* decididamente frecuenta las decisiones de cierto decisor. Lo *decisorio* no se limita a los horizontes, véase *supra* nota 133, ítem 1, sino que se extiende también a otros usos:

Análisis decisorio: PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 733 (1995); La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, 112 DPR 9, 21 (1982).

Proceso decisorio: Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 DPR 412, 414 (1995); Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 DPR 735, 756 (1994); Regl. Creac. y Func. Unidad Esp. J. Apel., 134 DPR 670, 695, 713 (1993); Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 678, 686 (1991); Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 889 (1991); CRUV v. Hampton Dev., 112 DPR 59, 63, 64, 66 (1982); Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 DPR 205, 213 (1982); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 392, 395 (1985); Rivera Santiago v. Srio de Hacienda, 119 DPR 265, 277 (1987); Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 841 (1987); Noriega Rodríguez v. Gobernador, 120 DPR 267, 273 (1988) (*per curiam* de pluma inconfundible); Díaz Delgado v PPD, 121 DPR 165, 185 (1988); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 670 (1988); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 296 (1989); Noriega v. Hernández Colón, 126 DPR 42, 59 (1990); Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 389 (1990).

Impacto decisorio: Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 403 (1999); Quintana Tirado v. Longoria, 112 DPR 276, 279 (1982); Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 274 (1990).

Valor decisorio: Herrero v. Alcalde, Mun. de San Juan, 150 DPR 696, 700 (2000); Colón v. Alcalde Mun. de Ceiba, 112 DPR 740, 746 (1982); Franco v. Municipio de Cidra, 113 DPR 260, 264 (1982); *In re* Feliciano, 115 DPR 172, 181 (1984); Pueblo v. Conde Pratts, 115 DPR 307, 331 (1984); Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650, 696 (1988).

Instrumento decisorio: Regl. Creac. y Func. Unidad Esp. J. Apel., 134 DPR 670, 712 (1993).

Momento decisorio: Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 154 (1999).

Fundamento decisorio: Pueblo v. López Guzmán, 131 DPR 867, 901 (1992).

Elemento decisorio: PAC v. CEE, 149 DPR 244, 260 (1999); Rivera Jiménez v. Garrido & Co., 134 DPR 840, 858 (1993); Torre Ginés v. ELA, 118 DPR 436, 448-49 (1987) (“El [procedimiento] lógico implica discernir el elemento racional y decisorio expositivo de sus efectos naturales y legítimos.”); Guzmán Concepción, *Ex parte*, 121 DPR 629, 631 (1988); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 123 (1989).

Delineamiento decisorio: Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 632 (1983) (“¿dónde se trazan los linderos en el delineamiento decisorio de la ramificación de esos poderes?”).

Grado decisorio: PRP. v. ELA, 115 DPR 631, 636 (1984).

Corolario decisorio: Reyes v. Jusino, 116 DPR 275, 289 (1985).

Marco decisorio: Pueblo v. Ortiz Tirado, 116 DPR 868, 887 (1986); Fernández Sánchez v. Fernández Rodríguez, 120 DPR 422, 434 (1988); *In re* Colton Fontán, 128 DPR 1, 13 (1991); González Muñiz, *Ex parte*, 128 DPR 565, 574 (1991).

Prisma decisorio: Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 416 n. 18 (1999); *In re* Belén Trujillo, 128 DPR 949, 974 (1991); Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 DPR 110, 120 (1986); Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 DPR 434, 469 (1988); Pueblo v. Arandes de Celis, 120 DPR 530, 550 (1988); Pueblo v. Lausell Hernández, 121 DPR 823, 831 (1988); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 646 (1989); González v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 749, 771 (1989).

Curso decisorio: *Ab intestato* Lugo Rodríguez, 151 DPR 572, 582 (2000); Pueblo v. Agostini Rodríguez, 151 DPR 426, 430 (2000); Pueblo v. Rodríguez Meléndez, 150 DPR 519, 524 (2000); Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 399 (1999); Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64, 188 (1998); Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141, 215 (1997); Misión Ind. PR v. JP y AAA, 142 DPR 656, 712 (1997); Soc. de Gananciales v. García Robles, 142 DPR 241, 269 (1997); *In re* Corona Muñoz I, 141 DPR 640, 642 n. 1 (1996); García Martínez v. CEE, 141 DPR 593, 602 (1996); Cruz Ayala v. Rivera Pérez, 141 DPR 44, 63 (1996); Santiago Vázquez v. ELA, 138 DPR 10, 13 (1995); PPD v. Gobernador, 136 DPR 860, 863 (1994); Ortiz Torres v. K & A Developers, Inc., 136 DPR 192, 201 (1994); Regl. Creac. y Func. Unidad Esp. J. Apel., 134 DPR 670, 709 (1993); Aut. Edif. Púb. v. Unión Indep. Emp. AEP, 130 DPR 983, 995 (1992); Pueblo v. López López, 129 DPR 287, 293 (1991); Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 DPR 110, 132 (1986); *In re* Rigau, Jr., 118 DPR 89, 92 (1986) (per curiam de pluma inconfundible); Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380, 404 (1988); PIP v. CEE, 120 DPR 580, 639 (1988); Calcador Berríos v. Ramírez Pantojas, 121 DPR 491, 498 (1988); Guzmán Concepción, *Ex parte*, 121 DPR 629, 633 (1988); García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193, 215 (1988); Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 706, 749 (1988); PNP v. Rodríguez Estrada, Pres. CEE, 123 DPR 1, 72 (1988); Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 123 DPR 179, 181 (1989); Pueblo v. Castro Santiago, 123 DPR 894, 909 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 163, 291 (1989); De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 496 n. 3 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada IV, 124 DPR 720, 723 (1989); González v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 749, 768 (1989); *In re* López Olmedo, 125 DPR 265, 276 (1990); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340, 344 n. 2 (1990); Aponte v. Srio. de Hacienda, ELA, 125 DPR 610, 631 (1990); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702, 714 (1990); Pueblo v. Robles González, 125 DPR 750, 767 (1990); Noriega v. Hernández Colón, 126 DPR 42, 67 (1990); Vega v. Luna Torres, 126 DPR 370, 378 (1990); Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 274 (1990); Pueblo v. Ruiz Torres, 127 DPR 612, 620 (1990); González Muñiz, *Ex parte*, 128 DPR 565, 575 (1991).

Poder decisorio: UPR v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 DPR 335, 409 (1994); Torre Ginés v. ELA, 118 DPR 436, 446-47 n. 5 (1987).

Principio decisorio: Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 DPR 539, 576 (1999); Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64, 182 (1998).

Panorama decisorio: Del Toro Lugo v. ELA, 136 DPR 973, 1016 (1994); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 709 (1987).

Paralelismo decisorio: *In re* Informe Com. Asesora Presidente, 119 DPR 165, 220 (1987).

Camino decisorio: Rexach Benítez v. Gobernador, 119 DPR 521, 535 (1987); PIP v. CEE, 120 DPR 580, 639 (1988); PNP v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1, 72 (1988); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 291 (1989).

Norte decisorio: Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 DPR 550, 558 (1987).

Rumbo decisorio: Mundo Ríos v. Gobernador, 121 DPR 416, 419 (1988).

Ensamblaje decisorio: Maldonado y Negrón v. Marrero y Blanco, 121 DPR 705, 714 (1988).

Eje decisorio: El Vocero de PR v. ELA, 131 DPR 356, 448 (1992).

Esquema decisorio: PNP y PIP v. Rodríguez Estrada, 122 DPR 490, 508 (1988); Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 314 (1990).

Patrón decisorio: Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 109 (1989).

Método decisorio: Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 120 (1989).

Material decisorio: Regl. Creac. y Func. Unidad Esp. J. Apel., 134 DPR 670, 711 (1993).

Producto decisorio: Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 223 (1989).

Efecto decisorio: PPD v. PNP, 140 DPR 52, 59 (1996).

Concepto decisorio: Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 650 (1993).

Aspecto decisorio: Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419, 423 (1986).

Trámite decisorio: García Colón v. De Jesús López, 124 DPR 708, 710 (1989).

Enfoque decisorio: Pueblo v. Ramos Santos, 138 DPR 810, 838 (1995); Pueblo v. Robles González, 125 DPR 750, 771 (1990).

Criterio decisorio: Sánchez Soto v. ELA, 128 DPR 497, 506 (1991).

Inventario decisorio: ELA v. Asoc. Empleados Obras Púb. Mun., 126 DPR 320, 337 (1990).

Imperativo decisorio: Herrero v. Alcalde, Mun. de San Juan, 150 DPR 696, 704 (2000); Pres. del Senado, 148 DPR 737, 759 (1999); Fatach v. Triple S, Inc., 147 DPR 882, 896 (1999); Misión Ind. PR v. JP y AAA, 142 DPR 656, 721-22 (1997); Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445, 468 (1993); Álvarez Figueredo v. González Lamela, 134 DPR 374, 378 (1993); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 644 (1993); Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 907 (1991); Medina Bernard v. Adm. Corrección, 126 DPR 800, 810 (1990).

Medio decisorio: Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 277 (1990).

Alcance decisorio: UPR v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 DPR 335, 408 (1994).

Absurdo decisorio: Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 583 (1994).

Vacilación decisorio: Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 28 (1984).

Abdicación decisorio: Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 908-09 (1991).

Apreciación decisorio: Coop. Seguros Múltiples de PR v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).

Visión decisorio: Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 599 (1999); Pueblo v. Monge Sánchez, 122 DPR 590, 594 (1988).

Intervención decisorio: Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 320 (1992).

Anomalia decisorio: Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 224 (1989).

Metodología decisorio: Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 896 (1991); Pueblo v. González Malavé, 116 DPR 578, 581 (1985); Pueblo en interés menor E.L.G., 124 DPR 819, 827 (1989); Aponte v. Srio. de Hacienda, ELA, 125 DPR 610, 631 (1990); Mercado Vega v. UPR, 128 DPR 273, 290 (1991); Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 672, 694 (1991).

Filosofía decisorio: Soc. de Gananciales v. García Robles, 142 DPR 241, 261 (1997).

Clave decisorio: Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 590 (1994); González Iturregui v. González Olazábal, 132 DPR 1033, 1037 (1993); Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 DPR 717, 724 (1985).

Tesis decisorio: Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 278 (1990).

Dinámica decisorio: Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 939 (1997); *In re* Reforma Judicial, 136 DPR 1, 44 (1994); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 648 (1993); *In re* Cardona Álvarez, 116 DPR 895, 903 (1986); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 277 (1987).

Psicodinámica decisorio: Misión Ind. PR v. JP y AAA, 142 DPR 656, 722 (1997); PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 711 (1995); Regl. Creac. y Func. Unidad Esp. J. Apel., 134 DPR 670, 715 (1993).

- Mecánica decisoria:** *In re* Informe Com. Asesora Presidente, 119 DPR 165, 211 (1987); PNP y PIP v. Rodríguez Estrada, 122 DPR 490, 515 (1988); PNP v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1, 55 (1988).
- Lógica decisoria:** Pueblo v. González Román, 138 DPR 691, 715 (1995); Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 588 (1994); Coop. Seguros Múltiples de PR v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994); Pueblo v. Rosario Igartúa, 129 DPR 1055, 1083 (1992).
- Reserva decisoria:** De Jesús Ortiz v. Rivera Vargas, 140 DPR 470, 476 (1996).
- Trayectoria decisoria:** El Vocero de PR v. ELA, 131 DPR 356, 441 (1992).
- Importancia decisoria:** Levy v. Aut. Edif. Públicos, 135 DPR 382, 389 (1994); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 642 (1993); Torre Ginés v. ELA, 118 DPR 436, 442 (1987).
- Influencia decisoria:** Nieves Vélez v. Bansander Leasing Corp., 136 DPR 827, 854 (1994).
- Consciencia judicial decisoria:** Torres, *Ex parte*, 118 DPR 469, 481 (1987).
- Psicogénesis decisoria:** Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 648 (1993); Pueblo en interés menor F.S.C., 128 DPR 931, 947 (1991); Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, 129 DPR 219, 221 (1991).
- Entidad decisoria:** *In re* Informe Com. Asesora Presidente, 119 DPR 165, 192 (1987).
- Avenida decisoria:** Pueblo v. Arandes de Celis, 120 DPR 530, 545 (1988); *In re* Santos Vías, 122 DPR 881, 889 (1988); Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638, 680 (1991); Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 618, 655 (1991).
- Latitud decisoria:** Pueblo v. Rivera Torres, 121 DPR 128, 152 (1988).
- Ruta decisoria:** Andino Torres, *Ex parte*, 151 DPR 794, 806 (2000); *Ab intestato* Lugo Rodríguez, 151 DPR 572, 582 n. 8 (2000); Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 404 (1999); Mun. de San Juan v. JCA, 149 DPR 263, 298 (1999); Pueblo v. Soto González, 149 DPR 30, 46 (1999); Ruiz v. Pepsico PR, Inc., 148 DPR 586, 590 (1999); Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64, 189 (1998); Rodríguez Reyes v. Caribbean Hosp. Corp., 141 DPR 182, 193 (1996); Díaz v. Alcalá, 140 DPR 959, 973 (1996); PPD v. Peña Clos II, 140 DPR 1001, 1006 (1996); Western Fed. Savs. Bank v. Registrador, 139 DPR 328, 341 (1995); Hernández Rivera v. Mun. de Bayamón, 135 DPR 901, 922 (1994); PR Fuels, Inc. v. Empire Gas CO., Inc., 133 DPR 112, 125 (1993); Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 256 (1992); Martínez Díaz v. ELA, 132 DPR 200, 209 (1992); Pueblo v. Cabrera González, 130 DPR 998, 1002 (1992); *In re* Colón Muñoz, 131 DPR 121, 171 (1992); Reyes Ayala v. Torres Amaral, 130 DPR 743, 747 (1992); The Coca-Cola Co. v. Mun. de Carolina, 130 DPR 213, 215 (1992); Pueblo v. Hernández Maldonado, 129 DPR 472, 490 (1991); Nogueras v. Hernández Colón, 129 DPR 184, 190 (1991); Torres Solano v. PR Tel. Co., 129 DPR 202, 211 (1991); Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, 129 DPR 219, 226 (1991); Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 914 (1991); Mundo Ríos v. Gobernador, 121 DPR 477, 486 (1988); PNP v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1, 68 (1988); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 274 (1989).
- Razón decisoria:** Arroyo v. Ortiz y Franco, 133 DPR 62, 85 (1993).
- Autoridad decisoria:** Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 911 (1991); Berberena v. Echegoyen, 123 DPR 76, 99 (1988).
- Vía decisoria:** Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 156 (1999); Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141, 216, (1997); *In re* Nevárez Zavala, 123 DPR 511, 525 (1989); El Vocero de PR v. Nogueras II, 138 DPR 642, 657 (1995); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 274 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 624 (1989); AEE y AAA v. PNP, 128 DPR 294, 296 (1991).
- Infraestructura decisoria:** Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 121 (1989).
- Validez decisoria:** Pueblo v. Robles González, 125 DPR 750, 780 (1990).
- Premisa decisoria:** García O'Neill v. Cruz, 126 DPR 518, 532 (1990).
- Esencia decisoria:** Franceschini v. Ujaque Ortiz, 126 DPR 540, 550 (1990).
- Etapa decisoria:** Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 27 (1993).
- Encrucijada decisoria:** Asoc. Ctrf. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 DPR 1, 63 (1997).
- Intrínquilis decisoria:** Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64, 195 (1998); Misión Ind. PR v. JP y AAA, 142 DPR 656, 714 (1997).
- Fines decisorios:** Regl. Creac. y Func. Unidad Esp. J. Apel., 134 DPR 670, 710 (1993); Equity de PR, Inc. v. DACO, 113 DPR 250, 259 (1982); Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 DPR 219, 230 (1984); Oliveras v. Paniagua Diez, 115 DPR 257, 269 (1984); Ruiz Santiago v. ELA, 116 DPR 306, 311 (1985); Ramos v. Condominio Diplomat, 117 DPR 641, 644 (1986); Rosado Collazo v. Registrador, 118 DPR 577,

ubérrimo repertorio jurisprudencial¹³⁵ y de la arquitectura¹³⁶ de nuestro derecho autóctono en general.¹³⁷ Pero, **a manera de nota final cautelar¹³⁸ o precauto-**

581 n. 1 (1987); Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 841 (1987); Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 DPR 1, 20 (1988); Guzmán Concepción, *Ex parte*, 121 DPR 629, 631 (1988); Maldonado y Negrón v. Marrero y Blanco, 121 DPR 705, 717 (1988); PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 374 (1988); Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 741-42 n. 25 (1988); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 179 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 315 (1990).

Límites decisorios: Román Vargas v. Trib. Exam. de Médicos, 116 DPR 71, 87 n. 11 (1985).

Fundamentos decisorios: Rivera Santiago v. Srio de Hacienda, 119 DPR 265, 276 (1987).

Pronunciamientos decisorios: PPD v. PNP, 140 DPR 52, 58 (1996).

Propósitos decisorios: JRT v. Velázquez, 126 DPR 645, 648 n. 1 (1990).

Factores decisorios: JRT v. Junta de Retiro para Maestros, 127 DPR 621, 634 (1990).

Ingredientes decisorios: Regl. Creac. y Func. Unidad Esp. J. Apel., 134 DPR 670, 710 (1993).

Unidades decisorias: *In re* Informe Com. Asesora Presidente, 119 DPR 165, 192 (1987).

Alternativas decisorias: Misión Ind. PR v. JP y AAA, 142 DPR 656, 758 (1997); Pueblo v. Burgos Torres, 120 DPR 709, 725 (1988); Mundo Ríos v. Gobernador, 121 DPR 416, 427 (1988); Pueblo v. Ortiz Martínez, 123 DPR 820, 833 (1989); Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 126 DPR 653, 660 (1990); Misión Ind. PR v. JP y AAA, 142 DPR 656, 758 (1997).

Coordenadas decisorias: Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001, 1002 (1994); Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 246 (1992); *In re* Belén Trujillo, 128 DPR 949, 964 (1991); Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638, 682 (1991).

Puertas decisorias: PPD v. Gobernador I, 136 DPR 860, 867 (1994).

Por último, resulta decisivo señalar que lo decisorio no solo adjetiva; en ocasiones también cumple funciones de adverbio:

Aflorar decisoriamente: Pueblo v. Valentín Rivera, 119 DPR 281, 284 (1987).

135 Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 DPR 808, 831 (1998); Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 134 DPR 181, 246 (1993); Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 678, 680 (1991); Pueblo v. Hernández Maldonado, 129 DPR 472, 490 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 152 (1989); PNP v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1, 42 (1988); PIP v. CEE, 120 DPR 580, 647 (1988) (aquí también se invoca a nuestro “elenco doctrinario jurisprudencial”, *Id.* en la pág. 630); Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 350, 355 (1987).

Para otros “repertorios”, véase Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 742 (1988) (“repertorio de criterios jurídico-constitucionales”); Colegio de Abogados de PR v. Schneider, 112 DPR 540, 560 (1982) (“repertorio político-partidista”); PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 307 (1980) (“repertorio [de expresiones sobre la ética, la imparcialidad, la neutralidad y la verdad]”).

Nuestro jurisprudente homenajeado con aún mayor frecuencia (y redundancia solemne) se refiere a nuestra “doctrina jurisprudencial”: PAC v. ELA II, 150 DPR 805, 845 (2000); Mun. de San Juan v. JCA, 149 DPR 263, 297, 299 (1999); Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692, 720 (1999); Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 599 (1999); Pueblo v. Santiago Avilés, 147 DPR 160, 176 (1998); Pueblo v. León Cortijo, 146 DPR 394, 413 (1998); Pueblo v. Negrón Martínez II, 143 DPR 24, 41 (1997); AAA v. Librotex, Inc., 142 DPR 820, 835 (1997); RDT Const. Corp. v. Contralor I, 141 DPR 424, 447 (1996); Bco. Santander PR v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 248 (1996); Gracia Ortiz v. Policía de PR, 140 DPR 247, 253 (1996); Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 582 (1994); Del Toro Lugo v. ELA, 136 DPR 973, 1006 (1994); Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 800 (1994); Coop. Seguros Múltiples de PR v. Lugo, 136 DPR 203, 214 (1994); Cruz v. Sierra Maya, 133 DPR 871, 872 n. 1 (1993); Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 926 (1992); Torres v. ELA, 130 DPR 640, 657 (1992); Nogueras v. Hernández Colón, 129 DPR 184, 192 (1991); Pueblo v. Ríos Colón, 129 DPR 71, 97 (1991); Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638, 669 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 246 (1990); Rodríguez Meléndez v. Supermercado Amigo, Inc., 126 DPR 117, 123 (1990); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 665 (1989); González Camacho v. Santos Cruz, 124 DPR 396, 402 (1989); Guzmán Concepción, *Ex parte*, 121 DPR 629, 631 (1988); Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 DPR 1, 13, 15 n. 4 (1988); Pueblo v. Malavé González, 120 DPR 470, 492 (1988); Torres, *Ex parte*, 118 DPR 469, 479, 480 (1987); García v. The Commonwealth Ins. Co., 118 DPR 380, 386 (1987); Pueblo v. Acabá Raíces,

118 DPR 369, 374 (1987); Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 350, 355 (1987); Betancourt Morales v. Gobernador de PR, 118 DPR 149, 154 (1986); Mun. of San Juan v. Great Ame. Ins. Co., 117 DPR 632, 636 (1986); Pueblo v. Miranda Marchand, 117 DPR 303, 307 (1986); Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153, 159 (1986); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 667 (1985); Pueblo v. González Malavé, 116 DPR 578, 581 (1985); Dávila v. Agrait, 116 DPR 549, 573 (1985); Berríos v. UPR, 116 DPR 88, 94 (1985); Díaz Marez v. F.S.E., 116 DPR 50, 54 n. 3 (1985); PRP. v. ELA, 115 DPR 631, 634 (1984); Vázquez v. Morales, 114 DPR 822, 830 (1983); Raoca Plumbing v. Trans World, 114 DPR 464, 470 (1983); Perron v. Corretjer, 113 DPR 593, 597 n. 2 (1982); Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 DPR 770, 776 (1982); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 716, 732 (1982); Zurkowsky v. Honeywell, Inc., 112 DPR 271, 275 (1982); CRUV v. Hampton Dev., 112 DPR 59, 63 (1982); Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 DPR 716, 734 (1981); Padró Collado v. Espada, 111 DPR 56, 73 (1981); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980); Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 548 (1979); García v. Montero Saldaña, 107 DPR 319, 335 (1978); Democratic Party v. Tribunal Electoral, 107 DPR 1, 26 (1978); *In re* Rodríguez Torres, 106 DPR 698, 750 (1978); Pueblo v. Torres Lozada, 106 DPR 588, 633 n. 1 (1977); Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 DPR 557, 580 (1977); Daubón Belaval v. Srio. de Hacienda, 106 DPR 400, 403 (1977); Torres Pérez v. Colón García, 105 DPR 616, 632 (1977); Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 DPR 305, 307 (1976); Meléndez v. Levitt & Sons of PR, 104 DPR 797, 814 (1976); PNP v. Tribunal Electoral, 104 DPR 741, 744 (1976); Rodríguez Soto v. Adorno, 104 DPR 640, 647 (1976); Empresas Capote, Inc. v. Tribunal Superior, 103 DPR 765, 770 (1975); Fresh-O-Baking v. Molinos de PR, 103 DPR 509, 515 (1975); Báez v. Esso Standard Oil Co., 103 DPR 403, 405 (1975); Planned Credit of PR, Inc. v. Page, 103 DPR 245, 259 (1975); López Vega v. F. Vega Otero, Inc., 103 DPR 175, 176 (1974); Colón Molinary v. AAA, 103 DPR 143, 149, 154 (1974).

136 La arquitectura también recibe un vuelo importante en las opiniones de cierto magistrado:

Arquitectura ideológica: Andino Torres, *Ex parte*, 151 DPR 794, 807 (2000).

Arquitectura constitucional: Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692, 715 (1999); García Martínez v. CEE, 141 DPR 593, 594 (1996); Mercado vda. de Wilson v. Gobernador, 135 DPR 277, 283 (1994); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 632 (1983).

Arquitectura moderna constitucional-electoral: PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 670 (1995); Sánchez y Colón v. ELA II, 134 DPR 503, 536 (1993); Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445, 454 (1993); Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 406 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 127 (1989); PNP v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1, 45 (1988); PPD v. Gobernador, 111 DPR 8, 43 (1981); PSP v. Com. Estatal de Elecciones, 110 DPR 400, 407 (1980).

Arquitectura moderna estructural electoral: PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 753 n. 37 (1995).

Arquitectura externa del Código Penal: Sierra Serpa v. Martínez, 132 DPR 670, 673 (1993).

Arquitectura del art. 232 del Código Civil: Miranda v. Mun. de Barceloneta, 122 DPR 619, 621 (1988).

Arquitectura prevaleciente: García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193, 227 (1988).

Arquitectura del Estado Libre Asociado: PIP v. CEE, 120 DPR 580, 648 (1988).

Arquitectura de la pelvis: Pérez Torres v. Bladuell Ramos, 120 DPR 295, 312 (1988).

137 Que, como sabemos, porque una misma persona nos lo dijo mil y una veces de formas distintas, está en grave crisis, esmirriado y enteco. Véase José Trías Monge, *La crisis del derecho en Puerto Rico*, 49 REV. JUR. UPR 1, 8 (1980).

138 Causan trepidación las notas cautelares en ciertas opiniones. Algunas de ellas son finales, ora porque así se les llama: Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 405, 448 (1990); Rivera Torres v. Tribunal Superior, 126 DPR 692, 701 (1990); Marrero v. Albany Ins. Co., 124 DPR 827, 846 (1989); Calcador Berrios v. Ramírez Pantojas, 121 DPR 491, 499 (1988), ora porque se encuentran al final de la opinión: Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 156 (1999); Pueblo v. Castro Santiago, 123 DPR 894, 913 (1989); Rexach Benítez v. Gobernador, 119 DPR 521, 536 (1987). Otras no lo son: PAC v. ELA II, 150 DPR 805, 834 (2000); UPR v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 DPR 335, 408 (1994); Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 864 (1992).

La cautela no solo se impone respecto a las notas, sino que se extiende a infinidad de otros usos. Examinémoslos, cautamente:

Remedios: E.R. Foods, Inc. v. Lee Optical, 117 DPR 566, 569 (1986).

Consejos: *In re* Informe Com. Asesora Presidente, 119 DPR 165, 167 (1987); *In re* Reforma Judicial, 136 DPR 1, 7 (1994); Pueblo v. Ortiz Pepín, 105 DPR 547, 575 (1977).

Avisos: Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 7 (1984).

Tratos: Selosse v. Fund. Educ. Ana G. Méndez, 122 DPR 534, 548 (1988).

Enfoques: Cruz v. Centro Médico de PR, 113 DPR 719, 740 (1983).

Manejos: Pueblo v. Ortiz Pepín, 105 DPR 547, 568 (1977).

Necesidades: Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 760 (1998); Pueblo v. Frometa Hazoury, 140 DPR 18, 20, 22 (1996).

Reservas: Sostre Lacot v. Echlin of PR, Inc., 126 DPR 781, 793 n. 7 (1990).

Exigencias: Reyes v. Jusino, 116 DPR 275, 280 n. 2 (1985).

Señales: García O'Neill v. Cruz, 126 DPR 518, 533 (1990); *In re* Rodríguez Torres, 106 DPR 698, 779 (1978).

Señalamientos: Nassar Rizek v. Hernández, 123 DPR 360, 373 (1989).

Pronunciamientos: De Jesús Ortiz v. Rivera Vargas, 140 DPR 470, 475 (1996); *In re* V. Limit. Const., Ética Judicatura, 136 DPR 693, 702 (1994); Pueblo v. Ortiz Pepín, 105 DPR 547, 599 (1977).

Seguimientos: Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 672, 698 (1991).

Constreñimientos: Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 735 (1980).

Expresiones: Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 585 (1994); Lozada v. ELA, 116 DPR 202, 216 (1985); Pueblo v. Ortiz Pepín, 105 DPR 547, 598 (1977).

Evaluaciones: Pueblo v. Frometa Hazoury, 140 DPR 18, 23 (1996).

Valoraciones: Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001, 1009 (1994).

Acciones: Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600, 617 (1988).

Actuaciones: Padilla v. WKAQ Radio, 140 DPR 178, 182 (1996); Pueblo v. Miranda Santiago, 130 DPR 507, 517 (1992); PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 389 n. 5 (1988).

Adjudicaciones: Kogan v. Registrador, 125 DPR 636, 683 (1990).

Aplicaciones: Casera Foods, Inc. v. ELA, 108 DPR 850, 857 (1979).

Concesiones: Vicéns v. UPR, 117 DPR 771, 773 (1986); Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153, 159 (1986).

Destituciones: Brunet Justiniano v. Gobernador, 130 DPR 248, 261 (1992).

Consignaciones: Pueblo v. Conde Pratts, 115 DPR 307, 339 (1984).

Consideraciones: Soc. de Gananciales v. Srio. de Justicia, 137 DPR 70, 80 (1994).

Intervenciones: Fuertes v. ARPE, 134 DPR 947, 953 (1993).

Revisiones: García Cabán v. UPR, 120 DPR 167, 191 (1987).

Exposiciones: Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 840 (1987).

Indicaciones: Rivera Maldonado v. Cabrera Olivera, 130 DPR 39, 43 (1992).

Provisiones: Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 121 (1989).

Redacciones: Nassar Rizek v. Hernández, 123 DPR 360, 371 (1989).

Imputaciones: Metrop. de Préstamos v. López de Victoria, 141 DPR 844, 847 (1996); *In re* Cardona Álvarez, 116 DPR 895, 907 n. 4 (1986).

Instrucciones: Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 738 n. 24 (1980).

Exámenes: Pueblo v. De Jesús Alvarado, 148 DPR 995, 1010 (1999); Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 259 (1992); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 738 n. 24 (1980).

Tomos: Pueblo v. Frometa Hazoury, 140 DPR 18, 23 (1996); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 735, 738 (1980).

Ejercicios: Pres. del Senado, 148 DPR 737, 762 (1999); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 124 (1989); Pueblo v. Guzmán Camacho, 116 DPR 34, 37 (1984); *In re* Lavastida, 109 DPR 45, 109 (1979).

Miradas: Pueblo v. Frometa Hazoury, 140 DPR 18, 20, 21 (1996); Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 54 (1988).

Medios: Santiago Vázquez v. ELA, 138 DPR 10, 18 (1995).

Usos: Hernández López v. Santana Ramos, 147 DPR 116, 120 (1998).

Y, por supuesto:

Medidas: Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 760 (1998); Sánchez v. AEE, 142 DPR 880, 885 (1995); Misión Ind. PR v. JP y AAA, 142 DPR 656, 710 (1997); Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 424 n. 1 (1997); *In re* Corona Muñoz I, 141 DPR 640, 644 n. 2 (1996); Santiago Vázquez v. ELA, 138 DPR 10, 17

ria¹³⁹, y para evitar antinomias,¹⁴⁰ la planificación de nuestro museo no puede detenerse con la inauguración de la Sala Díaz Cruz. Esa será solo la GÉNESIS¹⁴¹ de una magna empresa. *AUNQUE “[H]ABRÁ A QUIENES EL SIMPLE*

(1995); Besosa v. Corp. Azucarera de PR, 137 DPR 939, 949 (1995); Kantara Maly v. Castro Montañez, 135 DPR 1, 7 (1994); Soto Rivera v. Ayala Amely, 132 DPR 395, 400, 411 (1992); El Vocero de PR v. ELA, 131 DPR 356, 439 (1992); Cirino Vizcarrondo v. Clínica Gubern, 129 DPR 977, 1014 (1992); Torres Solano v. PR Tel. Co., 129 DPR 202, 213 (1991); Pueblo v. Echevarría Rodríguez II, 128 DPR 752, 789 (1991); *In re* López Olmedo, 125 DPR 265, 280 (1990); Elba A.B.M. v. UPR, 125 DPR 294, 333 (1990); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 288 (1989); Pueblo v. Carrasquillo Morales, 123 DPR 690, 712 (1989); Pueblo v. Rivera Rivera, 123 DPR 739, 746 (1989); PR Prod. Credit Assoc. v. Registrador, 123 DPR 231, 245 (1989); Pueblo v. Sánchez Pérez, 122 DPR 606, 618 (1988); Mundo Ríos v. Gobernador, 121 DPR 416, 427 (1988); Pérez Torres v. Bladuell Ramos, 120 DPR 295, 322 (1988); *In re* Secretario de Justicia, 119 DPR 363, 368 (1987); *In re* Orlando Roura, 119 DPR 1, 7 (1987); *In re* Secretario de Justicia, 118 DPR 827, 869 (1987); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 180 (1985); Pauneto v. Núñez, 115 DPR 591, 594 (1984); Correa Sánchez v. Registrador, 113 DPR 581, 588 (1982); PPD v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199, 322 (1981); PPD v. Gobernador, 110 DPR 783, 792 (1981); PPD v. Barreto Pérez, 110 DPR 376, 387 (1980).

¿Si podemos tomar el sustantivo cautela y el verbo cautelar y convertirlos en el adjetivo cautelar, por qué hemos de ser cautelosos en el manejo del vernáculo? ¿Qué impide desechar el adverbio cautelosamente y progresar hacia su primo bastardo cautelarmente? Evidentemente, nada: De Jesús Ortiz v. Rivera Vargas, 140 DPR 470, 475 (1996); Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 585 (1994); Rivera Maldonado v. Cabrera Olivera, 130 DPR 39, 43 (1992); Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 672, 698 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 121 (1989); Nassar Rizek v. Hernández, 123 DPR 360, 373 (1989); PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 389 n. 5 (1988); Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 840 (1987).

139 García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193, 227 (1988). Véase además Aponte v. Sears Roebuck de PR, 144 DPR 830, 853, 866 (1998) (advertencias precautorias; medidas precautorias); *In re* López Olmedo, 125 DPR 265, 274 (1990) (gestión precautora [sic]); Marrero v. Albany Ins. Co., 124 DPR 827, 845 (1989) (“medida precautoria”); Publio Díaz v. ELA, 106 DPR 854, 865 (1978) (ídem.).

140 Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 716 (1980); Colón v. Alcalde Mun. de Ceiba, 112 DPR 740, 747 (1982); AEE v. JRT, 113 DPR 234, 236 (1982); Rodríguez v. Barreto, 113 DPR 541, 548 (1982); E.R. Foods, Inc. v. Lee Optical, 117 DPR 566, 569 (1986); Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 DPR 1, 19 (1988); Pérez Acevedo v. Superintendente Policía, 126 DPR 827, 833 (1990).

141 Si prisma amerita una letanía, cómo podríamos hacer menos con génesis? Todos de rodillas y, leyendo los pasajes correspondientes del Eclesiastés, Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 121, 294 (1989); *In re* Conferencia Judicial, 122 DPR 420, 449-50 (1988), entonemos:

Génesis del hombre: Pueblo v. Ortiz Pepín, 105 DPR 547, 586, 598 (1977).

Génesis del cargo: Betancourt Morales v. Gobernador de PR, 118 DPR 149, 154 (1986).

Génesis del derecho exclusivo sobre una marca: Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 DPR 313, 323 (1986).

Génesis del derecho a la cuota usufructuaria: Franceschini v. Ujaque Ortiz, 126 DPR 540, 555 (1990); Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 DPR 1, 10 (1988).

Génesis del deber de justa representación: JRT v. UTIG, 110 DPR 237, 243 n. 5 (1980).

Génesis del requisito de corroboración: Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 734 (1980).

Génesis del suceso: García v. AFF, 103 DPR 356, 358 (1975); Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 11 (1984).

Génesis del proceso: Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495, 518 (1978).

Génesis del convenio: Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 188 (1985).

Génesis del problema: Pino Development Corp. v. Registrador, 133 DPR 373, 377 n. 1 (1993).

Génesis del asunto: *In re* Orlando Roura, 119 DPR 1, 3 (1987).

Génesis del daño: Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 245 (1984).

- Génesis del caso:** Nogueras v. Rexach Benítez I, 141 DPR 470, 514 (1996); Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 DPR 557, 573 (1977).
- Génesis del emplazamiento:** Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 27 (1993).
- Génesis del dictamen:** Pueblo v. Ayala Rodríguez, 116 DPR 382, 384 (1985).
- Génesis del escrutinio intermedio:** Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 724 (1988).
- Génesis del servicio:** Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 633 (1993).
- Génesis del ser humano:** Vélez Toro v. Látimer, 125 DPR 109, 114 (1990).
- Génesis del incendio:** Rodríguez Ruiz v. AEE, 127 DPR 485, 493 (1990).
- Génesis del drama forense:** Reyes v. Jusino, 116 DPR 275, 277 (1985).
- Génesis del principio de igualdad electoral:** PIP v. CEE, 120 DPR 580, 652 (1988); PRP. v. ELA, 115 DPR 631, 637 (1984).
- Génesis del Fondo Electoral:** Marrero v. Mun. de Orocovis, 115 DPR 643, 647 (1984); PSP v. Srio. de Hacienda, 110 DPR 313, 322 (1980).
- Génesis del derecho al voto:** Mundo Ríos v. Gobernador, 121 DPR 477, 488 (1988).
- Génesis del derecho a comparecer por derecho propio:** B. Muñoz, Inc. v. Prod. Puertorriqueña, 109 DPR 825, 828 (1980).
- Génesis de la persona:** Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel. de Fam., 148 DPR 201, 224 (1999).
- Génesis de la empresa:** Padró Collado v. Espada, 111 DPR 56, 81 (1981).
- Génesis de la ética:** *In re* Solicitud Cepeda García, 130 DPR 18, 30 (1992).
- Génesis de la moral:** *In re* Solicitud Cepeda García, 130 DPR 18, 30 (1992).
- Génesis de la revisión judicial:** Selosse v. Fund. Educ. Ana G. Méndez, 122 DPR 534, 546 (1988).
- Génesis de la conciencia judicial:** Pueblo v. Espinet Pagán, 110 DPR 70, 75 (1980).
- Génesis de la refacción:** Rexach Concrete Corp. v. Jardines M. Olivo, 108 DPR 551, 555 (1979).
- Génesis de la cláusula de justa compensación:** Culebra Enterprises Corp. v. ELA, 143 DPR 935, 937 n. 1 (1997).
- Génesis de la cláusula rebus sic stantibus:** Casera Foods, Inc. v. ELA, 108 DPR 850, 853 (1979).
- Génesis de la legislación contra la usura:** Correa Vélez v. Carrasquillo, 103 DPR 912, 920 n. 1 (1975).
- Génesis de la figura de asunción de riesgo:** Soto v. Tropigas de PR, 117 DPR 863, 866 (1986).
- Génesis de la ejecución de hipoteca:** Ramírez v. Registrador, 116 DPR 541, 543 (1985).
- Génesis de la sentencia en rebeldía:** Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 814 (1978).
- Génesis de la responsabilidad de los socios:** Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 DPR 33, 47 (1982).
- Psicodinámica y génesis del proceso criminal:** Pueblo v. González Navarrete, 117 DPR 577, 598 (1986).
- Psico-génesis decisoria:** Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, 129 DPR 219, 221 (1991).
- Génesis psicológica de todo fallo:** Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419, 446 (1986).
- Génesis de las corporaciones públicas:** Rodríguez v. Bco. Gub. de Fom. PR, 151 DPR 383, 422 (2000).
- Génesis de las petequias:** Pueblo v. Soto González, 149 DPR 30, 45 (1999).
- Génesis de los motivos de inhibición:** Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 DPR 205, 214 (1982).
- Génesis de los partidos políticos puertorriqueños:** Democratic Party v. Tribunal Electoral, 107 DPR 1, 30 (1978).
- Génesis de nuevos partidos:** PAC v. ELA II, 150 DPR 805, 830 (2000).
- Génesis de otros partidos:** PAC v. ELA, 149 DPR 615, 619 (1999); Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445, 462 n. 2 (1993); PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 304 (1980); PIP v. ELA, 109 DPR 403, 427 (1980).
- Génesis de un pleito:** Angueira v. JLBP, 150 DPR 10, 20 (2000).
- Génesis de un pleito bastardo:** Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 649 (1989).
- Génesis de un debate doctrinario:** Pino Development Corp. v. Registrador, 133 DPR 373, 389 (1993); *Ex parte* González Muñiz, 128 DPR 565, 572 (1991).
- Génesis de un mandamus:** El Vocero de PR v. Nogueras II, 138 DPR 642, 656 (1995); Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638, 683 (1991).

- Génesis de un deber:** Culebra Enterprises Corp. v. ELA, 143 DPR 935, 947 (1997); *In re* Secretario de Justicia, 119 DPR 363, 381 (1987); *In re* Secretario de Justicia, 118 DPR 827, 863 (1987); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 239 (1984); García Santiago v. Tribunal Superior, 104 DPR 219, 228 (1975).
- Génesis de un derecho:** PAC v. CEE, 149 DPR 244, 260 (1999).
- Génesis de un juez:** *In re* Reforma Judicial, 136 DPR 1, 22 (1994).
- Génesis de un término:** Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64, 190 n. 13 (1998).
- Génesis de un plebiscito:** Sánchez y Colón v. ELA II, 134 DPR 503, 540 (1993); Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445, 477 (1993).
- Génesis de un concepto:** Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 725 (2000); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980).
- Génesis de un precepto:** Herrero v. Alcalde, Mun. de San Juan, 150 DPR 696, 702 (2000); Gorbea Vallés v. Registrador, 131 DPR 10, 18 (1992); Rodríguez Sardenga v. Soto Rivera, 108 DPR 733, 769 n. 5 (1979).
- Génesis de un conflicto:** UPR v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 DPR 335, 412 (1994).
- Génesis de un criterio:** Zachry International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267, 277 (1975).
- Génesis de un recurso:** Bonilla Medina v. PNP, 140 DPR 294, 309 (1996); Martínez Díaz v. ELA, 132 DPR 200, 205 (1992); Dávila v. Agrait, 116 DPR 549, 553 (1985); Pueblo v. Martínez Martí, 115 DPR 832, 846 (1984); Brea v. Pardo, 113 DPR 217, 228 (1982); García v. Montero Saldaña, 107 DPR 319, 323, 331 (1978).
- Génesis de un reclamo:** *In re* Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 DPR 778, 784 (1984).
- Génesis de un reglamento:** Pueblo v. Morales, 150 DPR 123, 131 (2000); Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 262 (1990).
- Génesis de un planteamiento:** Torre Ginés v. ELA, 118 DPR 436, 444 (1987).
- Génesis de un procedimiento especial:** Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 287 (1998).
- Génesis de un enfoque jurisprudencial:** Casiano, Jr. v. Borintex Mfg. Corp., 133 DPR 127, 129 n. 1 (1993).
- Génesis de un enfoque federal:** Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 264 (1989).
- Génesis de un trasfondo fáctico y procesal:** Asoc. Res. Baldrich, Inc. v. JP de PR, 118 DPR 759, 762 (1987).
- Génesis de un pagaré:** Soc. de Gananciales v. Paniagua Diez, 142 DPR 98, 106 (1996).
- Génesis de una solicitud:** *In re* Secretario de Justicia, 118 DPR 827, 866 (1987).
- Génesis de una norma:** Gorbea Vallés v. Registrador, 131 DPR 10, 18 (1992); Colón Molinary v. AAA, 103 DPR 143, 162 (1974).
- Génesis de una regla:** López Torres v. González Vázquez, 151 DPR 225, 267 (2000); Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153, 161 (1986); Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 DPR 716, 724 (1981).
- Génesis de una ley:** Pueblo v. Rosario Allende, 135 DPR 357, 358 n. 2 (1994).
- Génesis de una práctica:** Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650, 693 (1988); Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 838 (1987).
- Génesis de una interrogante:** Feliciano Figueroa v. Toste Piñero, 134 DPR 909, 910 (1993); Torre Ginés v. ELA, 118 DPR 436, 444 (1987).
- Génesis de una noticia:** Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 65 (1988).
- Génesis de una doctrina:** Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141, 209, 229 (1997); Soc. de Gananciales v. Paniagua Diez, 142 DPR 98, 103 (1996).
- Génesis de una controversia:** De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 496 n. 3 (1989); PPD v. Barreto Pérez, 110 DPR 376, 378 (1980).
- Génesis de una controversia jurídica:** Hernández Torres v. Hernández Colón, 127 DPR 974, 991 (1991).
- Génesis de una controversia deontológica:** García O'Neill v. Cruz, 126 DPR 518, 532 (1990).
- Génesis de una incursión judicial:** Pueblo v. Rosario Allende, 135 DPR 357, 358 (1994).
- Génesis de una línea jurisprudencial:** Vega v. Luna Torres, 126 DPR 370, 372 (1990).
- Génesis de una acción remedial:** Vencedor Dev. Corp. v. Aut. de Carreteras, 136 DPR 456, 488 (1994).
- Génesis de una normativa jurisprudencial:** Maldonado y Negrón v. Marrero y Blanco, 121 DPR 705, 713 (1988).

- Génesis de una condición:** Cirino Vizcarrondo v. Clínica Gubern, 129 DPR 977, 1014 (1992).
- Génesis de una alegación:** Pueblo v. Pueblo International, 106 DPR 202, 206 (1977).
- Génesis de una causa de acción:** Martínez v. McDougal, 133 DPR 228, 240 (1993); Nassar Rizek v. Hernández, 123 DPR 360, 379 (1989); Cervecería India, Inc. v. Tribunal Superior, 103 DPR 686, 689 (1975); Fresh-O-Baking v. Molinos de PR, 103 DPR 509, 522 (1975).
- Génesis de una asociación:** ELA v. Asoc. Empleados Obras Púb. Mun., 126 DPR 320, 335 (1990).
- Génesis de una comisión:** PNP y PIP v. Rodríguez Estrada, 122 DPR 490, 510 (1988).
- Génesis de una decisión:** Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 702 (1987).
- Génesis de una prohibición estatutaria:** PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 717 (1995).
- Génesis de una candidatura:** PPD v. Peña Clos II, 140 DPR 1001, 1003 (1996); PPD v. Peña Clos I, 140 DPR 779, 840 (1996); Calcador Berríos v. Ramírez Pantojas, 121 DPR 491, 499 (1988).
- Génesis de una rama del derecho:** Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 725 (2000).
- Génesis de unos principios de moral y orden público:** El Vocero de PR v. Nogueras I, 138 DPR 103, 133 (1995); *In re* Rodríguez Torres, 106 DPR 698, 772 (1978).
- Génesis de unos hechos:** Pueblo v. Ramos Álvarez, 118 DPR 782, 800 (1987); Molina v. CRUV, 114 DPR 295, 321 (1983); *In re* Maldonado Rivera, 103 DPR 523, 526 (1975).
- Génesis de unos honorarios:** *In re* Feliciano, 115 DPR 172, 179 (1984).
- Génesis de unos síntomas:** Cruz v. Centro Médico de PR, 113 DPR 719, 742 (1983); Urrutia v. AAA, 103 DPR 643, 646 n. 2 (1975).
- Génesis de unas operaciones intelectuales:** Pueblo v. Acabá Raíces, 118 DPR 369, 371 (1987).
- Génesis de unas dudas:** PPD v. Gobernador, 111 DPR 8, 36 (1981); PPD v. Gobernador, 110 DPR 783, 789 (1981).
- Pedido cuya génesis es de un cuerpo tan augusto y reverente como el Senado de Puerto Rico:** Pueblo v. González Malavé, 116 DPR 578, 588 (1985).
- Génesis en la dignidad del ser humano:** Andino Torres, *Ex parte*, 151 DPR 794, 807 (2000).
- Génesis en un mandamiento de Cristo:** Academia San Jorge v. JRT, 110 DPR 193, 212 (1980).
- Génesis divina y bíblica:** Pueblo v. Marcano Pérez, 116 DPR 917, 941 (1986).
- Génesis religiosa:** Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 23 n. 4 (1984).
- Génesis procesal angloamericana:** Correa Sánchez v. Registrador, 113 DPR 581, 586 (1982).
- Génesis distinta:** *Id.* en la pág. 587.
- Génesis directa:** PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 364 (1988).
- Génesis modesta:** Pueblo v. Pueblo International, 106 DPR 202, 206 (1977).
- Génesis fáctica:** Reyes Ayala v. Torres Amaral, 130 DPR 743, 744 (1992).
- Génesis escandinava:** Adolfo, Ombudsman v. Cordero, JASAP, 130 DPR 376, 384 (1992).
- Génesis limitada:** Pueblo v. Pueblo International, 106 DPR 202, 206 (1977).
- Génesis más reciente:** PIP v. ELA, 109 DPR 403, 433 (1980).
- Génesis constitucional:** Frente Unido v. CEE, 150 DPR 611, 615 (2000); Pres. del Senado, 148 DPR 737, 762 (1999); El Vocero de PR v. Contralor, 141 DPR 602, 607 (1996); Nogueras v. Rexach Benítez I, 141 DPR 470, 533 (1996); RDT Const. Corp. v. Contralor I, 141 DPR 424, 450 (1996); Regl. Creac. y Func. Unidad Esp. J. Apel., 134 DPR 670, 699 (1993); Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 678, 686 (1991); Culebra Enterprises Corp. v. ELA, 127 DPR 943, 954 (1991); Noriega v. Hernández Colón, 126 DPR 42, 59-60 (1990); Berberena v. Echegoyen, 123 DPR 76, 81 (1988); Ortiz Andújar v. ELA, 122 DPR 817, 831 (1988); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 660 (1985); Negrón Soto v. Gobernador, 110 DPR 664, 671 (1981).
- Génesis estatutaria:** Pueblo v. Báez Molina, 129 DPR 663, 665 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 139 (1989); Ortiz Andújar v. ELA, 122 DPR 817, 831 (1988); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 660 (1985); Morales Narváez v. Gobernador, 112 DPR 761, 765 (1982); Torres v. Municipio de Mayagüez, 111 DPR 158, 160 (1981).
- Génesis jurisprudencial:** Gracia Ortiz v. Policía de PR, 140 DPR 247, 251 (1996); Nieves Vélez v. Bansander Leasing Corp. 136 DPR 827, 852 n. 1 (1994); Pabón Rodríguez y Díaz López, *Ex parte*, 132 DPR 898, 903 (1993); Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 354 (1988); Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 DPR 716, 721 (1981).
- Génesis doctrinaria:** Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 23 n. 5 (1984); Publio Díaz v. ELA, 106 DPR 854, 871 (1978).

ABORDAR ESTE TEMA LES RESULTARÁ RUBORIZANTE, MORTIFICANTE O UN TANTO IRRITANTE”,¹⁴² y “MORTIFIQUE A ALGUNOS O PAREZCA QUIJOTESCO A OTROS”,¹⁴³ A TRAVÉS DEL CRISOL¹⁴⁴ DEL PRISMA¹⁴⁵ DE LA ÓPTICA¹⁴⁶ DE MI ECLÉCTICA¹⁴⁷ PSICOGÉNESIS¹⁴⁸ LITERARIA YA ME HE

Génesis procesal: *In re* Cardona Álvarez, 116 DPR 895, 898 (1986).

Génesis histórica: Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 DPR 716, 720 (1981).

Génesis judicial: Lagares v. ELA, 144 DPR 601, 629 (1997); Cintrón Santana v. Supte. Policía de PR, 131 DPR 1, 8 (1992).

Génesis especulativa: Cintrón Santana v. Supte. Policía de PR, 131 DPR 1, 8 (1992).

Génesis estadual: Coss y UPR v. CEE, 137 DPR 877, 885 (1995).

Oremos: “Todo estudioso del derecho reconoce que la **génesis** de las normas legales que rigen en una sociedad corresponde e intenta tutelar, en sus variadas manifestaciones, fenómenos que arrancan de la naturaleza humana”. Lage v. Central Fed. Savings, 108 DPR 72, 74 (1978). “No se puede desdeñar o negar seriamente la existencia de la ética y la moral, cuyas **génesis** e influencias trascienden la simple lectura de textos y aquel estado ideal metafísico de puro valor inmutable”. PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 308 (1980), citado nuevamente en *In re* Solicitud Cepeda García, 130 DPR 18, 30 (1992). Amén. “Tolón . . . tolón”. Noriega v. Hernández Colón, 126 DPR 42, 75 (1990). Y cf. G. Venegas Lloveras, *Génesis* (1969).

142 Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 106 (1980), citado nuevamente en PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 312 (1980), en Esteves v. Srio. Cám. de Representantes, 110 DPR 585, 596 (1981), en Santiago Mercado v. Cartagena, 112 DPR 205, 222-23 (1982), y en Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 295 (1989). Sin duda, habrá también quienes se hallen:

[E]ntre los polos opuestos en que se debaten algunas de las controversias humanas: el bien y el mal; la juridicidad y la violencia; la legalidad aparente y la ventaja indebida; lo prudente y lo irrazonable; la paridad y la desigualdad; lo espiritual y lo material; lo racional y lo pasional; y, la opresión y la libertad.

Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 (1977), citado nuevamente en Pueblo v. González Malavé, 116 DPR 578, 588 (1985), en Convoc. Sesión Especial Conf. Judicial, 120 DPR 838, 844 (1988), en *In re* Conferencia Judicial, 122 DPR 420, 455 n. 2 (1988), y en Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 684 (1989).

143 Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 246 (1990). Aunque, evidentemente, nuestro jurisprudente de marras gusta compararse con don Quijote, en al menos una ocasión utilizó esa triste figura en forma despectiva, cuando criticó cierta actuación de la mayoría por demostrar una “voluntad-rayana en descoordinada proeza quijotesca”. **Error! Main Document Only.** Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 588 (1994).

144 Mun. de San Juan v. JCA, 149 DPR 263, 297 (1999); El Vocero de PR v. Nogueras II, 138 DPR 642, 654 (1995); El Vocero de PR v. Nogueras I, 138 DPR 103, 132 (1995); *In re* Malavet Rodríguez, 135 DPR 823, 827 (1994); Parrilla v. Ranger American of PR, 133 DPR 263, 279 (1993); *In re* Belén Trujillo, 128 DPR 949, 975 (1991); Díaz García v. Aponte Aponte, 125 DPR 1, 12 (1989); *In re* Nevárez Zavala, 123 DPR 511, 525 (1989); PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 384 (1988); Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 DPR 414, 418 (1985); Reyes v. Jusino, 116 DPR 275, 289 (1985); Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 22 (1984); *In re* Olmo Olmo, 113 DPR 441, 463 (1982); Pueblo v. Caro González, 110 DPR 518, 520 (1980); Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 101, 111 (1980).

145 Véase *supra* nota 116.

146 Con las ópticas ocurre como con los prismas, su variedad es impresionante. Si ello es mera coincidencia o, por el contrario, se debe a la estrecha relación entre ambos términos, es motivo de intenso debate. A continuación la página amarilla de las ópticas, según el Derecho puertorriqueño:

Óptica legislativa: Delgado v. D.S.C.A., 114 DPR 177, 189 (1983); Díaz de Llovet v. Gobernador, 112 DPR 747, 752 (1982).

Óptica judicial: Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 DPR 205, 223 (1982); Esteves v. Srio. Cám. de Representantes, 110 DPR 585, 596 (1981); PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 312 (1980).

Óptica jurisprudencial: Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 101 (1989).

Óptica constitucional: PPD v. Gobernador, 136 DPR 860, 869 (1994).

Óptica doctrinaria: Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 DPR 313, 332 (1986).

Óptica mayoritaria: PAC v. ELA II, 150 DPR 805, 836, 842 (2000); Pueblo v. Báez, 149 DPR 469, 494 (1999); Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 902 (1991).

Óptica clásica: Pueblo v. Uriel Álvarez, 112 DPR 312, 321 n. 4 (1982).

Óptica presente: Pueblo v. Malavé González, 120 DPR 470, 491 (1988).

Óptica estrictamente forense: *In re* Informe Com. Asesora Presidente, 119 DPR 165, 204 (1987).

Óptica estrictamente jurídica: Adolfo, Ombudsman v. Cordero, JASAP, 130 DPR 376, 378 (1992).

Óptica rechazada: Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 382 n. 9 (1990).

Óptica nublada: Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 902 (1991); *In re* Conferencia Judicial, 122 DPR 420, 454 (1988); *In re* Informe Com. Asesora Presidente, 119 DPR 165, 177 (1987).

Óptica limitada: Pueblo v. Báez, 149 DPR 469, 494 (1999).

Óptica empañada, estereotipada o de clisé: Molina v. CRUV, 114 DPR 295, 327 (1983); Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 DPR 610, 619 (1981).

Óptica oscura: PR Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328, 345 (1983).

Óptica nítida: Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 295 (1989); PPD v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199, 320 (1981).

Óptica daltoniana: Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 101 (1989); PIP v. CEE, 120 DPR 580, 630 (1988).

Óptica de la deseabilidad: Pueblo v. Marín Quiñones, 110 DPR 715, 720 (1981).

Óptica de la prueba: Pueblo v. Romero Rodríguez, 112 DPR 437, 461 (1982).

Óptica de motivos fundados: Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254 (1992).

Óptica de récords oficiales: Pueblo v. Jordán Tarraza, 118 DPR 592, 597 (1987).

Óptica de uno u otro: La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, 112 DPR 9, 23 (1982).

Óptica del jurisprudente: PIP v. CEE, 120 DPR 580, 630 (1988).

Óptica de los opositores: Misión Ind. PR v. JP y AAA, 142 DPR 656, 756 (1997).

Óptica de un observador imparcial: PIP v. CEE, 120 DPR 580, 656 (1988).

Óptica (genérica): Rodríguez v. Bco. Gub. de Fom. PR, 151 DPR 383, 425 (2000); López Torres v. González Vázquez, 151 DPR 225, 258 n. 18 (2000); Angueira v. JLBP, 150 DPR 10, 25 (2000); Pueblo v. Negrón Martínez, 144 DPR 873, 894 (1998); Domínguez Maldonado v. ELA, 137 DPR 954, 976 (1995); Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 DPR 623, 639 (1994); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 642 (1993); Soto Rivera v. Ayala Amely, 132 DPR 395, 397 (1992); Pueblo v. Guardiola Dávila, 130 DPR 585, 594 (1992); *In re* Belén Trujillo, 128 DPR 949, 973 (1991); Dolphin Int'l of PR v. Ryder Truck Lines, 127 DPR 869, 897 (1991); Sostre Lacot v. Echlin of PR, Inc., 126 DPR 781, 798 (1990); Medina Bernard v. Adm. Corrección, 126 DPR 800, 807 (1990); Aponte v. Srio. de Hacienda, ELA, 125 DPR 610, 636 (1990); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 157, 286 (1989); Pueblo v. Ramírez Lebrón, 123 DPR 391, 405 (1989); Pueblo v. Lausell Hernández, 121 DPR 823, 841 (1988); PIP v. CEE, 120 DPR 580, 630 (1988) ("Claro está que, en materia de óptica, todo lo hace el ojo humano. Cada ojo tiene su cristalino, pero no todos los cristalinos son iguales. Por eso France decía: 'Cuán distinto se ofrecería el mundo . . . a través del cristalino de un mosquito'". (Cita omitida); Pate v. USA, 120 DPR 566, 570 (1988); Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 DPR 434, 468 (1988); García Cabán v. UPR, 120 DPR 167, 184 (1987); Pueblo v. Valentín Rivera, 119 DPR 281, 284 (1987); *In re* Informe Com. Asesora Presidente, 119 DPR 165, 212 (1987); *In re* Secretario de Justicia, 118 DPR 827, 845 (1987); Pueblo v. Ramos Álvarez, 118 DPR 782, 799 (1987); Torre Ginés v. ELA, 118 DPR 436, 446 (1987); Pueblo v. Acabá Raíces, 118 DPR 369, 374 (1987); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35, 66 (1986); Pueblo v. González Malavé, 116 DPR 578, 588 (1985); Pueblo v. Martínez Martí, 115 DPR 832, 852 (1984); ACAA v. Bird Piñero, 115 DPR 463, 469 (1984); Carle García v. Supte. de la Policía, 114 DPR 667, 673 n. 1 (1983); Raoca Plumbing v. Trans World, 114 DPR 464, 473 (1983); Acosta & Rodas, Inc. v. PRAICO, 112 DPR 583, 599 (1982); Pueblo v. Ríos Álvarez, 112 DPR 92, 98 (1982); Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, 112 DPR 376, 382 (1982); PPD v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199, 320 (1981);

SITUADO EN LA ÓRBITA¹⁴⁹ DE LA SALA DÍAZ CRUZ, DE ESPALDAS AL BUDA, DESDE DONDE ALCANZO A DIVISAR LA COLOSAL ESCULTURA

Tonos Florenzán v. Bernazard, 111 DPR 546, 551 n. 2 (1981); Suro v. ELA, 111 DPR 456, 465 (1981); Santos v. Comisión Estatal de Elecciones, 111 DPR 351, 357 (1981); PSP v. Com. Estatal de Elecciones, 110 DPR 400, 433 (1980).

Y, desde luego, ¿quién sino el creador de tantas ópticas para escribir, como en efecto escribió, la opinión del Tribunal en Col. Ópticos PR v. Pearl Vision Center, 142 DPR 221 (1997), y en E.R. Foods, Inc. v. Lee Optical, 117 DPR 566 (1986)? Es verdaderamente lamentable que el juez Hernández Denton haya cometido un acto de usurpación al redactar la opinión del Tribunal en Colegio de Ópticos de PR v. Vani Visual Center, 124 DPR 559 (1989).

147 Cierta jurisprudente gusta mucho del eclecticismo literario, jurídico y filosófico lo cual no debe sorprender a quien haya leído su muy variada producción literaria. A continuación una eclosión de sus eclecticismos.

Enfoque ecléctico: Pueblo v. Ríos Dávila, 143 DPR 687, 700 (1997); Pueblo ex rel. J.L.D.R., 114 DPR 497, 512 (1983).

Sistema ecléctico: PR Prod. Credit Assoc. v. Registrador, 123 DPR 231, 239 (1989); *In re* Feliciano, 115 DPR 172, 179 (1984).

Grupo ecléctico: Chévere v. Cátala, 115 DPR 432, 440 (1984).

Carácter ecléctico: La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, 112 DPR 9, 24 (1982).

Corriente ecléctica: *In re* Olmo Olmo, 113 DPR 441, 456 (1982).

Fórmula ecléctica: Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 DPR 1, 38 (1987); PPD v. Gobernador, 111 DPR 8, 34 (1981); PPD v. Gobernador, 110 DPR 783, 792 (1981).

Visión ecléctica: *In re* Olmo Olmo, 113 DPR 441, 456 (1982).

Respuesta ecléctica: Vázquez v. Morales, 114 DPR 822, 829 (1983).

Postura ecléctica: San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 711 (1983).

Posición ecléctica: La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, 112 DPR 9, 26 (1982).

Teoría ecléctica: *In re* Olmo Olmo, 113 DPR 441, 463 (1982); Ossorio Ruiz v. Srio. de la Vivienda, 106 DPR 49, 65 (1977).

Solución ecléctica: Academia San Jorge v. JRT, 110 DPR 193, 208 (1980); Figueroa Ferrer v. ELA, 107 DPR 250, 296 (1978).

Vista preliminar ecléctica: Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 667 (1985).

Eclecticismo prudente: Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 405 n. 2 (1991).

148 Pueblo v. Agostini Rodríguez, 151 DPR 426, 433 (2000) (“psicogenética del juzgador”); *In re* Reforma Judicial, 136 DPR 1, 11 (1994) (“psicogénesis forense”); Regl. Creac. y Func. Unidad Esp. J. Apel., 134 DPR 670, 711 (1993) (“psicogenética de juzgar”); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 648 (1993) (“psicogénesis decisoria”); Pueblo v. López Guzmán, 131 DPR 867, 901 (1992) (“psicogenética de juzgar”); Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, 129 DPR 219, 221 (1991) (“psicogénesis decisoria”); Pueblo en interés menor F.S.C., 128 DPR 931, 947 (1991) (“psicogénesis decisoria”); Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 354 (1990) (“psicogénesis del razonamiento”); Pueblo v. González Navarrete, 117 DPR 577, 598 (1986) (“psicogenética de juzgar”); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419, 445 (1986) (“psicogenética de juzgar”); Pueblo v. Marcano Pérez, 116 DPR 917, 942 (1986) (“psicogénesis del robo patológico”); *In re* Cardona Álvarez, 116 DPR 895, 903 (1986) (“psicogénesis decisoria”); Pueblo v. Álamo Álamo, 116 DPR 673, 681 (1985) (“psicogénesis judicial”).

149 El derecho puertorriqueño no tiene nada que envidiarle a la astrofísica en el reconocimiento de órbitas. Orbitemos:

Órbita del poder constituido: Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 415 (1991); *In re* V. Limit. Const., Éticas Judicatura, 136 DPR 693, 700 n. 3 (1994).

Órbita del poder constituyente: Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 415 (1991); *In re* V. Limit. Const., Éticas Judicatura, 136 DPR 693, 700 n. 3 (1994).

Órbita del dueño tercero inocente: Del Toro Lugo v. ELA, 136 DPR 973, 1014 (1994).

Órbita del cráneo: Pueblo v. Adorno Cabrera, 133 DPR 839, 850 (1993).

Órbita electoral-constitucional: PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 378 (1988).

Órbita de jurisdicción original: *In re* Laborde Freyre, 149 DPR 59, 64 (1999).

ACUÁTICA¹⁵⁰ DE AQUEL INSIGNE MAESTRO DE LA DEONTOLOGÍA,¹⁵¹
PRAXIS¹⁵² Y EXÉGESIS¹⁵³ JURÍDICAS, **ABANDERADO DE LA AXIOLOGÍA**

Órbita de jurisdicción disciplinaria: *In re* Secretario de Justicia, 119 DPR 363, 386 (1987); *In re* Feliciano Ruiz, 117 DPR 269, 279 (1986).

Órbita de facultades constitucionales: Torres Rivera v. González Padín & Co. Inc., 133 DPR 656, 664 (1993).

Órbita de los tribunales: *In re* Rodríguez Torres, 106 DPR 698, 770 (1978).

Órbita de los iura in re aliena: Maeso v. The Chase Manhattan Bank, 133 DPR 196, 203 (1996).

Órbita de acción: Pueblo v. Santiago Colón, 125 DPR 442, 451 (1990).

Órbita penal: PR Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328, 335 (1983); *In re* Lavastida, 109 DPR 45, 101 (1979).

Órbita jurídico-constitucional: PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 287 (1980).

Órbita ganancial: García v. Montero Saldaña, 107 DPR 319, 331 (1978).

Órbita judicial: Designación Juez Especial, 119 DPR 411, 414 (1987); JRT v. Marex Const. Co., Inc., 103 DPR 135, 141 (1974).

Órbita procesal: Dolphin Int'l of PR v. Ryder Truck Lines, 127 DPR 869, 896 (1991).

Órbita constitucional: Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 56 (1988); Pueblo v. Flores Rosa, 105 DPR 479, 484 (1976).

Órbita administrativa: Designación Juez Especial, 119 DPR 411, 413 (1987); Santiago Acevedo v. Soler Aquino, 109 DPR 766, 772 (1980); JRT v. Marex Const. Co., Inc., 103 DPR 135, 141 (1974).

Órbita evidenciaria: Dolphin Int'l of PR v. Ryder Truck Lines, 127 DPR 869, 896 (1991).

Órbita distinta: Alonso García v. Comisión Industrial, 103 DPR 183, 187 (1974).

150 Este es un requisito importante. De la mejor pluma sabemos que “la vida humana misma, depende del agua”. Misión Ind. PR v. JP y AAA, 142 DPR 656, 710 n. 1 (1997) (citando a L.Y. OCHART, EL LIBRO DEL AGUA 17 (1996) (mensaje de la autora).

151 *In re* Corona Muñoz I, 141 DPR 640, 648 (1996); Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 DPR 735, 754 n. 21 (1994); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 626 (1993); *In re* Colón Ramery, 133 DPR 555, 580 (1993); *In re* Rodríguez Mercado, 133 DPR 208, 216 (1993); PR Fuels, Inc. v. Empire Gas CO., Inc., 133 DPR 112, 120 n. 5 (1993); *In re* Ocasio Arriaga, 132 DPR 61, 66 (1992); *In re* Colón Muñoz, 131 DPR 121, 171 (1992); *In re* Belén Trujillo, 128 DPR 949, 969 (1991); *In re* Colton Fontán, 128 DPR 1, 6, 8, 9, 107, 111, 112 (1991); García O'Neill v. Cruz, 126 DPR 518, 532, 533, 535 (1990); *In re* Secretario de Justicia, 126 DPR 463, 471, 472 (1990); Vega v. Luna Torres, 126 DPR 370, 376 (1990); Robles Sanabria, *Ex parte*, 126 DPR 382, 384 (1990); *In re* López Olmedo, 125 DPR 265, 275 (1990); *In re* Nevárez Zavala, 123 DPR 511, 524 (1989); Nassar Rizek v. Hernández, 123 DPR 360, 370 (1989); Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 123 DPR 179, 192 (1989); *In re* Santos Vías, 122 DPR 881, 888 (1988); *In re* Calderón Marrero, 122 DPR 557, 566 (1988); *In re* Secretario de Justicia, 119 DPR 363, 364, 390, 393, 398, 400 (1987); *In re* Secretario de Justicia, 118 DPR 827, 843 n. 9, 849, 851, 859, 860, 866, 867 (1987); Pueblo v. Miranda Marchand, 117 DPR 303, 307 (1986); Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 117 DPR 230, 257 n. 1 (1986); *In re* Pizarro Santiago, 117 DPR 197, 203 (1986); *In re* Pagán Ayala, 117 DPR 180, 185 (1986); *In re* Cardona Álvarez, 116 DPR 895, 897, 903, 904 (1986); *In re* Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 DPR 778, 788 (1984); Ades v. Zalman, 115 DPR 514, 523 (1984); Chévere v. Cátala, 115 DPR 432, 438 (1984); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 234 (1984); *In re* Feliciano, 115 DPR 172, 180 n. 6 (1984); B. & L., Inc. v. PR Cast. Steel Corp., 114 DPR 808, 814 (1983); Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 DPR 205, 213 (1982); Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 94, 102, 105 (1980); PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 307, 308, 310 (1980); Colegio de Abogados de PR v. Barney, 109 DPR 845, 850 (1980); *In re* Lavastida, 109 DPR 45, 87, 89, 91, 92, 98, 101, 105, 107 (1979); *In re* Rodríguez Torres, 106 DPR 698, 747 (1978). Para la definición de deontología, consúltese el último caso citado, en la pág. 747 n. 3.

Sobre la deontología judicial, en particular, se ha observado con agudeza que “la adherencia a estas reglas éticas exige reconocer que la conducta subjetivizada se estigmatiza al exteriorizar una particular mentalidad ideológica”. Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 99 (1980). Es por ello que:

[R]emembramos que el jurista [e]ncontrará sin duda un sinfin de ventanas cerradas, de estrellas apagadas, de hombres dormidos. En esta tarea debe saber que no está solo. Su mi-

ÉTICA,¹⁵⁴ PORTAESTANDARTE DE LA PSICODINÁMICA JUDICIAL¹⁵⁵ Y VOLITIVO¹⁵⁶ REPRESENTANTE DEL ALMA DE LA TOGA,¹⁵⁷ EL NOBLE MARCO

sión es revelar lo justo, así como el artista debe descubrir la belleza, y allí, precisamente, radica la grandeza de su oficio. . . Deberá ante todo tener fe y munirse de prudencia. Deberá interrogar a la realidad una y otra vez, pensarla en términos concretos, ilustrarse, y por fin actuar. Recordará que el argumento de la razonabilidad será siempre superior a cualquier fórmula que intente apartarse de él (por más que sea). Tendrá presente que el llamado 'mundo jurídico' no está divorciado del real, sino que es parte integrante e inseparable (en sentido ontológico) de éste. Que no se puede ser buen juez y mal padre de familia; ni buen abogado y mal hermano. El hombre de derecho será ante todo un buen o mal hombre". J. E. Leonetti, El llamado 'mundo jurídico' y la realidad, Rev. La Ley, Año XLVIII, Núm. 50, pág. 1.

Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 600 (1984).

Por supuesto, "[e]sta cita ilustra un pensamiento en abstracto. No se refiere a n[ada]". *Id.* en la pág. 600 n. 1.

152 *In re* López Olmedo, 125 DPR 265, 274 (1990) (*praxis* notarial); *Mun. of San Juan v. Great Ame. Ins. Co.*, 117 DPR 632, 636 (1986) (*praxis* del Tribunal); *Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs.*, 117 DPR 110, 132 (1986) (*ídem*); *Martínez Torres v. Amaro Pérez*, 116 DPR 717, 722 (1985) (*praxis* judicial); *Rodríguez Vidal v. Benvenuti*, 115 DPR 583, 589 (1984) (*ídem*); *In re Feliciano*, 115 DPR 172, 175 (1984) (*ídem*); *B & L, Inc. v. PR Cast. Steel Corp.*, 114 DPR 808, 815 (1983) (*praxis* forense puertorriqueña); *In re Lavastida*, 109 DPR 45, 107 (1979) (*ídem*).

153 *Pueblo v. Zayas Rodríguez*, 147 DPR 530, 552 (1999); *Consejo de Titulares v. CRUV*, 132 DPR 707, 742 n. 5 (1993); *Sucn. Cabassa Voustad v. Rivera*, 130 DPR 823, 830 (1992); *Pérez Mercado v. Martínez Rondón*, 130 DPR 134, 159 (1992); *Ramírez v. Registrador*, 116 DPR 541, 547 (1985); *Lage v. Central Fed. Savings*, 108 DPR 72, 80 (1978); *Canales Velázquez v. Rosario Quiles*, 107 DPR 757, 766 (1978); *Zachry International v. Tribunal Superior*, 104 DPR 267, 276 (1975).

154 *In re Santos Vías*, 122 DPR 881, 888 (1988) ("Bajo esta axiología ética, el Lcdo. Santos Vías incurrió en un serio error de juicio deontológico"). Para otras manifestaciones axiológicas, véase *Ramírez de Ferrer v. Mari Brás*, 144 DPR 141, 209 (1997); *Sánchez y Colón v. ELA I*, 134 DPR 445, 477 (1993); *Sostre Lacot v. Echlin of PR, Inc.*, 126 DPR 781, 791 (1990); *Granados v. Rodríguez Estrada I*, 124 DPR 1, 125 (1989); *In re Calderón Marrero*, 122 DPR 557, 558 (1988); *Calcador Berríos v. Ramírez Pantojas*, 121 DPR 491, 492 (1988); *Núñez v. Cintrón*, 115 DPR 598, 611 (1984); *Ortiz Angleró v. Barreto Pérez*, 110 DPR 84, 98 (1980); *Pueblo v. Ortiz Pepín*, 105 DPR 547, 557 (1977).

155 *Ramos Rivera v. ELA*, 148 DPR 118, 135 (1999); *Misión Ind. PR v. JP*, 146 DPR 64, 195 (1998); *Misión Ind. PR v. JP y AAA*, 142 DPR 656, 758 (1997); *Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia*, 123 DPR 179, 180 (1989); *Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia*, 122 DPR 703, 748 (1988); *Pueblo v. Rivera Robles*, 121 DPR 858, 861, 865 (1988); *Pueblo v. Acabá Raíces*, 118 DPR 369, 371 (1987); *Pueblo v. Rivera Tirado*, 117 DPR 419, 440 (1986). Para otras manifestaciones psicodinámicas, véase *Pueblo v. Agostini Rodríguez*, 151 DPR 426, 430 (2000) ("psicodinámica adjudicativa"); *Pueblo v. León Cortijo*, 146 DPR 394, 420 (1998) (*ídem.*); *Misión Ind. PR v. JP y AAA*, 142 DPR 656, 722 (1997) ("psicodinámica decisoria"); *PPD v. Gobernador I*, 139 DPR 643, 711 (1995) (*ídem.*); *Regl. Creac. y Func. Unidad Esp. J. Apel.*, 134 DPR 670, 715 (1993) (*ídem.*); *Pueblo v. Saliva Valentín*, 130 DPR 767, 781 (1992) ("psicodinámica del concepto de motivos fundados"); *Hernández Torres v. Gobernador*, 129 DPR 824, 850 (1992) ("psicodinámica vital íntima de un espíritu libre"); *Rodríguez Crespo v. Hernández*, 121 DPR 639, 695 (1988) ("psicodinámica de clase"); *Pueblo v. González Navarete*, 117 DPR 577, 598 (1986) ("psicodinámica . . . del proceso criminal").

156 *Sepúlveda de Arrieta v. Barreto*, 137 DPR 735, 757 (1994); *Dolphin Int'l of PR v. Ryder Truck Lines*, 127 DPR 869, 895 (1991); *Granados v. Rodríguez Estrada V*, 127 DPR 1, 347 (1990); *Sostre Lacot v. Echlin of PR, Inc.*, 126 DPR 781, 791 (1990); *Granados v. Rodríguez Estrada I*, 124 DPR 1, 100 (1989); *Nassar Rizek v. Hernández*, 123 DPR 360, 376 (1989); *PR Tel. Co. v. Martínez*, 114 DPR 328, 345 (1983); *Soto v. Srio. de Justicia*, 112 DPR 477, 489 (1982).

AURELIO, [QUIEN] EN SU CAPACIDAD DE SENADOCONSULTO”,¹⁵⁸ CON LA MÁS Estricta JURIDICIDAD CIENTÍFICA,¹⁵⁹ CON ASEPSIA ÉTICA

157 ÁNGEL OSSORIO, EL ABOGADO: EL ALMA DE LA TOGA (Jurídicas Europa-América eds., 6ta ed. 1956), citado en Nogueras v. Hernández Colón, 129 DPR 184, 199 (1991); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 635 (1983); In re Franco Soto, 115 DPR 740, 754 (1984). Quien no simpatice con Ossorio, siempre tendrá disponible a Couture, cuya obra Los Mandamientos del Abogado es también un pie forzado en las opiniones de cierto jurisprudente. Véase Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 DPR 499, 520 (1997); In re Marrero Luna, 140 DPR 217, 217 (1996); Pueblo v. Millán y Rexach, 133 DPR 87, 100 (1993); Noriega v. Hernández Colón, 126 DPR 42, 59 (1990); González v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 749, 755 n. 1 (1989); In re Cardona Álvarez, 116 DPR 895, 903 (1986).

La toga judicial es un tema favorito en las opiniones del magistrado homenajeado. Véase Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 296 (1989) (“Debajo de la toga judicial hay que tener una coraza muy gruesa”); Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141, 217 (1997) (“mientras menos hable la toga, mejor”); In re V. Limit. Const., Éticas Judicatura, 136 DPR 693, 714 (1994), reiterado en Berrios Martínez v. Gobernador II, 137 DPR 195, 265 (1994) (“Históricamente la toga se tiñe de negro, en función de neutralidad político-partidista, ecuanimidad, prudencia y sobriedad. No hay derecho a teñir en forma distinta la toga judicial y después calificar su color como oficial. Tampoco se puede permitir que cada juez haga con su toga lo propio, según le plazca.”); Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 875 (1992), reiterado en Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593, 612 (1992) (“[E] que lleva con orgullo la toga es un ser pensante, sensible e inteligente, y no una computadora o un autó-mata”). Véase también Feliciano Rosado v. Matos, Jr., 110 DPR 550, 584 (1981); Matos v. Eastern Airlines, Inc., 108 DPR 217, 220 (1978); Pueblo v. Ramos Santos, 138 DPR 810, 831 (1995); In re V. Limit. Const., Éticas Judicatura, 136 DPR 693, 708 (1994); In re Rodríguez Torres, 106 DPR 698, 745 (1978); In re Villamil Higuera, 104 DPR 310, 320 (1975); In re Maldonado Rivera, 103 DPR 523, 527 (1975).

158 Rexach Concrete Corp. v. Jardines M. Olivo, 108 DPR 551, 555 (1979). La realización de esta escultura presentará un serio problema de concepción artística, toda vez que un senadoconsulto es un documento: el decreto o determinación del senado romano. 4 J. ESCRICHE, DICCIONARIO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 508 (1977).

De resolverse este dilema dando a la escultura efigie humana, estimo que el modelo para las facciones del senadoconsulto hecho carne no debe ser motivo de debate. Ese honor debe corresponder a un jurista argentino, más famoso en esta Isla que en la tierra de la pampa. Se trata de Alfredo Mooney, cuyos artículos *La elección del Poder Ejecutivo nacional (legalidad versus legitimidad)*, REV. JUR. ARG. LA LEY, 1985 E, pág. 54, y *Comentarios al Estatuto de los Partidos Políticos*, REV. JUR. ARG. LA LEY (1983 A), pág. 772, fueron citados *in extenso* por el magistrado homenajeado en la segunda sala un gran total de dieciséis veces en ocho opiniones emitidas durante un corto período de quince meses, que coincidió con las elecciones generales de 1988. Véase Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 273, 291 (1989); In re Conferencia Judicial, 122 DPR 420, 462 (1988); Mundo Ríos v. Gobernador, 121 DPR 477, 489 n. 3 (1988); Mundo Ríos v. Gobernador, 121 DPR 416, 418, 429 (1988); Grillasca Domech v. CEE, 121 DPR 186, 190 (1988); Díaz Delgado v. PPD, 121 DPR 165, 178 (1988); Convoc. Sesión Especial Conf. Judicial, 120 DPR 838, 842 (1988); PIP v. CEE, 120 DPR 580, 631, 638, 641, 651, 654, 662-63 (1988). A menos de un año del evento electoral de 1992, se produjo la primera de lo que amenazaba con ser otra epidemia de citas de Mooney. Véase Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 445 (1991). Inexplicablemente, sin embargo, las citas de Mooney terminaron.

Esa sequía de citas posteriores de Mooney es chocante porque Mooney es, desde luego, véase Díaz Delgado v. PPD, 121 DPR 165, 178 (1988), el genial originador de la atormentadora disyuntiva, segunda tan solo a la de Hamlet, que se convirtió en el grito de guerra del magistrado de marras: “¡DEMOCRACIA O PARTIDOCRACIA!”. Véase, además de Díaz Delgado: Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 439, 444 (1991); PIP v. CEE, 120 DPR 580, 629, 662 (1988); Grillasca Domech v. CEE, 121 DPR 186, 190 (1988); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 123 (1989); Noriega v. Hernández Colón, 126 DPR 42, 60 (1990); Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 405, 430 (1990); Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 247-48 (1990); AEE y AAA v. PNP, 128 DPR 294, 299 (1991). Aunque nuestro juez protagonista abandonó a Mooney, continuó denunciando los vicios de la “partidocracia”, esa vil “desviación óptica y pervertida de [la democracia]”, García Martínez v. CEE,

141 DPR 593, 602 (1996), hasta que abruptamente abandonó el estrado. Véanse, en orden cronológico: Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 678, 686 (1991); Caribbean Int'l News Corp. v. CEE, 132 DPR 1, 2, 3, 9 (1992); Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445, 452 (1993); Sánchez y Colón v. ELA II, 134 DPR 503, 536 (1993); PPD v. Gobernador I, 136 DPR 860, 862, 865 (1994); Com. Electoral PIP v. CEE, 139 DPR 48, 69 (1995); PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 713, 753 (1995); PPD v. Peña Clos I, 140 DPR 779, 840, 858 (1996); García Martínez v. CEE, 141 DPR 593, 597, 602 (1996); Miranda v. CEE, 141 DPR 775, 798 (1996); PAC v. CEE, 149 DPR 244, 256 (1999); PAC v. ELA, 149 DPR 615, 616 (1999); PAC v. ELA I, 150 DPR 359, 403 (2000); PAC v. ELA II, 150 DPR 805, 848 (2000). Y antes de abandonar las páginas de DPR, el magistrado superó a Mooney, cuando acuñó la genial palabra “**maxipartidocracia**”. Frente Unido v. CEE, 150 DPR 611, 613 (2000).

El abandono de Mooney por nuestro juez homenajead, y la posterior partida de éste último del estrado, afortunadamente no ha significado que la semilla de Mooney haya caído en terreno estéril. El juez Hernández Denton ha recogido la bandera y la ha enarbolado en al menos cuatro ocasiones, mediante referencias a la malsana “partidocracia”. Véase PAC v. ELA I, 150 DPR 359, 390 (2000); Guadalupe v. CEE, 165 DPR 106, 117 (2005); PNP v. De Castro Font II, 172 DPR 883, 898 (2007); Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 102 (2009). ¡Alfredo Mooney vive! ¡Maximuer la partidocracia!

159 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 763 (1981); Colegio de Abogados de PR v. Schneider, 112 DPR 540, 557 (1982).

La “estricta juridicidad” no reclama carácter científico en Aponte v. Sears Roebuck de PR, 144 DPR 830, 852 (1998); Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 610 (1994); Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 405 (1991); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702, 709 (1990); García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193, 215 (1988); Pueblo v. Burgos Torres, 120 DPR 709, 724 (1988); PIP v. CEE, 120 DPR 580, 657 (1988); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 635 (1983); Equity de PR, Inc. v. DACO, 113 DPR 250, 255 (1982); Ramos v. Srio. de Comercio, 112 DPR 514, 520 (1982); PPD v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199, 330 (1981); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 771 (1977).

La juridicidad reclama ser “estricta, pero humana” en Díaz v. ELA, 118 DPR 395, 407 (1987).

Se advierte una “estricta y reflexiva juridicidad de consciencia” en Colegio de Abogados de PR v. Schneider, 112 DPR 540, 562 (1982), así como una “estricta juridicidad . . . en conciencia” en Aponte v. Sears Roebuck de PR, 144 DPR 830, 852 (1998); y en García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193, 215 (1988).

La juridicidad no es estricta sino “correcta” en Pueblo v. Negrón Martínez I, 143 DPR 1, 2 (1997); Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 DPR 499, 520 (1997); Coss y UPR v. CEE, 137 DPR 877, 886 (1995); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985); Pueblo v. Hernández Osorio, 112 DPR 182, 200 (1982); PSP v. Srio. de Hacienda, 110 DPR 313, 325 (1980); Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 94 (1980).

La juridicidad es “absoluta” en De los Ríos v. Meléndez, 141 DPR 282, 307 (1996); Perron v. Corretjer, 113 DPR 593, 604 (1982); Rodríguez Sardenga v. Soto Rivera, 108 DPR 726, 762 (1979).

La juridicidad es “fíel” en Torres Arzola v. Policía de PR, 117 DPR 204, 217 (1986); Pueblo v. Marcano Pérez, 116 DPR 917, 943 (1986).

La juridicidad es “buena” en Pueblo v. Galindo González, 129 DPR 627, 652 (1991); Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 420 n. 5 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 657, 684 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 163, 250, 265 (1989); Pueblo v. Carrasquillo Morales, 123 DPR 690, 712 (1989); Pueblo v. Lausell Hernández, 121 DPR 823, 838 (1988); García Cabán v. UPR, 120 DPR 167, 193 (1987); Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 DPR 114, 123 (1987).

La juridicidad es “recta” en Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 417 (1999); González Rodríguez v. Wal-Mart, Inc., 147 DPR 215, 236 (1998); Hernández v. Hon. Santana Ramos, T.P.I. I, 147 DPR 110, 113 (1998); Bonafont Solís v. American Eagle, 143 DPR 374, 379 (1997); Misión Ind. PR v. JP y AAA, 142 DPR 656, 714 (1997); Nogueras v. Rexach Benítez I, 141 DPR 470, 535 (1996); Urbino v. San Juan Racing Assoc., Inc., 141 DPR 210, 217 n. 5 (1996); PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 727 (1995); El Vocero de PR v. Nogueras II, 138 DPR 642, 656 (1995); CES, UPR v. Gobernador, 137 DPR 83, 86 (1994); Berríos Martínez v. Gobernador II, 137 DPR 195, 281 (1994); Hernández Rivera v. Mun. de Bayamón, 135 DPR 901, 922 (1994); CES v. Gobernador I, 134 DPR 350, 355 (1993); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124

EJEMPLARIZANTE¹⁶⁰ Y CON LA MEJOR VARIEDAD DE BUENA METODOLOGÍA ADJUDICATIVA¹⁶¹ LIMPIARÁ, FIJARÁ Y DARÁ ESPLENDOR,¹⁶²

DPR 1, 173 (1989); PNP y PIP v. Rodríguez Estrada, 122 DPR 490, 508 (1988); PSP v. Com. Estatal de Elecciones, 110 DPR 400, 409 (1980).

La juridicidad es “difícil” en Miranda v. CEE, 141 DPR 775, 797 (1996); PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 382 (1988).

La juridicidad es “dudosa” en Pueblo v. Ramos Santos, 138 DPR 810, 831 (1995).

La juridicidad aparece “disfrazada” en Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141, 217 (1997).

La juridicidad se “pone en jaque” en Pérez Preston v. Aponte, 139 DPR 1010, 1013 (1996).

La juridicidad pierde toda adjetivación en Mun. de San Juan v. JCA, 149 DPR 263, 287, 290 (1999); Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 932 (1997); Soc. de Gananciales v. García Robles, 142 DPR 241, 267 (1997) Álvarez Figueredo v. González Lamela, 138 DPR 958, 975 (1995); Aut. Edif. Pub. v. Unión Indep. Emp. AEP, 130 DPR 983, 988 (1992); Adolfo, Ombudsman v. Cordero, JASAP, 130 DPR 376, 384 (1992); Hernández Torres v. Hernández Colón, 127 DPR 974, 983 (1991); Hernández Torres v. Hernández Colón, 127 DPR 448, 458 (1990); Noriega v. Hernández Colón, 126 DPR 42, 71 (1990); González v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 749, 766 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 618, 684, 686 (1989); De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 496 (1989); González Camacho v. Santos Cruz, 124 DPR 396, 397 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 124, 204, 283 (1989); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 341 (1989); Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 705 (1988); PNP y PIP v. Rodríguez Estrada, 122 DPR 490, 508, 517 (1988); *In re Conferencia Judicial*, 122 DPR 420, 455 n. 2 (1988); Mundo Ríos v. Gobernador, 121 DPR 416, 419 (1988); Convoc. Sesión Especial Conf. Judicial, 120 DPR 838, 844 (1988); Pueblo v. Malavé González, 120 DPR 470, 494 (1988); Ramos v. Condominio Diplomat, 117 DPR 641, 644 (1986); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35, 70 (1986); Pueblo v. Ortiz Tirado, 116 DPR 868, 877 (1986); Ruiz Santiago v. ELA, 116 DPR 306, 308 (1985); Pérez v. Junta Dental, 116 DPR 218, 232 (1985); Pueblo v. Guzmán Camacho, 116 DPR 34, 35, 38 (1984); Marrero v. Mun. de Morovis, 115 DPR 643, 645, 646 (1984); *In re Feliciano*, 115 DPR 172, 181 (1984); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 625 (1983); González Reyes v. Romero Barceló, 114 DPR 406, 424 (1983); Pueblo v. Mena Peraza, 113 DPR 275, 276 (1982); Pueblo v. Olivero Rodríguez, 112 DPR 369, 371 (1982); Negrón Soto v. Gobernador, 110 DPR 664, 665 (1981); Esteves v. Srio. Cám de Representantes, 110 DPR 585, 597 (1981); PSP v. Com. Estatal de Elecciones, 110 DPR 400, 409, 435 (1980); PPD v. Barreto Pérez, 110 DPR 376, 377 (1980); PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 295 (1980); Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 106 (1980); PPD v. Junta Revisora Electoral, 109 DPR 464, 465 (1980); PSP v. ELA, 107 DPR 590, 614 (1978); Pueblo v. Corales Irizarry, 107 DPR 481, 483 (1978); Figueroa Ferrer v. ELA, 107 DPR 250, 283 (1978); Democratic Party v. Tribunal Electoral, 107 DPR 1, 26 (1978); *In re* Rodríguez Torres, 106 DPR 698, 771 (1978); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 (1977).

160 Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 105 n. 9 (1980). Para otras manifestaciones de asepsia en un contexto no quirúrgico, véanse PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 730 (1995) (“asepsia absoluta del ingrediente partidista”); Pueblo v. Saliva Valentín, 130 DPR 767, 781 (1992) (“asepsia bibliotecaria judicial”); Pueblo v. Guerrero Morales, 127 DPR 958, 963 (1991) (“Esta prueba no se dio en el vacío ni en un laboratorio aséptico”); Pueblo v. Robles González, 125 DPR 750, 786 (1990) (“No podemos pretender la asepsia típica de un laboratorio . . .”). Pueblo v. Malavé González, 120 DPR 470, 490 (1988), reiterado en Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 DPR 41, 51-52 (1994) (“férreo producto de un examen o experimento a posteriori en el laboratorio aséptico judicial”); PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 307 (1980) (“una [posición], con retórica elocución, concibe la ética como simple fenómeno psíquico espurio, cuya categoría corresponde a una asepsia gramatical de género literario”). El uso de la palabra asepsia por el protagonista de la segunda sala es consecuencia natural de su obvio interés y pericia excepcional en la disciplina de la medicina, según ilustran sus múltiples pronunciamientos al respecto. Nuestro galeno honorario ha escrito enjundiosos tratados sobre los más diversos aspectos de las ciencias de la salud. Véase Soc. de Gananciales v. Géigel, 145 DPR 663, 675 (1998) (causalgia por laceración del nervio lingual); Martí Méndez v. Abreu Feshold, 143 DPR 520, 536 (1997) (diagnóstico de esofagitis y hernia al hiato, cuando en realidad el paciente sufría un infarto al miocardio); Flores Ramírez v. Maldonado, 138 DPR 722, 738 (1995) (tonsilitis aguda ocasionada por la

invasión de estreptococos hemolíticos); Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 DPR 735, 760 (1994) (blefaroplastia para corregir un xantelasma, pero se produjo un ectropión); Hernández Rivera v. Mun. de Bayamón, 135 DPR 901, 918 (1994) (taquicardia ventricular que cambió a fibrilación ventricular pero no respondió a cardioversión); Morales v. Clínica Femenina de PR, 135 DPR 810, 821 (1994) (esterilización mediante laparoscopia); Ortega v. Pou, 135 DPR 711, 713 (1994) (idem.); Ramos, Escobales v. García, González, 134 DPR 969, 986 (1993) (episiotomía en la línea media a lo largo del perineo desde el introito hasta el músculo externo del esfínter del ano); Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783, 786 (1993) (panophthalmitis); González García v. Mun. de Bayamón, 130 DPR 221, 224 (1992) (apendicitis aguda perforativa (peritonitis)); Miranda v. Soc. Gineco-Obstétrica del Norte, 130 DPR 128, 131 (1992) (liposucción; tromboembolismo pulmonar); Cirino Vizcarrondo v. Clínica Gubern, 129 DPR 977, 1014 (1992) (sutura del omentum o epiplón); Núñez Martínez v. Martínez Rosado, 129 DPR 370, 372 (1991) (sutura de uréter durante histerectomía); Pagán Rivera v. Mun. de Vega Baja, 127 DPR 538, 554 (1989) (pneumonía bilateral severa); Martínez Cruz v. ELA, 126 DPR 170, 179-80 (1990) (edema pulmonar; embarazo ectópico); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 669 (1988) (lesión al uréter); Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380, 394 (1988) (osteogénesis); Pérez Torres v. Bladuell Ramos, 120 DPR 295, 308-09 (1988) (prolapso del cordón umbilical); Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 839 (1987) (pterigión; tratamiento con Thiotepa); Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 DPR 762, 767 (1987) (encefalopatía anóxica; aspiración de meconio; uso de pitocina); Lozada v. ELA, 116 DPR 202, 204 (1985) (hematuria; biopsia renal; hematoma perirrenal); Berríos v. UPR, 116 DPR 88, 100 (1985) (gastroenteritis con deshidratación severa); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 727 (1984) (laceración del mesenterio); Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 600 (1984) (hemorragia secundaria a adenotonsilectomía); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 234 (1984) (causalgia por laceración del nervio lingual); Fernández v. Hosp. Gen. San Carlos, Inc., 113 DPR 761, 771 (1983) (meningitis purulenta); Cruz v. Centro Médico de PR, 113 DPR 719, 724, 729 (1983) (gangrena gaseosa; desbridamiento).

Claro está, se le conoce algún desliz en la disertación sobre las ciencias de la salud, como cuando sugirió que:

Es de conocimiento generalizado que siempre que se interviene quirúrgicamente a una persona, se le deben administrar antibióticos preventivamente para evitar infecciones. No se requiere conocimiento médico-técnico, superespecializado para concluir que el haber practicado un aborto sin haber recetado antibióticos constituye negligencia.

Quiñones v. Duarte Mendoza, 112 DPR 223, 226 (1982) (per curiam de pluma inconfundible). Este desliz fue tan mayúsculo que algunos médicos lo refutaron en la prensa, lo que llevó a nuestro magistrado a intentar corregir el error, trayendo el tema por los cabellos en el próximo caso de impericia que pudo escribir, Cruz v. Centro Médico de PR, 113 DPR 719 (1983). Dijo allí sobre las expresiones en Duarte:

Esas expresiones deben evaluarse a la luz de las circunstancias particulares allí presentes de indebida asepsia y falta de equipo en la realización de un aborto causante de "una infección e inflamación pélvica" en la oficina privada de un médico. No significa que como parte del abecedario médico, en todo caso sea menester la administración de antibióticos, aun en aquellos casos en que conforme la buena práctica de la medicina sea contraindicado.

Id. en la pág. 736 n. 16.

No conforme con este evidente *volta face*, el magistrado procuró que el compilador del Tribunal introdujera esta aclaración como nota al calce en el propio caso de Duarte. Véase Quiñones Mendoza, 112 DPR en la pág. 226 n. *.

Por otro lado, el entusiasmo terapéutico de nuestro magistrado lo llevó en una ocasión a criticar al Tribunal por hacerle a un estatuto una "simple cirugía selectiva" cuando lo que procedía era una extirpación radical, toda vez que "[e]l escalpelo judicial ha de usarse con mano firme". PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 712 (1995), reiterado en PPD v. PNP, 140 DPR 52, 56 (1996). Pero en otra ocasión

hubo de reconocer que “[a] veces, la mejor cirugía estatutaria mata el remedio”. Berríos Martínez v. Gobernador II, 137 DPR 195, 259 (1994).

161 AAA v. Librotex, Inc., 141 DPR 375, 380 (1996); Pueblo v. Adorno Cabrera, 133 DPR 839, 855 (1993); Pérez Mercado v. Martínez Rondón, 130 DPR 134, 154 (1992); Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, 129 DPR 219, 221 (1991); *In re* Colton Fontán, 128 DPR 1, 13 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 253 (1990); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702, 707 (1990); Nassar Rizek v. Hernández, 123 DPR 360, 374 (1989); PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 380 (1988); Maldonado y Negrón v. Marrero y Blanco, 121 DPR 705, 714 (1988); López, Fed. Coms. Unidos v. Mun. de San Juan, 121 DPR 75, 85 (1988); Pueblo v. Mendoza Lozada, 120 DPR 815, 834 (1988); Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 DPR 762, 769 n. 3 (1987); *In re* Secretario de Justicia, 119 DPR 363, 368 (1987); *In re* Secretario de Justicia, 118 DPR 827, 845 (1987); Pueblo v. Acabá Raíces, 118 DPR 369, 374 (1987); Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 DPR 313, 333 (1986); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35, 69 (1986); Pueblo v. Ortiz Tirado, 116 DPR 868, 883 n. 6 (1986); Ruiz Santiago v. ELA, 116 DPR 306, 314 (1985); Pueblo v. Martínez Martí, 115 DPR 832, 845 (1984); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 623 (1983); Molina v. CRUV, 114 DPR 295, 324 (1983); Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477, 485 (1982); Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 DPR 33, 35 (1982).

“Buena metodología adjudicativa” es, presumiblemente, sinónimo de:

“Buena metodología apelativa-adjudicativa”: CES, UPR v. Gobernador, 137 DPR 83, 86 (1994); CES v. Gobernador I, 134 DPR 350, 356 (1993).

“Justa metodología adjudicativa”: *In re* Rigau, Jr., 118 DPR 89, 92 (1986) (per curiam de pluma inconfundible).

“Recta metodología adjudicativa”: Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 553 (1999).

“Metodología adjudicativa a seguirse”: Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 404 n. 7 (1999).

“Metodología adjudicativa institucional”: Pueblo v. González Navarrete, 117 DPR 577, 591 (1986).

“Metodología adjudicativa . . . correcta”: Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 404 (1999); Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64, 189 (1998).

“Metodología adjudicativa preestablecida”: Pueblo v. Rivera Morales, 133 DPR 444, 461 (1993).

“Metodología clara de adjudicación”: Reyes v. Jusino, 116 DPR 275, 277 (1985).

“Completa y justa adjudicación”: Riley v. PRAICO, 131 DPR 58, 63 (1992).

“Justa perspectiva y valoración final adjudicativa”: Pueblo v. Lausell Hernández, 121 DPR 823, 839 (1988).

“Justa y eficiente adjudicación”: Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 DPR 434, 464 (1988).

“Adjudicación recta”: Bco. Central Corp. v. Yauco Homes, Inc., 135 DPR 858, 869 (1994).

“Recta adjudicación”: Pueblo v. Báez, 149 DPR 469, 489 (1999); Pres. del Senado, 148 DPR 737, 746 (1999); Pueblo v. Pérez Velázquez, 147 DPR 777, 786 (1999); Pueblo v. León Cortijo, 146 DPR 394, 409 (1998).

“Evaluar y adjudicar con rectitud”: Pueblo v. García Santiago, 142 DPR 527, 530 (1997).

“Adjudicar en recta juridicidad”: PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 727 (1995).

“Adjudicar en buena juridicidad”: Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 DPR 114, 123 (1987).

“Adjudicar recta y justicieramente”: Quetglas v. Carazo, 134 DPR 644, 646 (1993).

“Adjudicar[] eficaz y justicieramente”: PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 712 (1995).

“Adjudicar[] justicieramente”: Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783, 785 (1993).

“Juzgar justiciera y equitativamente”: Pueblo v. Moreno Morales I, 132 DPR 261, 264 (1992).

“Adjudicar justa e informadamente”: Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 943 (1992).

“Lógica adjudicativa”: Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 587 (1994); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 19 (1993) Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 DPR 33, 35 (1982).

“Recta lógica adjudicativa”: Ramos v. Ortiz, 137 DPR 981, 992 (1995); Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 DPR 41, 56 (1994); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 636 (1993).

“Recta técnica adjudicativa”: PR Fuels, Inc. v. Empire Gas CO., Inc., 133 DPR 112, 118 (1993).

“Sana metodología decisoria”: Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 896 (1991).

“Sana adjudicación”: Torres Solano v. PR Tel. Co., 129 DPR 202, 205 (1991).

“Sana norma de administración adjudicativa”: Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 355 (1988).

A LA PAR QUE RUBRICARÁ,¹⁶³ EL MONUMENTAL INTROITO¹⁶⁴ 
SALA NEGRÓN GARCÍA.¹⁶⁵

“Metodología . . . sabia”: Andino Torres, *Ex parte*, 151 DPR 794, 805 (2000).

“Metodología de labores y patrón decisorio”: Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 109 (1989).

“Metodología clásica”: Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 103 (1989).

“Metodología . . . correcta”: Andino Torres, *Ex parte*, 151 DPR 794, 805 (2000).

“Mesurada metodología jurídica”: Torres Arzola v. Policía de PR, 117 DPR 204, 215 (1986).

“Estricto análisis de metodología judicial”: Green Giant Co. v. Tribunal Superior, 104 DPR 489, 515 (1975).

“Buena metodología técnico-jurídica”: Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 727 (1988).

“Buena metodología decisoria”: Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 672, 694 (1991); Mercado Vega v. UPR, 128 DPR 273, 290 (1991); Aponte v. Srio. de Hacienda, ELA, 125 DPR 610, 631 (1990); Pueblo v. González Malavé, 116 DPR 578, 581 (1985).

“Buena metodología hermenéutica”: ACAA v. Bird Piñero, 115 DPR 463, 470 (1984).

“Buena juridicidad y metodología”: Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 684 (1989).

“Buena técnica judicial dispositiva”: Berberena v. Echevoyen, 128 DPR 864, 889 (1991).

“Buena técnica adjudicativa”: Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141, 217 (1997); PPD v. Gobernador II, 139 DPR 984, 988 (1996); Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 583 (1994); Pueblo v. Moreno Morales I, 132 DPR 261, 264 (1992); Adolfo, Ombudsman v. Cordero, JASAP, 130 DPR 376, 383 (1992); Berberena v. Echevoyen, 123 DPR 76, 86 (1988); Amador v. ACAA, 117 DPR 820, 825 (1986).

“Buena función adjudicativa”: Rexach Benítez v. Gobernador, 119 DPR 521, 535 (1987).

“Buena metodología expositiva”: Cruz v. Centro Médico de PR, 113 DPR 719, 724 (1983).

“Buena teoría de adjudicación”: PR Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328, 350 (1983).

“Justa y pronta adjudicación”: *Ab intestato* Lugo Rodríguez, 151 DPR 572, 581 (2000); Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 136 (1998).

Para otras referencias a la “metodología adjudicativa”, véanse: Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141, 215 (1997); Librotex, Inc. v. AAA, 138 DPR 938, 953 (1995); Morales Morales v. ELA, 126 DPR 92, 114 (1990).

¹⁶² ¿Quién mejor capacitado que nuestro magistrado homenajeado para dar lecciones de redacción en castellano a sus colegas? Véase su reacción a una opinión del juez presidente Pons en Hernández Torres v. Hernández Colón, 127 DPR 974, 991 (1991):

Incidentalmente aclaramos que, al cabo de veinte y cinco (25) años en la Judicatura, coincidimos con el Juez Presidente, Señor Pons Núñez, ‘de que existen muchas personas en todos los niveles que tienen conocimientos suficientes de un idioma para leerlo y entenderlo pero que no pueden escribirlo correctamente’.

Id. en la pág. 991 (cita omitida).

Ello es una verdadera tragedia cuando se trata del español y el autor es puertorriqueño.

¹⁶³ La abundancia de rúbricas en las opiniones de cierto jurisprudente llenaría de envidia al más excelso calígrafo. ¿Será que, en la versión del himno del Colegio de Mayagüez que prácticamente nadie conoce, *un rayo le rubricó?*

Rúbrica legal: Ades v. Zalman, 115 DPR 514, 519 (1984).

Rúbrica judicial: *In re* V. Limit. Const., Éticas Judicatura, 136 DPR 693, 706, 710 (1994); Brea v. Pardo, 113 DPR 217, 229 (1982); Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 DPR 205, 219 (1982); PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 309 (1980); JRT v. UTIG, 110 DPR 237, 242 (1980); Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 104 (1980).

- Rúbrica tradicional del poder de razón de estado:** Román v. Trib. Examinador de Médicos, 116 DPR 71, 77 (1985).
- Rúbrica de un *amicus curiae*:** Pueblo v. González Malavé, 116 DPR 578, 581 (1985).
- Rúbrica de reforma:** Correa Sánchez v. Registrador, 113 DPR 581, 587 (1982).
- Rúbrica de Poder Judicial:** *In re* Informe Com. Asesora Presidente, 119 DPR 165, 172 (1987).
- Rúbrica de Delitos Contra la Función Pública:** *In re* Franco Soto, 115 DPR 740, 752 (1984).
- Rúbrica de Delitos Contra Derechos Civiles:** PR Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328, 342 (1983).
- Rúbrica de teoría del Derecho transitorio o intertemporal:** Vázquez v. Morales, 114 DPR 822, 823 (1983).
- Rúbrica de comisionados especiales:** Regl. Creac. y Func. Unidad Esp. J. Apel., 134 DPR 670, 695 (1993).
- Rubrica del notario:** Western Fed. Savs. Bank v. Registrador, 139 DPR 328, 342 (1995).
- Rubricar una escritura:** Western Fed. Savs. Bank v. Registrador, 139 DPR 328, 342 (1995).
- Rubricar una hoja:** Western Fed. Savs. Bank v. Registrador, 139 DPR 328, 342 (1995).
- Rubricar una copia certificada:** Western Fed. Savs. Bank v. Registrador, 139 DPR 328, 342 (1995).
- Rubricar una posición:** Pérez v. Junta Dental, 116 DPR 218, 237 (1985).
- Rubricar una condición:** Oliveras v. Paniagua Diez, 115 DPR 257, 263 (1984); Pueblo v. Olivero Rodríguez, 112 DPR 369, 374 (1982).
- Rubricar una opinión:** PNP v. Hernández, 122 DPR 362, 381 (1988); Pagán Caraballo v. Silva, Ortiz, 122 DPR 105, 114 (1988).
- Rubricar una decisión:** Vega v. Luna Torres, 126 DPR 370, 375 (1990).
- Rubricar una visión:** Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 913 (1991).
- Rubricar una reglamentación:** Pueblo v. Báez, 149 DPR 469, 496 (1999).
- Rubricar una tesis:** Vázquez v. Morales, 114 DPR 822, 832 (1983); Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 DPR 770, 778 (1982).
- Rubricar una premisa:** La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, 112 DPR 9, 20 (1982).
- Rubricar una doctrina:** Pérez Mercado v. Martínez Rondón, 130 DPR 134, 157 (1992); Aponte v. Srio. de Hacienda, ELA, 125 DPR 610, 635 (1990).
- Rubricar una nulidad:** PNP v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1, 49 (1988).
- Rubricar una política:** Dávila Dávila v. ELA, 128 DPR 419, 422 (1991).
- Rubricar una teoría:** Pueblo v. Rivera Torres, 121 DPR 128, 147 (1988).
- Rubricar una práctica:** Pérez Torres v. Bladuell Ramos, 120 DPR 295, 318 (1988).
- Rubricar una técnica judicial:** Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 903 (1991).
- Rubricar un anticlímax:** Guzmán Concepción, *Ex parte*, 121 DPR 629, 632 (1988); Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 DPR 1, 20 (1988).
- Rubricar un relato incriminatorio:** Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 27 (1984).
- Rubricar un interés legislativo:** CRUV v. Hampton Dev., 112 DPR 59, 65 (1982).
- Rubricar un producto:** Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 153 (1989); PSP v. Com. Estatal de Elecciones, 110 DPR 400, 417 (1980).
- Rubricar un croquis:** Pueblo v. Torres García, 137 DPR 56, 65 (1994).
- Rubricar un instrumento:** Sucn. Santos v. Registrador, 108 DPR 831, 837 (1979).
- Rubricar unos anejos:** *In re* Nieves Ortiz, 144 DPR 918, 919 (1998).
- Rubricar unos folios:** *Ab intestato* Lugo Rodríguez, 151 DPR 572, 579 (2000).
- Rubricar unos métodos de diseño:** Misión Ind. PR v. JP y AAA, 142 DPR 656, 715 (1997).
- Rubricar unos pronunciamientos:** Nogueras v. Rexach Benítez I, 141 DPR 470, 529 (1996).
- Rubricar unos precedentes judiciales:** Nogueras v. Rexach Benítez I, 141 DPR 470, 529 (1996).
- Rubricar judicialmente:** Pérez Torres v. Bladuell Ramos, 120 DPR 295, 318 (1988).
- Rubricar la validez constitucional de una ley:** Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 741 n. 25 (1988).
- Rubricarse la regla o norma de "apariciencia de parcialidad":** Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 DPR 205, 214 (1982).
- 164 Pres. del Senado, 148 DPR 737, 773 (1999); Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 DPR 1, 28 (1987); Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 DPR 205, 213 (1982); Academia San Jorge v. JRT, 110 DPR

193, 207 (1980); PSP v. Srio. de Hacienda, 110 DPR 313, 321 (1980); Rivera Pitre v. Galarza Martínez, 108 DPR 565, 567 (1979).

165 El introito a esta sala debe estar precedido por un cartel con un prólogo apropiado. Son muchas las opiniones del juez Negrón García que contienen prólogos. Algunos de estos prólogos se encuentran al comienzo de la opinión; otros al comienzo de la discusión de materias particulares. Existe una opinión que, según originalmente emitida, contenía un *prólogo* al final de una larga opinión de 46 páginas. Al publicarse en JTS, sin embargo, se substituyó inexplicadamente la palabra *prólogo* por *epílogo*. Véase Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 91 JTS 92, 9019 (1991). Luego, al publicarse en DPR, se substituyó "epílogo" por "preámbulo". 129 DPR 402, 445 (1991). Hay opiniones con más de un prólogo. Algunos prólogos son originales del autor; la mayoría reproduce el pensamiento de otros autores, muy en particular de juristas de la tierra de San Martín (el de Argentina, no el de Porres). A continuación un listado de estas opiniones prologadas, que usualmente también son prolijamente prolongadas: Andino Torres, *Ex parte*, 151 DPR 794, 797 (2000); Pueblo v. Agostini Rodríguez, 151 DPR 426, 429 (2000); Herrero v. Alcalde, Mun. de San Juan, 150 DPR 696, 700 (2000); Angueira v. JLBP, 150 DPR 10, 16 (2000); UTIER v. AEE, 149 DPR 498, 522 (1999); Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 399 (1999); *In re* Laborde Freyre, 149 DPR 59, 64 (1999); Pueblo v. De Jesús, 148 DPR 995, 1005 (1999); Ortiz v. U. Carbide Grafito, Inc., 148 DPR 860, 861 (1999); Pres. del Senado, 148 DPR 737, 746 (1999); Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 DPR 539, 576 (1999); Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel. de Fam., 148 DPR 201, 222 (1999); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153 (1999); Ramos Rivera v. ELA, 148 DPR 118, 132 (1999); Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 580 (1999); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 552 (1999); Báez Galib v. Rosselló González I, 147 DPR 371, 372 (1999); González v. Quintana, 145 DPR 463, 465 (1998); Aponte v. Sears Roebuck de PR, Inc., 144 DPR 830, 852 (1998); Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 750 (1998); García v. Hosp. Reg. de Guayama, 143 DPR 829, 832 (1997); Martí Méndez v. Abréu Feshold, 143 DPR 520, 536 (1997); Misión Ind. PR v. JP y AAA, 142 DPR 656, 710 (1997); Soc. de Gananciales v. García Robles, 142 DPR 241, 261 (1997); Soc. de Gananciales v. Paniagua Diez, 142 DPR 98, 100 (1996); Miranda v. CEE, 141 DPR 775, 794 (1996); Pueblo v. Lebrón, 141 DPR 736, 738 (1996); *In re* Corona Muñoz I, 141 DPR 640, 642 (1996); Nogueras v. Rexach Benítez I, 141 DPR 470, 512 (1996); RDT Const. Corp. v. Contralor I, 141 DPR 424, 446 (1996); U. Ciencias Méd. S.J. Bautista v. ELA, 141 DPR 403, 405 (1996); JRT v. Corp. del Conserv. Música PR, 140 DPR 407, 447 (1996); Cám. Comer. Mayoristas PR v. Hernández, 140 DPR 325, 327 (1996); Bonilla Medina v. PNP, 140 DPR 294, 306 (1996); Pueblo v. Figueroa Garriga, 140 DPR 225, 240 (1996); *In re* Marrero Luna, 140 DPR 217 (1996); PPD v. PNP, 140 DPR 52, 55 (1996); PPD v. Gobernador II, 139 DPR 984, 986 (1996); PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 706 (1995); Western Fed. Savs. Bank v. Registrador, 139 DPR 328, 338 (1995); Com. Electoral PIP v. CEE, 139 DPR 48, 66 (1995); Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 DPR 412, 414 (1995); El Vocero de PR v. Nogueras I, 138 DPR 103, 130 (1995); Besosa v. Corp. Azucarera de PR, 137 DPR 939, 946 (1995); Asoc. Maestros PR v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 578 (1994); Berríos Martínez v. Gobernador II, 137 DPR 195, 259 (1994); CES, UPR v. Gobernador, 137 DPR 83, 86 (1994); Soc. de Gananciales v. Srio. de Justicia, 137 DPR 70, 71 (1994); *In re* V. Limit. Const., Éticas Judicatura, 136 DPR 693, 695 (1994); Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 793 (1994); UPR v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 DPR 335, 404 (1994); Hernández Rivera v. Mun. de Bayamón, 135 DPR 901, 915 (1994); *In re* Malavet Rodríguez, 135 DPR 823, 824 (1994); Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 DPR 623, 633 (1994); Levy v. Aut. Edif. Públicos, 135 DPR 382, 384 (1994); Fed. Pesc. Playa Picúas v. U.S. Inds., Inc., 135 DPR 303, 341 (1994); Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 DPR 41, 51 (1994); Kantara Maly v. Castro Montañez, 135 DPR 1, 3 (1994); Fuertes v. ARPE, 134 DPR 947, 949 (1993); Regl. Creac. y Func. Unidad Esp. J. Apel., 134 DPR 670, 695 (1993); Quetglas v. Carazo, 134 DPR 644, 645 (1993); Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445, 452 (1993); CES v. Gobernador I, 134 DPR 350, 352 (1993); Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 134 DPR 181, 221 (1993); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599, 624 (1993); *In re* Colón Ramery, 133 DPR 555, 571 (1993); *In re* Rodríguez Mercado, 133 DPR 208, 216 (1993); Casiano, Jr. v. Borintex Mfg. Corp., 133 DPR 127, 128 (1993); PR Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 133 DPR 112, 114 (1993); Pueblo v. Millán y Rexach, 133 DPR 87, 100 (1993); Martínez Díaz v. ELA, 132 DPR 200, 204 (1992); *In re* Ocasio Arriaga, 132 DPR 61, 66 (1992); Pueblo v. López Guzmán, 131 DPR 867, 900 (1992); Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593, 605 (1992); Riley v. PRA.I.Co., 131 DPR 58, 59 (1992); Aut. Edif. Púb. v. Unión Indep. Emp. AEP, 130 DPR 983, 985 (1992); Fuentes v. A.R.Pe., 130 DPR 971, 972 (1992); *In re*

Martínez Texidor, 130 DPR 905, 906 (1992); *In re* Colón Muñoz, 131 DPR 121, 168 (1992); Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 923 (1992); Torres v. ELA, 130 DPR 640, 653 (1992); Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 234 (1992); Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 319 (1992); Adolfo, Ombudsman v. Cordero, JASAP, 130 DPR 376, 377 (1992); González García v. Mun. de Bayamón, 130 DPR 221, 222 (1992); The Coca-Cola Co. v. Mun. de Carolina, 130 DPR 213, 214 (1992); Pérez Mercado v. Martínez Rondón, 130 DPR 134, 154 (1992); Rivera Maldonado v. Cabrera Olivera, 130 DPR 39, 41 (1992); Carrón Lamoutte v. Compañía de Turismo, 130 DPR 70, 88 (1992); Pueblo v. Rosario Igartúa, 129 DPR 1055, 1081 (1992); Cirino Vizcarrondo v. Clínica Gubern, 129 DPR 977, 1006 (1992); Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 849 (1992); Zambrana Maldonado v. ELA, 129 DPR 740, 761 (1992); Tribunal Examinador de Médicos v. Flores, 129 DPR 687, 688 (1991); Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 678, 680 (1991); Pueblo v. Galindo González, 129 DPR 627, 650 (1991); Cardona v. Depto. Recreación y Deportes, 129 DPR 557, 573 (1991); Gierbolini Rodríguez v. Gobernador, 129 DPR 402, 404 (1991); Ortiz v. Autoridad de Tierras, 129 DPR 213, 214 (1991); Torres Solano v. PR Tel. Co., 129 DPR 202, 203 (1991); Nogueras v. Hernández Colón, 129 DPR 184, 185 (1991); Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, 129 DPR 219, 221 (1991); *In re* Belén Trujillo, 128 DPR 949, 962 (1991); Pueblo en interés menor F.S.C., 128 DPR 931, 945 (1991); Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 888 (1991); Pueblo v. Echevarría Rodríguez II, 128 DPR 752, 785 (1991); Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 618, 653 (1991); Pueblo v. Rosa Atilés, 128 DPR 603 (1991); Soto v. Caribe Shipping Co., Inc., 128 DPR 385, 405 (1991); AEE y AAA v. PNP, 128 DPR 294 (1991); Mercado Vega v. UPR, 128 DPR 273, 289 (1991); Silva v. Adm. Sistemas de Retiro, 128 DPR 256, 270 (1991); *In re* Colton Fontán, 128 DPR 1, 6 (1991); Dolphin Int'l of PR v. Ryder Truck Lines, 127 DPR 869, 888 (1991); Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638, 679 (1991); Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638, 655 (1991); JRT v. Junta de Retiro para Maestros, 127 DPR 621, 632 (1990); Méndez Corrada v. Ladi's Place, 127 DPR 568, 569 (1990); Pagán Rivera v. Mun. de Vega Alta, 127 DPR 538, 549 (1989); Rodríguez Ruiz v. AEE, 127 DPR 485 (1990); Hernández Torres v. Hernández Colón, 127 DPR 448, 450 (1990); Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 405, 429 (1990); Granados v. Rodríguez Estrada V, 127 DPR 1, 2, 46 (1990); Medina Bernard v. Adm. Corrección, 126 DPR 800, 803 (1990); Banco de Santander v. Rosario Cirino, 126 DPR 591, 597 (1990); Sostre Lacot v. Echlin of PR, Inc., 126 DPR 781, 782 (1990); *In re* Secretario de Justicia, 126 DPR 463, 471 (1990); *In re* Cruz Cruz, 126 DPR 448, 451 (1990); Vega v. Luna Torres, 126 DPR 370, 371 (1990); Noriega v. Hernández Colón, 126 DPR 42, 58 (1990); Santiago Hodge v. Parke Davis Co., 126 DPR 1, 17 (1990); Pueblo v. Robles González, 125 DPR 750, 766-67 (1990); Kogan v. Registrador, 125 DPR 636, 682 (1990); Pueblo v. Santiago Colón, 125 DPR 442, 443 (1990); Vélez Toro v. Látimer, 125 DPR 109, 114 (1990); Pueblo en interés menor E.L.G., 124 DPR 819, 823 (1989); González v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 749, 755 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada IV, 124 DPR 720, 721 (1989); U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 DPR 448, 450-51 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 100-01 (1989); *In re* Nevárez Zavala, 123 DPR 511, 512 (1989); Nassar Rizek v. Hernández, 123 DPR 360, 365 (1989); Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 123 DPR 179, 180 (1989); Berberena v. Echegoyen, 123 DPR 76, 81 (1988); PNP v. Rodríguez Estrada, Pres. CEE, 123 DPR 1, 41 (1988); Pueblo Int'l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 DPR 703, 704 (1988); Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650, 692 (1988); *In re* Calderón Marrero, 122 DPR 557, 558 (1988); PNP y PIP v. Rodríguez Estrada, 122 DPR 490, 505 (1988); *In re* Conferencia Judicial, 122 DPR 420, 449 (1988); PNP v. Hernández, Srio. DTOP, 122 DPR 362, 363 (1988); Pueblo v. Lausell Hernández, 121 DPR 823, 825 (1988); Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 860 (1988); García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193, 215 (1988); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 668 (1988); Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600, 602 (1988); Calcador Berríos v. Ramírez Pantojas, 121 DPR 491, 492 (1988); Mundo Ríos v. Gobernador, 121 DPR 416, 418 (1988); Grillasca Domenech v. CEE, 121 DPR 186, 187 (1988); Díaz Delgado v. PPD, 121 DPR 165, 178 (1988); Convoc. Sesión Especial Conf. Judicial, 120 DPR 838, 841 (1988); Saavedra v. Joyerías Gordons, Inc., 120 DPR 360, 360-61 (1988); PIP v. CEE, 120 DPR 580, 629 (1988); Pueblo v. Arandes de Celis, 120 DPR 530, 543 (1988); Pueblo v. Martínez Torres, 120 DPR 496, 509 (1988); Pueblo v. Malavé González, 120 DPR 470, 483 (1988); Fernández Sánchez v. Fernández Rodríguez, 120 DPR 422, 429 (1988); Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380, 393 (1988); Acevedo Benítez v. F.S.E., 120 DPR 333 (1988); Pérez Torres v. Bladuell Ramos, 120 DPR 295, 310 (1988); Pueblo v. Morales Díaz, 120 DPR 249, 250 (1987); García Cabán v. UPR, 120 DPR 167, 184 (1987); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 213 (1987); Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 DPR 1, 28 (1987); Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 DPR

762, 767 (1987); Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 DPR 550, 552 (1987); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 268 (1987); *In re Informe Com. Asesora Presidente*, 119 DPR 165, 169 (1987); *In re Secretario de Justicia*, 118 DPR 827, 831 (1987); Asoc. Res. Baldrich, Inc. v. JP de PR, 118 DPR 759, 761 (1987); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 702 (1987); Imp. Vilca, Inc. v. Hogares CREA, Inc., 118 DPR 679, 681 (1987); Pueblo v. López Rodríguez, 118 DPR 515, 519 (1987); Díaz v. ELA, 118 DPR 395, 397 (1987); Pueblo v. Acabá Raíces, 118 DPR 369, 371 (1987); Vicéns v. UPR, 117 DPR 771, 772 (1986); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419, 423 (1986); *In re Pagán Ayala*, 117 DPR 180, 182 (1986); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35, 66 (1986); Pueblo v. Marcano Pérez, 116 DPR 917, 933 (1986); *In re Cardona Álvarez*, 116 DPR 895, 897 (1986); Pueblo v. Ortiz Tirado, 116 DPR 868, 875 (1986); Pueblo v. González Malavé, 116 DPR 578, 579 (1985); H.F., Inc. v. Registrador, 116 DPR 433, 435 (1985); Ortiz Morales v. ACAA, 116 DPR 387 (1985); Reyes v. Jusino, 116 DPR 275, 277 (1985); Lozada v. ELA, 116 DPR 202, 204 (1985); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 175 (1985); Berrios v. UPR, 116 DPR 88, 90 (1985); Díaz Marez v. F.S.E., 116 DPR 50, 50-51 (1985); Pueblo v. Guzmán Camacho, 116 DPR 34, 35 (1984); Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 3-5 (1984); Pueblo v. Martínez Martí, 115 DPR 832, 845 (1984); PRP. v. ELA, 115 DPR 631, 633 (1984); Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 600 (1984); Rodríguez Vidal v. Benvenuti, 115 DPR 583, 584 (1984); Colón v. CRUV, 115 DPR 503, 504 (1984); Chévere v. Cátala, 115 DPR 432, 434 (1984); Pueblo v. Conde Pratts, 115 DPR 307, 328 (1984); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 234 (1984); Hernández Colón v. Srio. de Hacienda, 115 DPR 145, 152 (1984); Vázquez v. Morales, 114 DPR 822, 823 (1983); B. & L., Inc. v. PR Cast. Steel Corp., 114 DPR 808, 813 (1983); Crespo v. H.R. Psychiatric Hosp., Inc., 114 DPR 796, 797 (1983); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 623 (1983); PR Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328, 330 (1983); Molina v. CRUV, 114 DPR 295, 320 (1983); Cruz v. Centro Médico de PR, 113 DPR 719, 721 (1983); Rodríguez v. Barreto, 113 DPR 541, 546 (1982); Pueblo v. Lebrón González, 113 DPR 81, 82 (1982); Pueblo v. Morales Rivera, 112 DPR 463, 464 (1982); Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, 112 DPR 376, 377 (1982); Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 DPR 205, 212 (1982); Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 DPR 33, 34 (1982); Pueblo v. Bou Nevárez, 111 DPR 179, 189 (1981); PPD v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199, 320 (1981); Negrón Soto v. Gobernador, 110 DPR 664, 665 (1981); Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 DPR 610, 611 (1981); PPD v. Barreto Pérez, 110 DPR 376, 377 (1980); PSP v. Srio. de Hacienda, 110 DPR 313, 314 (1980); PSP, PPD, PIP v. Romero Barceló, 110 DPR 248, 287 (1980); JRT v. UTIG, 110 DPR 237, 239 (1980); Academia San Jorge v. JRT, 110 DPR 193, 196 (1980); Blatt & Udell v. Core Cell, 110 DPR 142, 147 (1980); Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 94, 107 (1980); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 716 (1980); PIP v. ELA, 109 DPR 403, 414 (1980); *In re Lavastida*, 109 DPR 45, 87 (1979); Casera Foods, Inc. v. ELA, 108 DPR 850, 851 (1979); Sucn. Santos v. Registrador, 108 DPR 831, 833 (1979); Rodríguez Sardenga v. Soto Rivera, 108 DPR 733, 761-62 (1979); Lage v. Central Fed. Savings, 108 DPR 72, 74 (1978); PSP v. ELA, 107 DPR 590, 612, 618 (1978); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495, 497 (1978); Pueblo v. Corales Irizarry, 107 DPR 481, 483 (1978); García v. Montero Saldaña, 107 DPR 319, 322 (1978); Figueroa Ferrer v. ELA, 107 DPR 250, 279 (1978); Democratic Party v. Tribunal Electoral, 107 DPR 1, 26 (1978); *In re Rodríguez Torres*, 106 DPR 698, 745 (1978); Pueblo v. Torres Lozada, 106 DPR 588, 631 (1977); Jordán-Rojas v. Padró-González, 103 DPR 813, 815 (1975); García v. AFF, 103 DPR 356, 357 (1975); Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314, 315 (1975); JRT v. Marex Const. Co., Inc., 103 DPR 135, 136 (1974).

La decisión sobre cuál debe ser el prólogo que contenga el cartel de entrada es harto difícil. Propongo que combinemos dos y los coloquemos sucesivamente. El prólogo superior debe ser aquella famosa, precisa y coherentísima manifestación, digna de Descartes (René, no Sol Luis), que nunca me cansaré de estudiar:

[L]a adherencia a estas reglas éticas exige reconocer que la conducta subjetivizada se estigmatiza al exteriorizar una particular mentalidad ideológica.

Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 DPR 84, 99 (1980).

Véase *supra* nota 151. El prólogo inferior debe ser un pasaje atribuible, por supuesto, a Alfredo Mooney. Véase *supra* nota 158. “[L]o que no se puede hacer es negar el problema”. Mooney, *supra* nota 158, *Comentarios al Estatuto de los Partidos Políticos*, en la pág. 772, citado en Mundo Ríos v. Gobernador, 121 DPR 477, 488-89 n. 3 (1988). A la salida de esta sala debe, naturalmente, colocarse

otro cartel con un epílogo, véase *supra* nota 115. Este epílogo debe resumir el sentimiento típico que embargará al abogado puertorriqueño tras contemplar la exhibición en esta segunda sala. Con perdón de los juristas no cristianos, no cabe duda de cuál debe ser ese epílogo: “ELI, ELI, ¿LAMA SABACTANI?” *Nogueras v. Hernández Colón*, 127 DPR 638, 688 (1991). Afortunadamente, como nos recordó el juez Negrón García escasamente un mes antes de retirarse, “*Tempus fugit*’ (El tiempo vuela.)”. *PAC v. ELA II*, 150 DPR 805, 849 (2000). *Deo gratia*.